



**CONTRALORIA**  
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

CONTROL CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD POR EL CAQUETA

**CONSTANCIA SECRETARIAL**  
**Proceso de Responsabilidad Fiscal N°1148**

El día 06 de noviembre del 2020, me permito dejar constancia que el auto que antecede fue debidamente notificado por estado N°20 del 06 de Noviembre del 2020, que reposa en 26 folios en la AZ de la Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal donde reposan todo el estado.

**LIESEL JOULLETH CORREA FORERO**

Secretaria

Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal



Calle 13 No 15- 00 piso 3 centro  
Florencia- Caquetá



NIT. 891.190.246-1  
(8) 4352391 – 4353199  
Línea gratuita: 018000978515



contactenos@contraloriadelcaqueta.gov.co  
info@contraloriadelcaqueta.gov.co

Florencia 12 de junio de 2021

Señores  
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CAQUETÁ  
Gobernación del Caquetá  
Florencia

PRESUNTO RESPONSABLE : RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT  
PROCESO : RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO  
RADICADO : PRF- 1148

EL Director del CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN de la Universidad de la Amazonia, para los efectos consagrados en el artículo 30 del decreto 196 de 1971.

HACE CONSTAR:

Que, DARWIN ALEXANDER PLAZAS VARÓN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.006.504.634, expedida en Florencia-Caquetá y código de estudiante No. 1610077735, residente en la dirección transversal 2A no 11 - 34 B/ El Edén, número de celular 3106694221, correo electrónico [dar.plazas@udla.edu.co](mailto:dar.plazas@udla.edu.co) - [darwinplazas8@gmail.com](mailto:darwinplazas8@gmail.com), sustituye el presente proceso por terminar estudios de pregrado designando el Consultorio Jurídico al estudiante, STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNÁNDEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.006.502.411 expedida en Florencia-Caquetá, código de estudiante No. 1810084821, No. de celular 3143553740, residente en la dirección carrera 15 No 8A - 50 B/ Juan XXIII, correo electrónico [s.olarte@udla.edu.co](mailto:s.olarte@udla.edu.co), estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad y está adscrita al Consultorio Jurídico en el presente periodo académico y por considerarlo (a) persona idónea se autoriza para ejercer y representar a RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, dentro del proceso de la referencia.

(Decreto 765 de 1º. De abril de 1977 – Art. 3º.) (Ley 270 de 1996 – Art. 3º.).

El incumplimiento de los deberes como estudiante del Consultorio Jurídico, acarreará las sanciones disciplinarias (Acuerdo 01 del 2009 del Consejo Académico en sus artículos 25 y ss).

La presente constancia tiene vigencia hasta la terminación del presente proceso.

  
**ISRAEL JAVIER GAITÁN RAMOS**  
Director Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

Digitó: Judith

64909

**DILIGENCIA DE POSESIÓN DEL DEFENSOR DE OFICIO ESTUDIANTE DESIGNADO DEL CONSULTORIO JURIDICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD ORDINARIO NÚMERO 1148**

**CONTRA: RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURTH**

En la Ciudad de Florencia, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), mediante solicitud realizada por la estudiante de Derecho STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.006.502.411, expedida en Florencia, Caquetá.; y carné estudiantil No. 1810084821, solicita a este Ente de Control la posesión como defensora de oficio del señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURTH, implicado en el PRF No. 1148, designada por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonia, según oficio sin radicado de fecha 12 de agosto de 2021, expedido por el doctor ISRAEL JAVIER GAITAN RAMOS, Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, para tomar posesión del cargo de **Defensora de Oficio** para la defensa del implicado señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURTH, dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, que se tramita en este órgano de control fiscal, hasta la terminación del presente proceso, por sustitución que realiza al estudiante de Derecho DARWIN ALEXANDER PLAZAS VARON. **Reconócese** personería jurídica al posesionado para actuar como defensor de oficio del señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURTH.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 del 2011, el estudiante posesionado como defensora de oficio del implicado AUTORIZA a esta entidad que se le notifique de las decisiones que son de notificación personal CORREO ELECTRONICO:

s.olarte@udla.edu.co. Se le hace entrega de un ejemplar del auto de apertura No. 025 del 18 de diciembre de 2018, del Proceso de responsabilidad Fiscal No. 1148.

En tal virtud y ante la Secretaría, el abogado Profesional Universitario y la Directora Técnica de la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, se entiende que se recibió el juramento con las formalidades legales al estampar su firma, por cuya gravedad prometió cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone y manifestó no tener ninguna clase de impedimento para ejercer el cargo de defensor de oficio en el presente proceso.

De la misma manera se le dejó revisar el expediente proceso responsabilidad fiscal 1148.

Para constancia se firma la presente diligencia una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron.

NOMBRE DEL POSESIONADO:

Stefanny Michelly Olarte Hernandez  
C.C. 1.006.502. Florencia

FIRMA DEL POSESIONADO:

Stefanny Michelly Olarte Hernandez

DIRECCIÓN RESIDENCIAL:

Cra 15 # 8A - 50 Barrio Juan XXIII

CELULAR No.:

3143553740

CORREO ELECTRONICO AUTORIZADO

s.olarte@udla.edu.co

Abog. DIRECTORA TECNICA DE  
RESPONSABILIDAD FISCALCDC.

FIRMA Ingrid Exilenia Valenzuela Toledo  
INGRID EXILENIA VALENZUELA TOLEDO

Abog. PROFESIONAL UNIVERSITARIO CDC.

FIRMA Edgar Medina Perez  
EDGAR MEDINA PEREZ

Abog. SECRETARIA DEPENDENCIA CDC.:

FIRMA: Liesel Joulleth Correa Forero  
LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.006.502.411

OLARTE HERNANDEZ

APELLIDOS

STEFANNY MICHELLY

NOMBRES

Michelly O



FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-2001

FLORENCIA (CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

B+

ESTATURA

SEXO F

25-ABR-2018 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DACTILO



00665142944 1 00665142944 1

264



Universidad de la  
**Amazonia**

Nombres:

**STEFANNY MICHELLY**

Apellidos:

**OLARTE HERNANDEZ**

Documento de Identidad:

**1006502411**

Código Estudiantil:

**1810084821**

**DERECHO  
ESTUDIANTE**

Código verificación: H1MA1FBZYF

G.S. RH: B+





# Contraloría

## DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

265

**AUTO POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y ASIGNA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS CON RADICADO NÚMEROS 1076, 1077, 1078, 1083, 1085, 1090, 1110, 1116, 1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128, 1132, 1133, 1145, 1148, 1154, 1157, 1174, 1162, 1175, 1163, 1166, 1168, 1171, 1172, 1173, 1176, 1187, 1193.**

En la ciudad de Florencia Caquetá a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022) la suscrita DIRECTORA TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CAQUETÁ, procede avocar conocimiento de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la referencia, en virtud de la competencia prevista en la Resolución N° 229 del 25 de agosto de 2015, (manual de funciones y competencias laborales) modificada parcialmente por Resolución N° 0115 del 02 de mayo de 2019 y las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011, modificadas parcialmente por el decreto 403 del 16 de marzo de 2020.

### CONSIDERACIONES

*Que la Constitución Política en el Título X De los Organismos de Control – Capítulo 1 De la Contraloría General de la República – artículos 267, “La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos (...)” No obstante frente a los departamentos le corresponde a las contralorías territoriales vigilar la Gestión Fiscal de la administración y los particulares que manejen fondos del Estado.*

La facultad conferida al Contralor General de la República conforme al numeral 5 del artículo 268 de la Carta Magna se extiende a los Contralores Territoriales, Distritales y Municipales, que para tal efecto le corresponde

*“(...) Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación (...)”*

A su turno el artículo 272 ibidem, contempla que: “

*La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República. (...)*

*La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.*

Que mediante acta No.644 del 19 de enero de 2022, la suscrita Servidora Pública, se posesionó en el cargo de Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal en la Contraloría



# **Contraloría**

## **DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**

Nit. 891.190.246-1

Departamental del Caquetá, nombrada mediante acto administrativo Resolución No.024 del 18 de enero de 2022.

Que la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal, de acuerdo al manual de funciones Resolución No.229 del 25 de agosto de 2015, modificada parcialmente por la Resolución No.0115 del 2 de mayo de 2019, tiene la facultad de avocar y adelantar Procesos de Responsabilidad Fiscal que correspondan a la entidad de control, de conformidad con las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011, modificadas parcialmente por el decreto 403 del 16 de marzo de 2020.

Por lo anteriormente expuesto,

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Avocar conocimiento y asignar la sustanciación y trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Números **1076, 1077, 1078, 1083, 1085, 1090, 1110, 1116, 1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128, 1132, 1133, 1145, 1148, 1154, 1157, 1174, 1162, 1175, 1163, 1166, 1168, 1171, 1172, 1173, 1176, 1187, 1193** a el doctor **EDGAR MEDINA PÉREZ**, Profesional Universitario, adscrito a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

### **CÚMPLASE**

**MARYI FRAIDENY NARVÁEZ CASTILLO**  
Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal



Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

266

**PROCESO PRF 1136**

1 mensaje

**Edgar Medina Perez** <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

4 de abril de 2022, 8:17

Para: s.olarte@udla.edu.co

En atención a su petición relacionada en el asunto, comedidamente me permito informar que el estado actual es en apertura y antes de imputación.

Cordialmente,

EDGAR MEDINA PEREZ  
Abog, Sustanciador.



Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

26

**ESTADO PRF 1148**

2 mensajes

**Edgar Medina Perez** <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

4 de abril de 2022, 8:12

Para: s.olarte@udla.edu.co

En atención a su petición relacionado con el asunto, comedidamente me permito informar que el estado actual del mencionado proceso es en apertura y antes de imputación.

Cordialmente,  
EDGAR MEDINA PEREZ  
Abog. Sustanciador.

**Edgar Medina Perez** <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

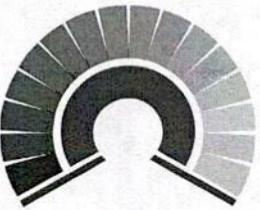
4 de abril de 2022, 8:23

Para: s.olarte@udla.edu.co

Comedidamente me permito rectificar el estado actual del proceso de responsabilidad No. 1136, en el sentido de hacer caso omiso a mi correo respecto del mismo, toda vez que el mencionado proceso no se encuentra a mi cargo. El trámite realizado por ud será trasladado al abogado sustanciador que lo tiene a cargo

[El texto citado está oculto]

268



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ  
Nit. 891.190.246-1

**AUTO POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y ASIGNA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS CON RADICADO NÚMEROS 1077, 1078, 1083, 1085, 1090, 1110, 1116, 1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128, 1132, 1133, 1145, 1148, 1154, 1157, 1174, 1162, 1175, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1176, 1187, 1188, 1193.**

En la ciudad de Florencia Caquetá a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), la suscrita DIRECTORA TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CAQUETÁ, procede avocar conocimiento de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la referencia, en virtud de la competencia prevista en la Resolución N° 229 del 25 de agosto de 2015, (manual de funciones y competencias laborales) modificada parcialmente por Resolución N° 0115 del 02 de mayo de 2019 y las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011, modificadas parcialmente por el decreto 403 del 16 de marzo de 2020.

**CONSIDERACIONES**

*Que la Constitución Política en el Título X De los Organismos de Control – Capítulo 1 De la Contraloría General de la República – artículos 267, “La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos (...)” No obstante frente a los departamentos le corresponde a las contralorías territoriales vigilar la Gestión Fiscal de la administración y los particulares que manejen fondos del Estado.*

La facultad conferida al Contralor General de la República conforme al numeral 5 del artículo 268 de la Carta Magna se extiende a los Contralores Territoriales, Distritales y Municipales, que para tal efecto le corresponde

*“(...) Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación (...)”*

A su turno el artículo 272 ibidem, contempla que: “

*La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República.*

*(...)*

*La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.*

Que mediante acta No.650 del 25 de abril de 2022, la suscrita Servidora Pública, se posesionó en el cargo de Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal en la Contraloría Departamental del Caquetá, nombrada mediante acto administrativo Resolución No.099 del 25 de abril de 2022.

Que la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal, de acuerdo al manual de funciones Resolución No.229 del 25 de agosto de 2015, modificada parcialmente por la Resolución No.0115 del 2 de mayo de 2019, tiene la facultad de avocar y adelantar Procesos de Responsabilidad Fiscal que correspondan a la entidad de control, de conformidad con las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011,

Por lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Avocar conocimiento y asignar la sustanciación y trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Números 1077, 1078, 1083, 1085, 1090, 1110, 1116, 1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128, 1132, 1133, 1145, 1148, 1154, 1157, 1174, 1162, 1175, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1176, 1187, 1188, 1193 a el doctor **EDGAR MEDINA PÉREZ**, Profesional Universitario, adscrito a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Contra la presente decisión no procede recurso alguno.



**CÚMPLASE**

**PAOLA ANDREA MARIN VALDES**  
Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS  
PUBLICOS**

Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá

Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

 @contraloriadelcaqueta  @ContraloriaDC

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

www.cdc.gov.co



Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

**Fwd: SOLICITUD ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 1148**

2 mensajes

Liesel Joullieth Correa Forero <lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co>  
Para: Edgar Medina Perez <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

2 de mayo de 2022, 16:14

para su conocimiento y fines pertinentes

----- Forwarded message -----

De: **Stefanny Michelly Olarte Hernandez** <s.olarte@udla.edu.co>

Date: lun, 2 may 2022 a las 15:13

Subject: SOLICITUD ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 1148

To: Liesel Joullieth Correa Forero &lt;lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

Florencia, 02 de mayo de 2022

Señores CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
Florencia – Caquetá

Asunto: Solicitud Estado de Proceso.

STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ identificada con cedula de ciudadanía N° 1006502411 de Florencia Caquetá, en calidad de representante de oficio del señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT, dentro del proceso con radicado 1148, Agradezco su atención.

Atentamente,

STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ

C.C: 1.006.502.411 Florencia, Caquetá

Practicante de Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonia

Código estudiantil: 1810084821

Correo electrónico: s.olarte@udla.edu.c



El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

**LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO**

SECRETARIA

Correo: lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co

Liesel Joullieth Correa Forero <lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co>  
Para: Edgar Medina Perez <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

23 de mayo de 2022, 16:45



290

El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

**LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO**  
SECRETARIA

Correo: [lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co](mailto:lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co)

Florencia, 15 de marzo de 2022.

271

Señores

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL**

Florencia – Caquetá

Asunto: Solicitud Estado de Proceso.

**STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 1006502411 de Florencia Caquetá, en calidad de representante de oficio del señor **RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT**, dentro del proceso con radicado 1148, respetuosamente solicito se me informe el estado actual en el que se encuentra el proceso.

Agradezco su atención.

Atentamente,



---

**STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ**

C.C: 1.006.502.411 Florencia, Caquetá

Practicante de Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonia

Código estudiantil: 1810084821

Correo electrónico: [s.olarte@udla.edu.co](mailto:s.olarte@udla.edu.co)



Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

**PRF 1148**

1 mensaje

272

**Edgar Medina Perez** <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

1 de junio de 2022, 8:01

Para: s.olarte@udla.edu.co

En atención a su petición respecto al asunto de la referencia, comedidamente me permito informarle que en la actualidad el proceso se encuentra en apertura y antes de imputación.

Cordialmente,

EDGAR MEDINA PEREZ

Abog. Sustanciador.



Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

**SOLICITUD ESTADO DEL PROCESO 1148**

3 mensajes

273

**Stefanny Michelly Olarte Hernandez** <s.olarte@udla.edu.co>

26 de julio de 2022, 14:39

Para: "Emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co" &lt;Emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

Cc: Contraloria Caquetá &lt;info@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

Florescia, 27 de julio de 2022

Señores

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

Florescia – Caquetá

Asunto: Solicitud Estado de Proceso.

STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ identificada con cedula de ciudadanía N° 1006502411 de Florescia Caquetá, en calidad de representante de oficio del señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT, dentro del proceso con radicado 1148, Agradezco su atención.

Atentamente,

STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ

C.C: 1.006.502.411 Florescia, Caquetá

Practicante de Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonia

Código estudiantil: 1810084821

Correo electrónico: s.olarte@udla.edu.c

**Liesel Joullieth Correa Forero** <lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co>

26 de julio de 2022, 15:12

Para: Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

para su conocimiento y fines pertinentes

----- Forwarded message -----

De: **Contraloria Caquetá** <info@contraloriadelcaqueta.gov.co>

Date: mar, 26 jul 2022 a las 14:57

Subject: Fwd: SOLICITUD ESTADO DEL PROCESO 1148

To: Hermes Torres Nuñez &lt;hermes.torres@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;, Liesel Joullieth Correa Forero

&lt;lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;, Paola Andrea Marin Valdes &lt;paola.marin@

contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

[El texto citado está oculto]

--

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

Edificio de la Gobernación, Cra. 13 No. 15-00 Piso 4 Fax: 4352391 – 4353199 Cel: 3208859894

www.cdc.gov.co - Email: info@contraloriadelcaqueta.gov.co

Línea Transparente: 018000978515



El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

**LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO**

SECRETARIA

Correo: [lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co](mailto:lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co)

---

**Edgar Medina Perez** <[emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co](mailto:emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co)>

Borrador

27 de julio de 2022, 10:01

[El texto citado está oculto]

**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

**PRF 1148**

1 mensaje

274

**Edgar Medina Perez** <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

27 de julio de 2022, 10:03

Para: s.olarte@udla.edu.co

En atención a su petición respecto del estado actual del proceso No. 1148, comedidamente me permito informarle que el mismo se encuentra en estado de apertura y antes de imputación.

Cordialmente,

**EDGAR MEDINA PEREZ**  
Abog, Sustanciador



Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

**SOLICITUD ESTADO DEL PROCESO N 1148**

2 mensajes

275

**Stefanny Michelly Olarte Hernandez** <s.olarte@udla.edu.co>  
Para: Edgar Medina Perez <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>  
Cc: Contraloria Caquetá <info@contraloriadelcaqueta.gov.co>

27 de septiembre de 2022, 15:19

Florescia, 27 de septiembre de 2022.

Señores

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

Florescia – Caquetá

Asunto: Solicitud Estado de Proceso.

STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ identificada con cedula de ciudadanía N° 1006502411 de Florescia Caquetá, en calidad de representante de oficio del señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT, dentro del proceso con radicado 1148, Agradezco su atención.

Atentamente,

STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ

C.C: 1.006.502.411 Florescia, Caquetá

Practicante de Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonia

Código estudiantil: 1810084821

Correo electrónico: s.olarte@udla.edu.co

**Liesel Joullieth Correa Forero** <lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co>  
Para: Edgar Medina Perez <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

27 de septiembre de 2022, 17:06

para su conocimiento y fines pertinentes

----- Forwarded message -----

De: **Contraloria Caquetá** <info@contraloriadelcaqueta.gov.co>

Date: mar, 27 sept 2022 a las 15:28

Subject: Fwd: SOLICITUD ESTADO DEL PROCESO N 1148

To: Hermes Torres Nuñez &lt;contralor@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;, Paola Andrea Marin Valdes &lt;paola.marin@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;, Liesel Joullieth Correa Forero &lt;lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

[El texto citado está oculto]

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA  
El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos  
Edificio de la Gobernación, Cra. 13 No. 15-00 Piso 4 Fax: 4352391 – 4353199 Cel: 3208859894  
www.cdc.gov.co - Email: info@contraloriadelcaqueta.gov.co  
Línea Transparente: 018000978515



El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

**LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO**

SECRETARIA

Correo: [lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co](mailto:lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co)



Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

**Estado PRF 11148**

1 mensaje

276

**Edgar Medina Perez** <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

11 de octubre de 2022, 11:02

Para: s.olarte@udla.edu.co

En atención a su petición respecto del asunto, comedidamente me permito manifestarle que el mismo se encuentra en apertura y antes de imputación.

Cordialmente,

EDGAR MEDINA PÉREZ  
Abog. Sustanciador.

277

Florencia, 28 de Octubre de 2022

Señores  
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CAQUETÁ  
Gobernación del Caquetá  
Florencia



PRESUNTO RESPONSABLE  
PROCESO  
RADICADO

: RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT  
: RESPONSABILIDAD FISCAL  
: PRF- 1148

Quién Radica Luceider H  
Radicado 39216 / CR 7462  
Asunto 1 H  
Fecha 01/12/2022  
Hora 08:30:00

El Director del CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN de la Universidad de la Amazonia, para los efectos consagrados en el artículo 30 del decreto 196 de 1971.

HACE CONSTAR:

Que, STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.006.502.411, expedida en Florencia-Caquetá, código estudiantil No.1810084821, residente en la dirección, carrera 15 No.8A-50 Barrio Juan XXIII, numero de Celular 3143553740, correo electrónico institucional, [s.olarte@udla.edu.co](mailto:s.olarte@udla.edu.co), sustituye el presente proceso por terminar estudios de pregrado designando el Consultorio Jurídico al estudiante, **JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.11449452, expedida en Facatativá - Cundinamarca, código estudiantil No.1910087014, residente en la dirección, Calle 15 No.4-06 Edificio Luna y Estrella, Barrio Porvenir, numero de Celular 3185494034, correo electrónico institucional [John.ortiz@udla.edu.co](mailto:John.ortiz@udla.edu.co), estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad y está adscrito (a) al Consultorio Jurídico en el presente periodo académico y por considerarlo (a) persona idónea se autoriza para ejercer y representar a RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT, dentro del proceso de la referencia.

(Decreto 765 de 1° de Abril de 1977 – Art. 3°) (Ley 270 de 1996 – Art. 3°)

El incumplimiento de los deberes como estudiante del Consultorio Jurídico, acarreará las sanciones disciplinarias (Acuerdo 01 del 2009 del Consejo Académico en sus artículos 25 y ss).

La presente constancia tiene vigencia hasta la terminación del presente proceso.

  
**ISRAEL JAVIER GAITÁN RAMOS**

Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

Digitó: Judith Silva

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
[atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co](mailto:atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co)  
[www.uniamazonia.edu.co](http://www.uniamazonia.edu.co)  
Florencia Caquetá



Florencia, 28 de Octubre de 2022

Señores  
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CAQUETÁ  
Gobernación del Caquetá  
Florencia



Quién Radica Lucelider H  
Radicado 39216 / CR 7462  
Fecha 1 H  
Hora 01/12/2022  
08:30:00

PRESUNTO RESPONSABLE : RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT  
PROCESO : RESPONSABILIDAD FISCAL  
RADICADO : PRF- 1148

El Director del CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN de la Universidad de la Amazonia, para los efectos consagrados en el artículo 30 del decreto 196 de 1971.

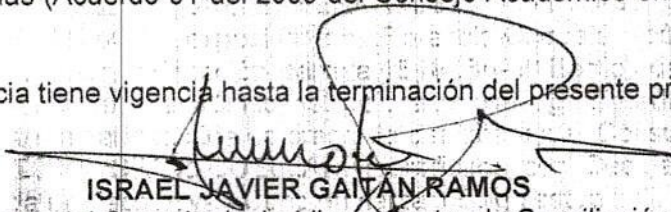
HACE CONSTAR:

Que, STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.006.502.411, expedida en Florencia-Caquetá, código estudiantil No.1810084821, residente en la dirección, carrera 15 No.8A-50 Barrio Juan XXIII, numero de Celular 3143553740, correo electrónico institucional, [s.olarte@udla.edu.co](mailto:s.olarte@udla.edu.co), sustituye el presente proceso por terminar estudios de pregrado designando el Consultorio Jurídico al estudiante, JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR, identificado con Cédula de Ciudadanía No.11449452, expedida en Facatativá - Cundinamarca, código estudiantil No.1910087014, residente en la dirección, Calle 15 No.4-06 Edificio Luna y Estrella, Barrio Porvenir, numero de Celular 3185494034, correo electrónico institucional [John.ortiz@udla.edu.co](mailto:John.ortiz@udla.edu.co), estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad y está adscrito (a) al Consultorio Jurídico en el presente periodo académico y por considerarlo (a) persona idónea se autoriza para ejercer y representar a RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT, dentro del proceso de la referencia.

(Decreto 765 de 1° de Abril de 1977 - Art. 3°) (Ley 270 de 1996 - Art. 3°)

El incumplimiento de los deberes como estudiante del Consultorio Jurídico, acarreará las sanciones disciplinarias (Acuerdo 01 del 2009 del Consejo Académico en sus artículos 25 y ss).

La presente constancia tiene vigencia hasta la terminación del presente proceso.

  
ISRAEL JAVIER GAITÁN RAMOS  
Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

Digitó: Judith Silva

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 8F Barrio El Porvenir  
[atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co](mailto:atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co)  
[www.uniamazonia.edu.co](http://www.uniamazonia.edu.co)  
Florencia Caquetá





CONTROL CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD POR EL CAQUETÁ

**DILIGENCIA DE POSESIÓN DEL DEFENSOR DE OFICIO ESTUDIANTE DESIGNADO DEL CONSULTORIO JURIDICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD ORDINARIO NÚMERO 1148**

**CONTRA: RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH**

En la Ciudad de Florencia, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), mediante solicitud realizada por el estudiante de Derecho JOHN EDWIN ORTIZ CUÉLLAR, identificado con cédula de ciudadanía número 11.449.452, expedida en Facatativá, Cundinamarca y carné estudiantil No.1910087014, solicita a este Ente de Control la posesión como defensor de oficio del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH, implicado en el PRF No. 1148, designado por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonia, según oficio sin radicado de fecha 28 de octubre de 2022, expedido por el doctor ISRAEL JAVIER GAITAN RAMOS, Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, para tomar posesión del cargo de **Defensor de Oficio** para la defensa de la implicado señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH, dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, que se tramita en este órgano de control fiscal, hasta la terminación del presente proceso, por sustitución que hace de la estudiante STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNÁNDEZ. **Reconózcase** personería jurídica al posesionado para actuar como defensora de oficio del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH.

Se deja de presente que este Ente de Control no posee Expedientes Digitales, y por tanto se debe revisar en horas laborales de lunes a viernes, del cual se puede solicitar copias con cargo a su pecunio o toma de fotografías de los folios del expediente.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 del 2011, el estudiante posesionado como defensora de oficio del implicado AUTORIZA a esta entidad que se le notifique de las decisiones que son de notificación personal CORREO ELECTRONICO:

john.ortiz@udla.edu.co. Se deja constancia que el defensor de oficio manifiesta que no desea entrega de un ejemplar del auto de Apertura No. 025 del 18 de diciembre de 2018, del Proceso de responsabilidad Fiscal No. 1148, **toda vez que ya lo posee por entrega de quien sustituye.**

En tal virtud y ante la Secretaría, el abogado Profesional Universitario y la Directora Técnica de la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, se entiende que se recibió el juramento con las formalidades legales al estampar su firma, por cuya gravedad prometió cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone y manifestó no tener ninguna clase de impedimento para ejercer el cargo de defensor de oficio en el presente proceso.

Para constancia se firma la presente diligencia una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron.

NOMBRE DEL POSESIONADO:

John Edwin Ortiz Cuellar  
C.C. 11449452

FIRMA DEL POSESIONADO:

*[Firma manuscrita]*

DIRECCIÓN RESIDENCIAL:

Cra 11N-5-69 Consultorio UOLA

CELULAR No.:

3185494034 - 3224423334

CORREO ELECTRONICO AUTORIZADO

john.ortiz@udla.edu.co

Abog. DIRECTORA TECNICA DE  
RESPONSABILIDAD FISCAL

FIRMA:  
PAOLA ANDREA MARÍN VALDÉS

Abog. PROFESIONAL UNIVERSITARIO CDC.

FIRMA:  
EDGAR MEDINA PEREZ

Abog. SECRETARIA DEPENDENCIA CDC.:

FIRMA:  
LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

280



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1984

PUERTO RICO

(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

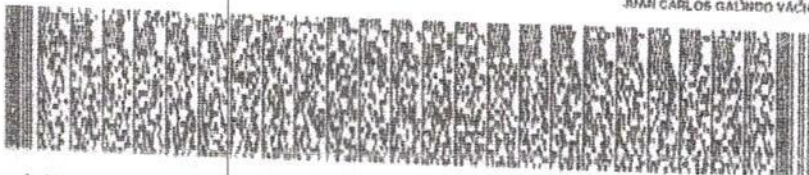
M

SEXO

22-OCT-2002 FACATATIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



A-1903400-01082644-M-0011449452-20190710

0066215555A 1

53258330

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 11.449.452

ORTIZ CUELLAR

APELLIDOS

JOHN EDWIN

NOMBRES

*[Signature]*  
FIRMA





Universidad de la  
**Amazonia**

Nombres:  
**JOHN EDWIN**  
Apellidos:  
**ORTIZ CUELLAR**  
Documento de Identidad:  
**11449452**  
Código Estudiantil:  
**1910087014**  
**DERECHO**  
**ESTUDIANTE**



Código verificación: H1HA1FHBYF

G.S. RH+A+



Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

**ESTADO ACTUAL PRF No. 1148**

1 mensaje

**Edgar Medina Perez** <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>  
Para: john.ortiz@udla.edu.co

14 de diciembre de 2022, 15:35

Señor  
John Edwin:

En atención a su solicitud al momento de tomar posesión como defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, comedidamente me permito informarle que el estado actual del proceso de la referencia es con apertura y antes de imputación.

Cordialmente,  
EDGAR MEDINA PÉREZ  
Abog. Sustanciador.



Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

**Solicitud Estado del Proceso PRF-1148**

1 mensaje

**John Edwin Ortiz Cuellar** <john.ortiz@udla.edu.co>

31 de enero de 2023, 10:44

Para: "emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co" &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

Cc: "sofitelsa@gmail.com" &lt;sofitelsa@gmail.com&gt;

Buen día Dr. EDGAR MEDINA, de manera deferente solicito a usted, me suministre información respecto del Estado Actual del Proceso de Responsabilidad Fiscal N°1148, seguido contra el señor RODRIGO ANDRES BETANCOURT.

Agradezco su gestión y apoyo.

Respetuosamente,

JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR

Estudiante Adscrito al Consultorio Jurídico de la universidad de la Amazonia

Defensor de Oficio PRF-1148

Celular: 3185494034 / 3224423334

254

**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

**ESTADO PRF 1148**

1 mensaje

**Edgar Medina Perez** <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

31 de enero de 2023, 10:41

Para: john.ortiz@udla.edu.co

Respetado señor defensor de oficio JOHN EDWIN ORTIZ:

En atención a su petición relacionado con el estado del proceso de la referencia, comedidamente me permito informarle que el mismo está con auto de apertura y antes de imputación.

Cordialmente,

EDGAR MEDINA PÉREZ

Abog. Sustanciador.

**AUTO POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y ASIGNA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS CON RADICADO NÚMEROS 1110, 1116, 1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128, 1132, 1133, 1145, 1148, 1154, 1157, 1174, 1162, 1175, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1176, 1187, 1188, 1193, 1206**

En la ciudad de Florencia Caquetá a los primeros (01) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés 2023, el suscrito DIRECTOR TÉCNICO DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CAQUETÁ, procede avocar conocimiento de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la referencia, en virtud de la competencia prevista en la Resolución N° 229 del 25 de agosto de 2015, (manual de funciones y competencias laborales) modificada parcialmente por Resolución N° 0115 del 02 de mayo de 2019 y las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011, modificadas parcialmente por el decreto 403 del 16 de marzo de 2020.

#### CONSIDERACIONES

*Que la Constitución Política en el Título X De los Organismos de Control – Capítulo 1 De la Contraloría General de la República – artículos 267, “La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos (...)” No obstante frente a los departamentos le corresponde a las contralorías territoriales vigilar la Gestión Fiscal de la administración y los particulares que manejen fondos del Estado.*

La facultad conferida al Contralor General de la República conforme al numeral 5 del artículo 268 de la Carta Magna se extiende a los Contralores Territoriales, Distritales y Municipales, que para tal efecto le corresponde

*“(...) Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación (...)”*

A su turno el artículo 272 ibidem, contempla que: “

*La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República.*

*(...)*

*La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.*

Que mediante acta No.653 del 01 de febrero del 2023 el suscrito Servidor Público, se posesionó en el cargo de Director Técnico de Responsabilidad Fiscal en la Contraloría Departamental del Caquetá, nombrada mediante acto administrativo Resolución No.0028 del 01 de febrero del 2023.

Que el Director Técnico de Responsabilidad Fiscal, de acuerdo al manual de funciones Resolución No.229 del 25 de agosto de 2015, modificada parcialmente por la Resolución No.0115 del 2 de mayo de 2019, tiene la facultad de avocar y adelantar Procesos de Responsabilidad Fiscal que correspondan a la entidad de control, de conformidad con las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011,

Por lo anteriormente expuesto,

#### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Avocar conocimiento y asignar la sustanciación y trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Números 1110, 1116, 1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128, 1132, 1133, 1145, 1148, 1154, 1157, 1174, 1162, 1175, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1176, 1187, 1188, 1193, 1206 al doctor **EDGAR MEDINA PÉREZ**, Profesional Universitario, adscrito a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

CÚMPLASE

  
**LUIS FELIPE MURCIA MEJÍA**  
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS  
PUBLICOS**

AUTO POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y ASIGNA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS CON RADICADO NÚMEROS 1148, 1154, 1157, 1174, 1162, 1175, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1176, 1187, 1188, 1193, 1206, 1222.

En la ciudad de Florencia Caquetá al primer (01) día del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024) la suscrita DIRECTORA TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CAQUETÁ, procede avocar conocimiento de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la referencia, en virtud de la competencia prevista en la Resolución N° 229 del 25 de agosto de 2015, (manual de funciones y competencias laborales) modificada parcialmente por Resolución N° 0115 del 02 de mayo de 2019 y las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011, modificadas parcialmente por el decreto 403 del 16 de marzo de 2020.

#### CONSIDERACIONES

*Que la Constitución Política en el Título X De los Organismos de Control – Capítulo 1 De la Contraloría General de la República – artículos 267, “La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos (...)” No obstante frente a los departamentos le corresponde a las contralorías territoriales vigilar la Gestión Fiscal de la administración y los particulares que manejen fondos del Estado.*

La facultad conferida al Contralor General de la República conforme al numeral 5 del artículo 268 de la Carta Magna se extiende a los Contralores Territoriales, Distritales y Municipales, que para tal efecto le corresponde

*“(...) Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación (...)”*

A su turno el artículo 272 ibidem, contempla que: “

*La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República.*

*(...)*

*La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.*

Que mediante acta No.658 del 29 de diciembre del 2023 la suscrita Servidora Pública, se posesionó en el cargo de Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal en la Contraloría Departamental del Caquetá, nombrada mediante acto administrativo Resolución No.0380 del 29 de diciembre del 2023.

Que la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal, de acuerdo con el manual de funciones Resolución No.229 del 25 de agosto de 2015, modificada parcialmente por la Resolución No.0115 del 2 de mayo de 2019, tiene la facultad de avocar y adelantar Procesos de Responsabilidad Fiscal que correspondan a la entidad de control, de conformidad con las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011.

Por lo anteriormente expuesto,

#### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Avocar conocimiento y asignar la sustanciación y trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Números 1148, 1154, 1157, 1174, 1162, 1175, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1176, 1187, 1188, 1193, 1206, 1222 al doctor **EDGAR MEDINA PÉREZ**, Profesional Universitario, adscrito a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

CÚMPLASE

  
**HERLINDA JOHANA RIVERA RAMIREZ**  
Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS  
PUBLICOS**

PF-82

Florencia, 19 de enero de 2024

Doctor

**ISRAEL JAVIER GAITÁN RAMOS**

Director Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

Universidad de la Amazonía

Email: [consultoriojuridico@uniamazonia.edu.co](mailto:consultoriojuridico@uniamazonia.edu.co)

**ASUNTO:** Sustitución defensor de oficio Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148.

Respetado doctor:

Mediante oficio de fecha 08 de octubre de 2019, el despacho a su disposición determinó designar como defensor del oficio del investigado **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, implicado dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, al estudiante de Derecho **FITZGERAELD NOREÑA ACEVEDO**, quien se posesión para tal fin el día 15 de octubre de 2019, consultado telefónicamente al señor Noreña Acevedo acerca de si aún estaba representando al implicado ARCILA PUENTES, manifestó que no; toda vez que había renunciado a la facultad de Derecho y por tanto ya no representaba a su prohijado.

Por tal razón comedidamente solicito respetuosamente, se sirva realizar la designación de un nuevo defensor de oficio para el mismo investigado y el mismo proceso.

Cordialmente,



**HERLINDA JOHANA RIVERA RAMÍREZ**


Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal

**PF-082 DEL 19-01-2024**  
2 mensajes

**Contraloría del Caquetá** <notificaciones@contraloriadelcaqueta.gov.co> 19 de enero de 2024, 17:05  
Para: consultoriojuridico@uniamazonia.edu.co  
Cco: Edgar Medina Perez <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

Favor confirmar recibido  
Cualquier otra inquietud comuníquese al correo  
[info@contraloriadelcaqueta.gov.co](mailto:info@contraloriadelcaqueta.gov.co)

Edificio Gobernación - Carrera 13 No. 15-00 Piso 3  
Teléfonos: (8) 4352391 - 4353199 - Línea Transparente: 01 800 09 78515  
Página Web: [www.cdc.gov.co](http://www.cdc.gov.co) - Correo Electrónico: [info@contraloriadelcaqueta.gov.co](mailto:info@contraloriadelcaqueta.gov.co)  
Florencia, Caquetá

 **PF-082-2024.pdf**  
466K

**Consultorio Juridico** <consultoriojuridico@uniamazonia.edu.co> 19 de enero de 2024, 17:12  
Para: Contraloría del Caquetá <notificaciones@contraloriadelcaqueta.gov.co>, v.merchan@udla.edu.co

Florencia, 19 de Enero de 2024

Buena tarde

Teniendo en cuenta que los estudiantes de Consultorio Juridico y Centro de Conciliación entraron en el período vacacional, de manera atenta ofrecemos disculpas por no poder atender su solicitud por el momento ya que el último reparto del año pasado se realizó el día 23 de Noviembre del año 2023.

En virtud de lo anterior los invitamos a que nos envíen de nuevo las solicitudes para la designación de estudiantes, las cuales serán atendidas a partir del 05 de Febrero del año 2024.

Lo anterior conforme al Acuerdo 039 del 18 de Octubre del Consejo Académico de la Universidad de La Amazonia

Agradecemos su atención y comprensión

JUDITH SILVA RAMIREZ  
Secretaria

PF- 137

Florencia, 26 de enero de 2024

Doctor:  
**RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH**  
Email: [rodrigoandrescastro@hotmail.com](mailto:rodrigoandrescastro@hotmail.com)  
El Paujil, Caquetá

**Asunto:** Citación a Versión Libre y Espontánea  
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ  
**CORRESPONDENCIA DESPACHADA**

Dependencia	PF
Radicado	51488 / CD1920
Suscribe	Hermes Torres Nuñez
Fecha	26/01/2024
Anexos	0

Reciba un Cordial saludo:

Sírvase presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 15 – 00 Piso 3 del edificio de la Gobernación, el día dos (02) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), a las 2:30 p.m. para ser escuchado en diligencia de versión libre y espontánea, dentro del proceso expuesto en el asunto, que se adelanta en la Contraloría Departamental del Caquetá.

Para efectos de garantizarle su derecho a la defensa puede ser asistido por un abogado si lo estima conveniente.

Lo invitamos a visitar nuestro portal Web en razón a que el mismo se constituye en el medio de publicación de toda la información institucional y de interés general que emite la Contraloría Departamental del Caquetá.

Cordialmente,



**EDGAR MEDINA PÉREZ**  
Profesional Universitario.

---

## PF-137 CITACIÓN A VERSION LIBRE Y ESPONTANEA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 1148

1 mensaje

---

notificaciones@contraloriadelcaqueta.gov.co  
<notificaciones@contraloriadelcaqueta.gov.co>  
Para: rodrigoandrescastro@hotmail.com

26 de enero de 2024,  
16:17

Consecutivo: 51488

Asunto: PF-137 CITACIÓN A VERSION LIBRE Y ESPONTANEA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 1148

No. de Anexos: 0

Suscribe: Hermes Torres Nuñez

Fecha Salida: 26/01/2024

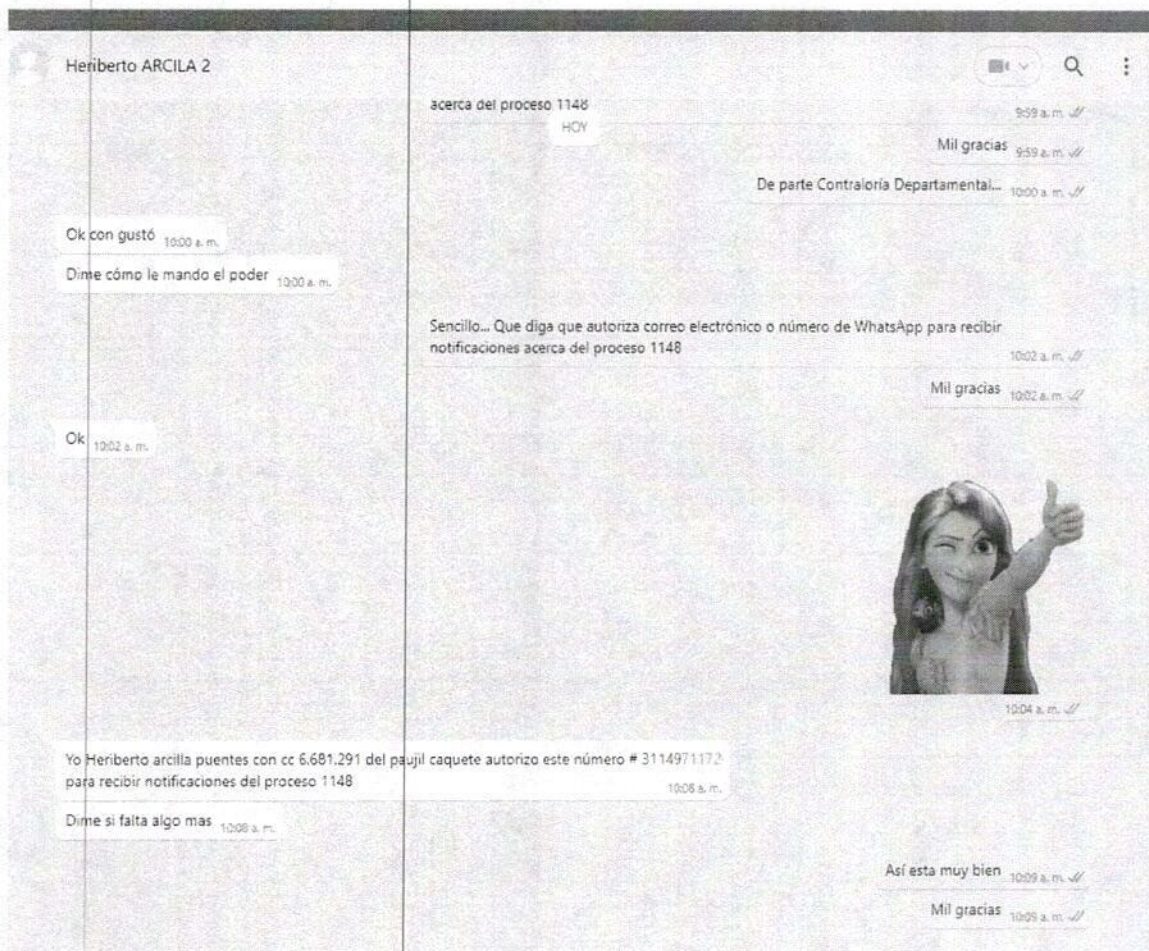
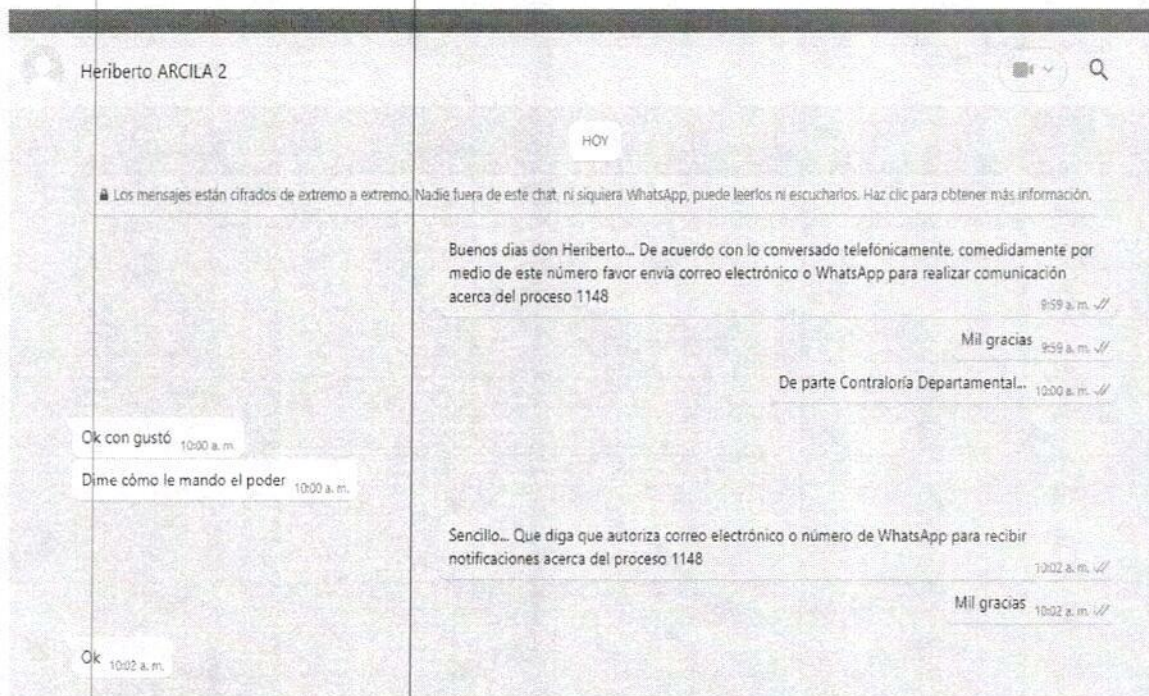
Documento a Enviar: PF-137 CITACIÓN A VERSION LIBRE Y ESPONTANEA PROCESO DE RESPONSABILIDA

Texto del correo:



11ccf14e-bPF-137 CITACIÓN A VERSION LIBRE Y ESPONTANEA.pdf  
450K

290



PF- 146

Florencia, 30 de enero de 2024

Señor  
**HERIBERTO ARCILA PUENTES**  
Celular WhatsApp No. 3143670718  
El Paujil, Caquetá

**ASUNTO:** Citación Versión Libre y Espontánea  
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148

Reciba un cordial saludo:

Sírvase presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 15-00 Piso 3 del Edificio de la Gobernación del Caquetá, el día seis (06) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), a las 9:00 am., para ser escuchado en diligencia de versión libre y espontánea dentro del Proceso expuesto en el asunto, que se adelanta en la Contraloría Departamental del Caquetá.

Para efectos de garantizarle su derecho a la defensa puede ser asistido por un abogado si lo estima conveniente.

Lo invitamos a visitar nuestro portal web en razón a que el mismo se constituye en el medio de publicación de toda la información institucional y de interés general que emite la Contraloría Departamental del Caquetá.

Cordialmente,



**EDGAR MEDINA PÉREZ**  
Profesional Universitario.



Nit. 891.190.246-1

292

**VERSIÓN LIBRE Y ESPONTANEA DEL SEÑOR HERIBERTO ARCILA PUENTES PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 6.681.291, EXPEDIDA EN EL PAUJIL, CAQUETA EN CALIDAD DE VENDEDOR DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA No. 420-109661.**

En Florencia, Caquetá, a los seis (06) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las 9:15 a.m. se hizo presente el señor Heriberto Arcila Puentes, identificado en el encabezamiento, de 78 años de edad, con el fin de que se procediera a realizar diligencia de versión libre y espontánea en relación con los hechos materia investigación que cursa en este Ente de Control mediante **Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148**, aperturado el 18 de diciembre de 2018. En consecuencia, el Profesional Universitario de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal hace saber que tiene derecho de ser asistido por un Abogado el cual manifiesta que no. Una vez que se dio cumplimiento a la defensa, se dejó libre de todo apremio y sin juramento al declarante, exhortándole a que diga la verdad a las preguntas que se le formulen, previniéndole acerca del contenido del artículo 33 de la Constitución Política.

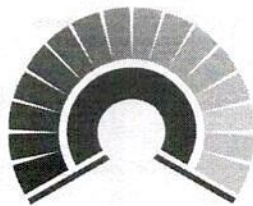
**PREGUNTADO:** Autoriza al Profesional Universitario a efectuarle preguntas **CONTESTO:** Si.

**PREGUNTADO:** Sobre sus generales de Ley **CONTESTO:** Me llamo como quedó anotado en el encabezamiento, estado civil soltero, profesión independiente, dirección residencial centro municipio de El Paujil, Tel: 3228395963. Email. [luisarcila2424@gmail.com](mailto:luisarcila2424@gmail.com), me encuentro actualmente laborando como independiente **PREGUNTADO:** Desea ser notificado de las decisiones que tome este ente de control a través de correo electrónico **CONTESTO:** Si.

**PREGUNTADO:** Sabe por qué ha sido llamado a versionar. **CONTESTO:** Si **PREGUNTADO:** En qué fecha usted realizó la venta del lote con destino a la construcción de vivienda en el Municipio de El Paujil **CONTESTO:** no recuerdo. **PREGUNTADO:** Se pone de presente el Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, obrante a folios 228 al 233, que tiene que decir sobre lo aquí investigado? **CONTESTADO:** En el año 2013, el alcalde me compró 6 hectáreas por \$240.000.000, me dijo que el municipio pagaba todos los gastos de la escritura, entonces cuando ya se cerró el negocio, dijo que el municipio que el municipio no pagaba nada y debía hacerlo yo, cosa que yo hice alrededor de \$10.000.000, entonces me tocó pagar todo a mi, a los pocos días me dio la plata, sacándome el iva y otros gastos. **PREGUNTADO:** como determinaron el precio de venta del lote en mención. **CONTESTO:** Recuerdo que yo le pedí más, pero no recuerdo cuanto, él me ofreció esa plata y por esa plata le vendí, este negocio lo hicimos en la casa de él. **PREGUNTADO:** Quien realizó el estudio de avalúo **CONTESTO:** de eso no me acuerdo que sucedió, simplemente acodamos ese precio y eso me pagó.

**PREGUNTADO:** Obra en el expediente avalúo realizado por un particular en cuantía de \$240.000.000 y otro que realizó el IGAC en cuantía de \$144.000.000 aproximadamente, usted tuvo conocimiento del avalúo que adelantó el particular. **CONTESTO:** Recuerdo que para la venta el alcalde me mencionó del IGAC., pero no recuerdo que me dijo de eso.

**"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"**



# CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

**PREGUNTADO:** A su juicio considera que la venta del predio se realizó por el valor comercial.

**CONTESTÓ:** No señor, eso fue muy barato, no recuerdo, pero yo le pedí como a \$50.000.000 por hectárea.

**PREGUNTADO:** Ha sido usted llamado a declarar por estos hechos ante la Fiscalía o Procuraduría.

**CONTESTO:** No señor.

**PREGUNTADO:** Sírvase manifestar si tiene algo más que agregar, corregir, suprimir, o enmendar a la presente diligencia.

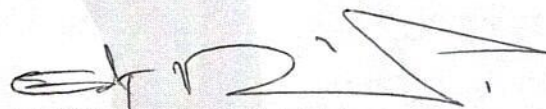
**CONTESTADO:** No señor.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina después de leída y aprobada por los que en ella intervinieron, siendo las 9:40 a.m.

EXPONENTE:

  
HERIBERTO ARCILA PUENTES  
C.C. 6.681.291 de El Paujil.



PROFESIONAL UNIVERSITARIO:

  
EDGAR MEDINA PEREZ  
Abog. Sustanciador.

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá

Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

 @contraloriadelcaqueta  @ContraloriaDC

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

www.cdc.gov.co

**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

**DESPLAZAMIENTO DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO**

1 mensaje

**Edgar Medina Perez** <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>  
Para: "fna88@hotmail.com" <fna88@hotmail.com>

7 de febrero de 2024, 8:40

Buenos días señor Noreña Acevedo:

En atención a que en la fecha 06 de febrero de 2024, compareció ante este Ente de Control el señor Heriberto Arcila Puentes implicado en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, a rendir versión libre y espontánea, en donde su señoría actúa como defensor de oficio, comedidamente me permito manifestarle que ante la rendición de la versión libre por parte de su prohijado, ello conlleva a su desplazamiento.

De antemano se agradece su colaboración.

Cordialmente,

**EDGAR MEDINA PÉREZ**  
AboG. Sustanciador

**AUTO DE IMPUTACIÓN MIXTA No. 001**  
**DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO DE No. 1148**

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:**

<b>PRESUNTOS RESPONSABLES</b>	<b>RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH C.C. 17.691.533</b> <b>HERIBERTO ARCILA PUENTES C.C. 6.681.291</b>
<b>ENTIDAD AFECTADA</b>	<b>MUNICIPIO DE EL PAUJIL</b>
<b>PRESUNTO DETRIMENTO</b>	<b>\$96.032.548 (Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos)</b>
<b>POLIZA No.</b>	<b>930-73-994000000032</b>
<b>ASEGURADORA</b>	<b>Compañía de Seguros Solidaria de Colombia</b>

En la ciudad de Florencia, Caquetá a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024), la suscrita Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en ejercicio de la competencia establecida en la Resolución 024 del 15 de febrero del 2011, procede a dictar **AUTO DE IMPUTACIÓN MIXTA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO DE UNICA INSTANCIA No. 1148**, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 610 de 2000, y la Ley 1474 de 2011, basado en los siguientes:

**1. ANTECEDENTES**

Originó la presente investigación el memorando CF- 066 del 05 de abril de 2016, por medio del cual la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, remite la denuncia D-003-16, relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en el Municipio de El Paujil.

De acuerdo con el traslado de la denuncia D-003-16, se estableció que el Municipio de El Paujil suscribió el Contrato de Compraventa No. 001 del 26 de diciembre de 2013, con el señor Heriberto Arcila puentes, en cuantía de Doscientos cuarenta Millones de pesos (\$240.000.000) M/Cte., con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del citado ente territorial, el cual fue adquirido presuntamente con sobrecosto en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

**2. FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Soportan el inicio de esta investigación fiscal las siguientes normas:

- Artículos 209, 267 y 268 numeral 5 de la Constitución Política.
- Ley 610 de 2000, Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías.
- Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 80 de 1993.

### 3. ENTIDAD ESTATAL AFECTADA

Municipio de El Paujil NIT: 800.095.763-0.

### 4. PRESUNTOS RESPONSABLES

**RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien se desempeñó para época de ocurrencia de los hechos como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; de acuerdo con el Acta de posesión No. 008 del 31 de diciembre de 2011 (folio 204).

**HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291, expedida en El Paujil, Caquetá; quien se desempeñó para la época de los hechos como Contratista (vendedor) del Municipio de El Paujil, Caquetá.

### 5. CUANTÍA

Fue determinado un presunto detrimento por la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

### 6. ACTUACIONES PROCESALES

1. Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, por medio del cual se abrió el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 (folio 228 al 233 y reversos).
2. Comunicación de vinculación al tercero civilmente responsable del Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018 (folio 234).
3. Notificación por aviso al investigado Rodrigo Andrés castro Betancourt (folio 241).
4. Notificación Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, por aviso al señor Rodrigo Andrés Castro Betancourt (folio 242).



Nit. 891.190.246-1

5. Notificación Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, por aviso al señor Heriberto Arcila Puentes (folio 242).
6. Auto de fecha 13 de mayo de 2019, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación del proceso (folio 243 y reverso).
7. Auto No. 034 de fecha 30 de septiembre de 2019, por medio del cual se ordena designar apoderado de oficio (folio 244 al 246).
8. Constancia secretarial de estado No. 075 de fecha 01 de octubre (folio 247).
9. Diligencia de posesión defensor de oficio del estudiante de Derecho Darwin Alexander Plazas Varón en representación del investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt (folio 249).
10. Diligencia de posesión defensor de oficio del estudiante Fitzgerald Noreña Acevedo en representación del investigado Heriberto Arcila Puentes (folio 251).
11. Auto de fecha 03 de diciembre de 2019, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación (folio 255).
12. Auto de fecha 21 de febrero de 2020, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación (folio 256).
13. Auto por medio del cual se suspenden los términos en los procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios y procesos administrativos coactivos de la Contraloría Departamental del Caquetá (folio 257).
14. Constancia secretarial de estado (folio 258).
15. Auto por medio del cual se reanudan términos en los procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios y procesos de jurisdicción coactiva de la Contraloría Departamental del, Caquetá (folio 259 y reverso).
16. Constancia secretarial de estado (folio 260).
17. Diligencia de posesión defensor de oficio de la estudiante de Derecho Stefanny Michelly Olarte Hernández como defensora de oficio del investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt en sustitución del estudiante de Derecho Darwin Alexander Plaza Varón (folio 262).
18. Auto de fecha 19 de enero de 2022, por medio del cual se avoca conocimiento y se designa sustanciación (folio 265 y reverso).
19. Auto de fecha 25 de abril de 2022, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación (folio 268).
20. Diligencia de posesión defensor de oficio del estudiante de Derecho Jonh Edwin Ortiz Cuéllar como defensor de oficio del investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt, en sustitución de la estudiante de Derecho Stefanny Michell Olarte Hernández (folio 279).
21. Auto de fecha 01 de abril de 2023, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación (folio 285).
22. Oficio PF-137 de fecha 26 de enero de 2024, mediante el cual se cita al investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt a rendir versión libre y espontánea para el día 02 de febrero de 2024 a las 2.30 pm (folio 288).

23. Oficio PF-146 de fecha 30 de enero de 2024, mediante el cual se cita al investigado Heriberto Arcila Puentes a rendir versión libre y espontánea para el día 06 de febrero de 2024 a las 9.00 am (folio 290).
24. Rendición versión libre y espontánea del señor Heriberto Arcila Puentes (folio 291 al 292).

## 7. PRUEBAS

Se tienen como pruebas los siguientes documentos allegados en la denuncia D-003-16:

1. Oficio de fecha 10 de septiembre de 2014, por medio del cual se Autoriza al Alcalde de El Paujil, remite la siguiente información: (folio 3).
  - Acuerdo No. 011 del 22 de junio de 2012, por medio del cual se autoriza al Alcalde, Departamento del Caquetá, para adquirir un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda (folio 4 al 7).
  - Copia del Contrato de promesa de Compraventa No. 011 del 26 de diciembre de 2013, con su respectiva notificación al supervisor del Contrato (folio 8 al 11).
  - Copia del comprobante de pago No. 3783 del 30 de diciembre de 2013, por la suma de Doscientos Cuarenta Millones de Pesos (\$240.000.000) Mcte (folio 12).
2. Oficio No. 505.10.045-567 del 16 de octubre de 2014, suscrito por el Alcalde del Municipio de El Paujil, remite la siguiente información (folio 16).
  - CD con el esquema del Ordenamiento Territorial del Municipio de El Paujil (folio 16-A).
  - Copia de la escritura pública No. 1728 del 27 de septiembre de 2006 con la respectiva constancia de la matrícula inmobiliaria (17 al 22 y reversos).
  - Copia del informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales, emitida por el Ingeniero Civil Fernando Gustavo Martínez Bravo (folio 25 al 33).
3. Oficio No. 7832014EEE3493-01 del 17 de octubre de 2014, suscrito por el Director Territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual informa que no existen avalúos en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-88245 (folio 37).
4. Oficio No. 501.01.045.011 del 27 de enero de 2015, suscrito por el Alcalde del Municipio de El Paujil, remite la siguiente información (folio 40).
  - Copia de la escritura pública No. 3078 del 26 de diciembre de 2013 (folio 41 al 48).
  - Copia del certificado de libertad y tradición del bien identificado con la matrícula inmobiliaria No. 420-109661 a nombre del Municipio de El Paujil (folio 49 al 50).



Nit. 891.190.246-1

5. Oficio de fecha 20 de enero de 2015, suscrito por la Directora encargada del banco Agrario e Colombia (folio 52).
6. Oficio No. 7832015EE1617-01 de fecha 29 de mayo de 2015, suscrito por el Director Territorial Encargado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual informa que no cuentan con el personal idóneo ni los recursos para realizar avalúos comerciales (folio 54 al 55).
7. Oficio No. 78320015EE1617-01 de fecha 29 de mayo de 2015, traslado a la sede central el IGAC para que realice el estudio y envíe personal para que apoye requerimientos (folio 56).
8. Oficio 800201EE13732-01 de fecha 14 de diciembre de 2015, suscrito por el Coordinador GIT Avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual solicita información para realizar un avalúo (61).
9. Oficio No. 8002015EE14620-01 de fecha 30 de diciembre de 2015, suscrito por el Coordinador GIT Avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual allega el avalúo del bien inmueble identificado con matrícula catastral No. 00-01-0003-0004-000 (folio 63 al 97).
10. Acta de visita especial de fecha 29 de diciembre de 2015 (folio 98 al 101).
11. Oficio No. 505.10.045-083 del 07 de marzo de 2016, suscrito por el Secretario de Gobierno del Municipio de El Paujil, remite la siguiente información (folio 105).
  - Certificación laboral del señor Rodrigo Andrés Castro Bethancourt (folio 106).
  - Certificación laboral del señor José Daime Sánchez Torres (folio 107).
  - Copia de la póliza de Seguro de Vida de Grupo No. 994000000887 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 108 al 110).
  - Copia de la póliza de seguro de responsabilidad Civil Servidores Públicos No. 560-87-994000000011 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folios 111 al 114 y 149 al 151).
  - Copia de la póliza de Seguros Multirriesgos No. 560-73-994000000499 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 115 al 148).
  - Copia póliza de Seguro Multirriesgo No. 630-40-994000000032 expedida por la Aseguradora de Colombia (folio 152 al 162).
  - Copia de la póliza de Seguro de Automotores No. 630-40-994000000090 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 263 al 165).
  - Copia de la póliza de seguro de responsabilidad Civil Servidores Públicos No. 630-87-994000000004 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 166 al 167).
  - Copia de la póliza de Responsabilidad Civil No. 1002603 expedida por la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. (folio 168 al 179 y 197 al 199).
  - Copia de la póliza de Seguro de Vida de Grupos Póliza Normal 10011765 expedida por la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. (folio 180).

- Copia de la póliza de Seguros Multirriesgo No. 1000081 expedida por la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. (folio 181 al 196)..
- Certificación de la menor cuantía para contratar por parte del Municipio de El Paujil para la vigencia 2013 (folio 200).
- Copia del Decreto No. 165 del 19 de diciembre de 2013, por medio del cual se hace un nombramiento (folio 201).
- Copia del Acta de posesión No. 65 del 19 de diciembre de 2019 (folio 202).
- Copia de la escarapela expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil (folio 203).
- Copia del Acta de posesión de fecha 31 de diciembre de 2011 del señor Rodrigo Andrés Castro Betancourt (folio 204).

## 8. DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA

Luego de haber citados a la rendición de la versión libre y espontánea a los investigados, únicamente compareció el investigado Heriberto Arcila Puentes el día seis (06) de febrero de 2024, en la cual manifestó:

*"En Florencia, Caquetá, a los seis (06) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las 9:15 a.m. se hizo presente el señor Heriberto Arcila Puentes, identificado en el encabezamiento, de 78 años de edad, con el fin de que se procediera a realizar diligencia de versión libre y espontánea en relación con los hechos materia investigación que cursa en este Ente de Control mediante **Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148**, aperturado el 18 de diciembre de 2018. En consecuencia, el Profesional Universitario de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal hace saber que tiene derecho de ser asistido por un Abogado el cual manifiesta que no. Una vez que se dio cumplimiento a la defensa, se dejó libre de todo apremio y sin juramento al declarante, exhortándole a que diga la verdad a las preguntas que se le formulen, previniéndole acerca del contenido del artículo 33 de la Constitución Política. **PREGUNTADO:** Autoriza al Profesional Universitario a efectuarle preguntas **CONTESTO:** Si. **PREGUNTADO:** Sobre sus generales de Ley **CONTESTO:** Me llamo como quedó anotado en el encabezamiento, estado civil soltero, profesión independiente, dirección residencial centro municipio de El Paujil, Tel: 3228395963. Email. [luiscarcila2424@gmail.com](mailto:luiscarcila2424@gmail.com), me encuentro actualmente laborando como independiente **PREGUNTADO:** Desea ser notificado de las decisiones que tome este ente de control a través de correo electrónico **CONTESTO:** Si. **PREGUNTADO:** Sabe por qué ha sido llamado a versionar. **CONTESTO:** Si **PREGUNTADO:** En qué fecha usted realizó la venta del lote con destino a la construcción de vivienda en el Municipio de El Paujil **CONTESTO:** no recuerdo. **PREGUNTADO:** Se pone de presente el Auto de*



Nit. 891.190.246-1

Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, obrante a folios 228 al 233, que tiene que decir sobre lo aquí investigado? **CONTESTADO:** En el año 2013, el alcalde me compró 6 hectáreas por \$240.000.000, me dijo que el municipio pagaba todos los gastos de la escritura, entonces cuando ya se cerró el negocio, dijo que el municipio que no pagaba nada y debía hacerlo yo, cosa que yo hice alrededor de \$10.000.000, entonces me tocó pagar todo a mi, a los pocos días me dio la plata, sacándome el iva y otros gastos. **PREGUNTADO:** como determinaron el precio de venta del lote en mención. **CONTESTO:** Recuerdo que yo le pedí más, pero no recuerdo cuanto, él me ofreció esa plata y por esa plata le vendí, este negocio lo hicimos en la casa de él. **PREGUNTADO:** Quien realizó el estudio de avalúo **CONTESTO:** de eso no me acuerdo que sucedió, simplemente acordamos ese precio y eso me pagó. **PREGUNTADO:** Obra en el expediente avalúo realizado por un particular en cuantía de \$240.000.000 y otro que realizó el IGAC en cuantía de \$144.000.000 aproximadamente, usted tuvo conocimiento del avalúo que adelantó el particular. **CONTESTO:** Recuerdo que para la venta el alcalde me mencionó del IGAC., pero no recuerdo que me dijo de eso. **PREGUNTADO:** A su juicio considera que la venta del predio se realizó por el valor comercial. **CONTESTÓ:** No señor, eso fue muy barato, no recuerdo, pero yo le pedí como a \$50.000.000 por hectárea. **PREGUNTADO:** Ha sido usted llamado a declarar por estos hechos ante la Fiscalía o Procuraduría. **CONTESTO:** No señor. **PREGUNTADO:** Sírvase manifestar si tiene algo más que agregar, corregir, suprimir, o enmendar a la presente diligencia. **CONTESTADO:** No señor.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina después de leída y aprobada por los que en ella intervinieron, siendo las 9:40 a.m.”

## 9. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Como primera medida, es indispensable señalar que en el **ejercicio del control fiscal** se hace necesaria la aplicación del régimen probatorio a fin de establecer la existencia de hechos que puedan generar detrimento patrimonial, que afecte los intereses estatales.

La Responsabilidad Fiscal que determinan las Contralorías, debe estar soportada en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, a fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de los investigados, como derechos fundamentales consagrados en el **artículo 29 de la Constitución Política**.

La prueba es la **razón, argumento o elemento de convicción** que se saca del medio probatorio, para llevar el convencimiento al juez o investigador, sobre el acaecimiento de los hechos que se debaten en un proceso.

Para la recolección de las pruebas deben tenerse en cuenta los **principios** que rigen el aspecto probatorio y que se constituyen en los parámetros mínimos a tener en cuenta en la recolección e interpretación de las mismas.

Los principios de la prueba se refieren a los conceptos básicos que iluminan al operador en este caso, administrativo al momento de admitir, decretar, practicar y valorar los diversos tipos de pruebas que soportan el fallo. Estos principios son: **necesidad, unidad, comunidad, inmediación, publicidad, contradicción, evaluación, oportunidad, pertinencia, conducencia, igualdad, eficacia, equidad y el principio inquisitivo**, entre otros.

Apreciar la prueba *“es la actividad intelectual que lleva a cabo el juez para medir la fuerza probatoria de un medio de prueba”*. Por lo tanto, **fuerza o valor probatorio** es la aptitud que tiene un hecho (solo o en concurrencia con otros) para demostrar judicialmente otro hecho o para que el mismo hecho quede demostrado.

Para adoptar su decisión con fundamento en la prueba, es indispensable que el juez se considere convencido por ella, o, dicho de otra manera, que se encuentre en **estado de certeza** sobre los hechos que declara.

Una indebida valoración del acervo probatorio puede generar una nulidad, que será la falta de motivación como irregularidad sustancial por violación de las formas propias de cada juicio, consistente en este caso, en no fijar el alcance de las pruebas en las cuales se fundamenta el juicio de responsabilidad (tipicidad – antijuridicidad y culpabilidad).

En el trámite procesal es necesario **PROBAR**, es decir, aportar al proceso los motivos o razones, por los medios y procedimientos aceptados por la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos y la responsabilidad de las personas.

Esta garantía constitucional implica: el derecho a buscar la prueba, el derecho a postular la prueba, el derecho a que se le decrete la prueba, el derecho a que se le practique la prueba, el derecho a que se le niegue la prueba, el derecho a que se le valore la prueba. La cual se puede definir como las razones, argumentos o elementos de convicción que se sacan del medio probatorio, para llevar al convencimiento del Juez o Instructor, sobre el acaecimiento de los hechos que se debaten en el proceso.

La **carga probatoria** es una facultad discrecional de ofrecer y solicitar pruebas y de intervenir en su práctica. Para que los hechos, cosas y actos que se plantean en el proceso estén debidamente probados, se recurre a la práctica de pruebas. **En materia de responsabilidad**

**fiscal le corresponde al Estado, en cabeza del órgano de control fiscal correspondiente, probar los hechos investigados.**

La Prueba ha sido definida como: *“Todo lo que sirve para darnos la certeza acerca de la verdad de una proposición. La Certeza está en nosotros, la verdad en los hechos. Aquella nace cuando uno cree que conoce ésta; más por la facilidad humana, puede haber certeza donde haya verdad y viceversa”*. Es necesario llevar a cabo las acciones tendientes a obtener la finalidad procesal de la prueba, siendo ésta *“la de producir la certeza sobre la existencia o inexistencia del elemento típico de la responsabilidad (gestión fiscal) y los estructurales de la misma”*, a través de los diferentes medios de prueba.

Los conceptos de **conducencia y pertinencia** son conceptos diversos; mientras el primero alude a la idoneidad de la prueba para demostrar lo que se pretende probar, el concepto de pertinencia cubre la relación lógica entre el medio de prueba y lo que se pretende probar, o la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio o la materia del proceso.

Al momento de llevar a cabo un análisis jurídico-fiscal en los hechos materia de investigación, el mismo se debe realizar de manera integral, apreciando cada una de las pruebas que reposan en el plenario, tanto las documentales, testimoniales, periciales o cualquier otro medio probatorio que se haya practicado dentro de los parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Conforme lo anterior, la prueba tiene tres aspectos a saber: a) Su manifestación formal, es decir, los medios utilizados para llevarle al juez el conocimiento de los hechos, como testimonios, documentos, indicios, etc. b) Su contenido sustancial o esencial, es decir, las razones o motivos que de esos medios se deducen a favor de la existencia o inexistencia de los hechos. c) Su resultado subjetivo o el convencimiento, que con las razones o motivos, se trata de producir en la mente del juzgador y en este sentido podrá concluir si hay o no prueba de determinados hechos.

Lo expuesto, se encuentra fundamentado en lo normado por el **artículo 26 de la Ley 610 de 2000** que determina: *“APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional”*.

El acervo probatorio contenido en las presentes diligencias conlleva a determinar responsabilidad fiscal en cabeza de los implicados, pues están dados los elementos contentivos de ella, los cuales se encuentran claramente definidos en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual precisa:

- *“Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.*
- *Un daño patrimonial al Estado.*

- *Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.*"

En consideración, la Constitución Política de 1991 reconoce expresamente la función de control fiscal, como una actividad independiente y autónoma, diferenciada de la que corresponde a las clásicas funciones estatales, lo cual obedece no sólo a un criterio de división y especialización de las tareas públicas, sino a la necesidad político-jurídica de controlar, vigilar y asegurar la correcta utilización, inversión y disposición de los fondos y bienes públicos que pertenecen a la Nación.

Ahora bien, con relación al daño, el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 preceptúa:

*"Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.*

*Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público."*

El elemento más relevante es el daño, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, es decir, cuando **no existe o no es cuantificable**, y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño.

El daño patrimonial al Estado es un fenómeno de carácter estrictamente pecuniario o económico, que consiste en la pérdida de recursos por parte del Estado, es decir, es el empobrecimiento del erario. De esta forma, dentro de la tipología de los perjuicios podemos establecer que el daño patrimonial al Estado es un perjuicio material quedando excluida la posibilidad de que exista un perjuicio inmaterial. Dicho daño puede ser ocasionado por los servidores públicos o los particulares que causen un daño una lesión a los bienes y recursos públicos en forma directa, o contribuyendo a su realización.

Como se podrá notar, el legislador define el "daño" con el sinónimo "lesión", cuyo significado prácticamente reúne los de los sustantivos abstractos que luego relaciona para indicar, de manera a nuestro modo de ver reiterada, las formas en las que puede materializarse esa lesión.

Llama la atención igualmente, el hecho de que el daño o lesión puede ser ocasionado por una "gestión fiscal antieconómica", pues según el diccionario de la lengua española, "antieconómico" es lo contrario a la economía, aquello que es muy costoso, y, "economía", la administración de los ingresos y gastos del modo más provechoso, el ahorro de dinero, la reducción de gastos.

Desde un punto de vista general y abstracto, le puede causar un posible daño al patrimonio del Estado configurado por circunstancias tales como, el dinero que se dejó de ahorrar, el no haber reducido los gastos y el no haber acogido la opción más provechosa en la inversión realizada.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia SU-620 del 13 de noviembre de 1996, expediente T-84714, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell, expresa:

*"Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio".*

El daño al patrimonio público puede tener diversos orígenes, según lo concluyó la Corte constitucional en Sentencia C-840 del 9 de agosto de 2001, Expediente D-3389, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería el siguiente texto:

*"...los daños al patrimonio del Estado pueden provenir de múltiples fuentes y circunstancias, dentro de las cuales la irregularidad en el ejercicio de la gestión fiscal es apenas una entre tantas. De suerte que el daño patrimonial al Estado es susceptible de producirse a partir de la conducta de los servidores públicos y de los particulares, tanto en el área de la gestión fiscal como fuera de ella. Así, por ejemplo, el daño patrimonial estatal podría surgir con ocasión de una ejecución presupuestal ilegal, por la pérdida de unos equipos de computación, por la indebida apropiación de unos flujos de caja, por la ruptura arbitrariamente provocada en las bases de un edificio del Estado, por el derribamiento culposo de un semáforo en el tráfico vehicular, y por tantas otras causas que no siempre encuentran asiento en la gestión fiscal. Siendo patente además que, para efectos de la mera configuración del daño patrimonial al Estado, ninguna trascendencia tiene el que los respectivos haberes formen parte de los bienes fiscales o de uso público, o que se hallen dentro o fuera del presupuesto público aprobado para la correspondiente vigencia fiscal".*

En efecto tenemos que las pruebas aportadas, se ciñen a los principios de conducencia, pertinencia y necesidad y se valoraran de conformidad con la regla de la sana crítica y se apreciaran en forma racional y en aplicación de los principios que rigen la acción fiscal y la función administrativa, siguiendo los parámetros fijados por nuestra Carta Política en sus artículos 29 y 209, la Ley 610 de 2000, la Ley 1474 de 2011, modificada por el Decreto 403 de 2020, la Ley 80 de 1993 y las demás normas concordantes con el objetivo de establecer la verdad de estos hechos con aplicación de análisis objetivos, prudentes y veraces.

Así las cosas, resulta importante para esta Dirección Técnica analizar la existencia del daño patrimonial al Estado como elemento principal que comporta el ejercicio de la acción fiscal, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente y relacionadas con los hechos que dieran origen al correspondiente trámite de la Denuncia D-003-16, no sin antes advertir que dichas pruebas fueron recaudadas en forma legal y son las que esencialmente se tuvieron como soporte probatorio en el Auto de Apertura. Denuncia presentada ante este Ente de Control el día 21 de agosto de 2014, a través de escrito anónimo obrante a folio 1.

Evidencia el Despacho que en la fecha 10 de mayo de 2013, a petición de la Alcaldía del Municipio de El Paujil, Caquetá; el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo presenta Informe de Avalúos de Predios y/o Mejoras Rurales, respecto del bien inmueble rural ubicado en el Municipio de El Paujil, identificado con la Matrícula inmobiliaria No. 440-88285 y ficha catastral No. 00-01-000031-0004-000, en el cual se determinó valor comercial establecido en la cuantía de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE., (folio 25 al 349 advirtiéndose que el señor evaluador acredita certificado de la Corporación Colombiana de Lonjas y Registros "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", lo cual lo acredita como Perito Evaluador Profesional otorgándole Registro- Matrícula No. R.N.A/C.C-25-1885, que respalda esta determinación con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012, "lo cual lo faculta para avalar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional." Certificado expedido en la ciudad de Bogotá D.C., a los 09 días del mes de agosto de 2010.

En desarrollo del trámite de la Denuncia No. D-003-16, a través de la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral se desarrollaron múltiples comunicaciones con el Municipio de El Paujil, Caquetá, en aras de lograr el cabal esclarecimiento de los hechos.

En la fecha 16 de marzo de 2015, mediante oficio CF-0791, la Directora Técnica de Control Fiscal Integral de este Ente de Control, solicita al Director Territorial Caquetá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC., solicita la viabilidad de realizar el avalúo comercial del predio identificado catastralmente con el No. 00-01-0003-0004-000 y matrícula inmobiliaria 420-88285, ubicado en la vereda El Borugo del Municipio de El Paujil, Caquetá. Y de igual manera se solicitó certificar el valor del avalúo catastral realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la vigencia 2013 de los predios bajo las fichas catastrales No. 001-01.0003-0004-



Nit. 891.190.246-1

000 y 01-01-0003-0004-000 ubicados en la vereda El Borugo del Municipio de El Paujil, Caquetá y de ser necesario remitir copia de las fichas catastrales de los mencionados predios.

Mediante oficio No. 8002015EE14620-01 de fecha 14 de diciembre de 2015, la Coordinadora GIT Avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi Bogotá envió el avalúo comercial del predio rural denominado Lote No. 1, ubicado en la vereda Moravia del Municipio de El Paujil, Caquetá, identificado con cédula catastral No. 00-01-0003-0004-000, el cual fue practicado conforme a las normas y procedimientos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, estableció un avalúo comercial establecido en la cuantía de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$143.967.452) M/CTE.** (folio 63 al 82).

Evidencia este Despacho que a través de la escritura pública No. 3078 de fecha 26 de diciembre de 2013 (folio 88 al 97), se materializa el negocio jurídico de compraventa de un lote denominado LOTE NÚMERO UNO ubicado en la vereda El Borugo con extensión de seis (6) hectáreas por valor de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE., bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 y matrícula inmobiliaria No. 00-01-0003-0004-000, establecido en la promesa de compraventa No. 001 de fecha 26 de diciembre de 2013, consistente en la compraventa del mencionado terreno (8 al 11), pago que se realizó mediante comprobante de pago No. 3783 de fecha 30 de diciembre de 2013, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE. (folio 12).

La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal determina que el presunto detrimento patrimonial se establece en la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, como lo expresó la Conclusión de la Denuncia D-003-16, toda vez que es el resultado cuantificado de la confrontación entre los avalúos realizados por el particular Fernando Gustavo Martínez a quien acudió el Municipio de El Paujil y el solicitado por la Contraloría Departamental del Caquetá ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En cuanto a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales encontramos:

La Ley 9 de 1989, *"Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones"*, en su artículo 15 establece:

**"Artículo 15°.- El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones, de conformidad con el artículo 18 de la presente Ley.**

*La forma de pago, en dinero efectivo, títulos-valores o bienes muebles e inmuebles, será convenida entre el propietario y el representante legal de la entidad adquirente. Las condiciones mínimas del pago del precio serán las previstas en el artículo 29.*

*Si quedare un saldo del precio pendiente de pago al momento de otorgar la escritura pública de compraventa, la entidad adquirente deberá entregar simultáneamente una garantía bancaria incondicional de pago del mismo. La existencia del saldo pendiente no dará acción de resolución de contrato, sin perjuicio del cobro del saldo por la vía ejecutiva.*

*Facúltese a los establecimientos bancarios para emitir las garantías de que trata el inciso anterior."*  
(Subrayado fuera de texto).

**Artículo 2°.** El artículo 15 del Decreto 855 de 1994 quedará así:

**"Artículo 15. Avalúo de bienes inmuebles. Para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.**

**Parágrafo.** *Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles".*  
(Subrayado fuera de texto).

Al respecto evidencia este Despacho, que no obra solicitud a la Lonja de propiedad raíz donde se encuentra ubicado el bien inmueble y además el certificado presentado por el Evaluador del bien inmueble el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo, que lo acredita como tal (folio 35), tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2012, siendo expedido el informe del avalúo en la fecha 10 de mayo de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso advertir que tal como lo adujo el trámite de la Conclusión de la Denuncia D-003-16, evidencia este Despacho que no se requirió por parte del Municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sino al particular facultado por la norma para la expedición del avalúo comercial del bien inmueble en comento, presentándose un avalúo muy por encima del avalúo determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien es la entidad estatal en



Nit. 891.190.246-1

orden de importancia autorizada por la ley para realizar AVALÚOS COMERCIALES en el país, generándose un presunto daño patrimonial al Municipio De El Paujil en la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

En este sentido, es preciso indicar que el presente proceso tiene su origen en la Conclusión trámite de la denuncia D-003-16 de fecha 17 de marzo de 2016, relacionado con presuntas irregularidades ocasionadas por la compra del bien inmueble Lote No. 1, ubicado en el Municipio de El Paujil, Caquetá; el cual consta de seis (69 hectáreas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 del Círculo Notarial de Florencia, Caquetá; el cual fue adquirido por el representante legal del Municipio de El Paujil, al realizarle la compra al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291.

La investigación de carácter fiscal, realizada por la Contraloría Departamental del Caquetá recolectó las pruebas suficientes, representadas en la Conclusión de la Denuncia D-00-16, para determinar que de acuerdo con lo prescrito por la Ley 610 del 2000 en su artículo 6 estableció: **"DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.**

*Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público",* se vislumbra que existe un presunto detrimento patrimonial en contra del municipio de El Paujil, Caquetá.

En este sentido, evidencia este Despacho que el mencionado Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de abril de 2018, determinó que el presunto daño al Estado correspondía a la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, presunto detrimento que este Despacho constata mediante la diferencia establecida entre los avalúos determinados por el Instituto Agustín Codazzi y el avalúo Fernando Gustavo Martínez Bravo, conforme al comprobante de pago No. 3783 de fecha 30 de diciembre de 2013, por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE.**, valor comercial determinado por el evaluador, mientras que el avalúo comercial determinado por el Instituto Agustín Codazzi para la misma fecha se estableció en **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$143.967.452) M/CTE.**

Se vislumbra la falta en que incurrió el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, quien se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; para la época de ocurrencia de los hechos, quien ostentó la calidad de gestor fiscal en su calidad de Alcalde y es quien suscribe la promesa de compraventa del bien inmueble Lote No. 1, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, y que posteriormente fue consolidado el negocio jurídico de compraventa a través de la escritura pública No. 3078 de fecha 26 de diciembre de 2013, actuando en su condición de representación legal del Municipio de El Paujil, Caquetá-comprador.

Respecto al señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, quien actuó en su condición de vendedor del bien inmueble Lote No. 1, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, al Municipio de El Paujil, Caquetá; es claro para este Despacho que desborda sus alcances de responsabilidades como gestor fiscal, toda vez que quien adelantó las acciones conducentes para la determinación del avalúo comercial del bien inmueble tantas veces mencionado fue el señor Alcalde para la época de los hechos, y el señor Arcila Puentes no fue receptor de anticipos y por tanto no comportó la condición de gestor fiscal y en consecuencia no habrá lugar a imputar responsabilidad alguna.

En conclusión, mal haría este Despacho en endilgar responsabilidad por este hecho en contra del procesado que fungió en calidad de vendedor del bien inmueble, esto es el señor Heriberto Arcila Puentes, por la que la decisión que adoptará este Despacho no podrá ser otra que archivar para quien fungió en su calidad del vendedor del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, según contrato de compraventa No. 001 del 26 de diciembre de 2013 (folio 8 al 11), respecto del sobrecosto en la compra del mencionado bien inmueble. Toda vez que el señor Arcila Puentes no ostentó la calidad de gestor fiscal, es decir no tuvo la habilitación legal, administrativa con capacidad decisoria frente a los recursos, bienes o intereses patrimoniales bajo la administración o manejo de recursos, por consiguiente, al no asumir tales responsabilidades no participa ni contribuyó a la realización del presente sobrecosto. Contrario sensu el señor Rodrigo Andrés Castro Betancourt en su calidad de Alcalde, si ostentó la calidad de gestor fiscal, contribuyendo y ocasionando el detrimento patrimonial en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

Es necesario traer a colación lo señalado en los artículos 26 y 51 de la referida ley 80 de 1993, que a su tenor literal establecen:

**Artículo 26°.- Del Principio de Responsabilidad.** En virtud de este principio:

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

3o. Las entidades y los servidores públicos responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos.

**La expresión "Concurso" y "Términos de referencia" fueron derogadas por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.**

4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.

5o. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma.

6o. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.

7o. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

8o. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado. (Subrayado fuera de texto).

**Artículo 51°.- De la Responsabilidad de los Servidores Públicos.** El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.

Teniendo en cuenta los hechos configurados en el presente proceso, se materializa una gestión antieconómica e ineficiente en los términos prescritos en la Ley 610 de 2000, modificada parcialmente por el Decreto 403 de 2020. Lo que conlleva a establecer que las acciones desplegadas por los presuntos responsables violan flagrantemente el mandato constitucional del artículo 209 que establece:



Nit. 891.190.246-1

La Constitución Política de Colombia establece en su **Artículo 209**. *“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”*

Teniendo en cuenta los hechos configurados en el presente proceso, se puede determinar que se materializa una gestión antieconómica e ineficiente en los términos prescritos en la Ley 610 de 2000.

Respecto del ejercicio de la Gestión fiscal, ha mencionado la Corte Constitucional en Sentencia C-840 de 2001:

*“Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades, económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y facultades”.*

Sobre el particular es menester indicar que la Responsabilidad Fiscal únicamente se puede pregonar respecto de los servidores públicos que estén jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir que tengan poder decisorio sobre fondos o bienes del Estado puestos a su disposición, advirtiendo que esa especial responsabilidad está referida exclusivamente a los fondos o bienes públicos que hallándose bajo el radio de acción del titular de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y condiciones prescritos por la Ley.

La Ley 610 de 2000 considera la afectación del patrimonio del Estado con fundamento en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, como:

**“ARTÍCULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO.** *<Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.*

*Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público."*

El artículo 1 de la Ley 610 de 2000, es enfático en establecer que mediante el proceso de responsabilidad fiscal se determina la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal, o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

La jurisprudencia hace alusión que la gestión fiscal que comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, analizando la expresión con "Ocasión" define que la gestión fiscal es susceptible de operar como circunstancia u oportunidad para ejecutar o conseguir algo a costa de los recursos públicos, causando un daño al patrimonio estatal, evento en el cual la persona que se aproveche de tal situación, dolosa o culposamente, debe responder fiscalmente resarciendo los perjuicios que haya podido causar al erario.

En concordancia con lo anterior, aun cuando la presunta responsabilidad fiscal comprende a los directivos de las entidades y demás personas que manejen o administren recursos o fondos públicos, así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación; y a los contratistas y particulares que en ejercicio de alguna actividad generen perjuicio al patrimonio del Estado, este Despacho deberá endilgar responsabilidad fiscal en contra del investigado para el presente caso, en razón a que fungió en calidad de gestor fiscal y era quien tenía su disposición los bienes y recursos del Municipio de El Paujil y era el encargado de dar cumplimiento a los fines del Estado, preservar los recursos del Municipio y adquirir bienes y servicios a precios del mercado evitando presuntos sobre costos en la compra de los mismo.

De otra parte, en cuanto al daño antijurídico que surge del Contrato de Compraventa No. 001, suscrito entre el Municipio de El Paujil y el señor Heriberto Arcila Puentes, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, encuentra que revisado el acervo probatorio, puede determinarse que se generó un presunto daño al patrimonio del Estado, en cabeza del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, toda vez que era la persona encargada de hacer el respectivo avalúo comercial del bien inmueble objeto de la compra por parte del Entidad Territorial, y dentro de sus funciones establecidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia numeral 9 se precisa:

*"9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto."* Tal como se precisa su condición de Alcalde según acta de la Comisión Escrutadora Municipal en la cual se declara a Rodrigo Andrés Castro Betancourt como Alcalde del Municipio de El Paujil,



Nit. 891.190.246-1

Caquetá; para el período 2012-2015, Caquetá (folio 203) y acta de posesión No. 008 de 2011 de fecha 31 de diciembre de 2011; toda vez que ostentó la calidad de gestor fiscal descrita en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000, que prescribe:

*"(...) Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales (...)" (Negrillas por fuera del texto original).*

Así las cosas, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, incumplió con los deberes señalados por la Constitución y la Ley, respecto a ceñir sus actuaciones a la normatividad vigente, buscando un avalúo comercial que favoreciera las arcas de la Entidad Territorial que representaba.

De igual manera, se tiene que el objetivo principal o fin esencial de la Contraloría es determinar la existencia de la obligación reparadora por la conducta antijurídica de un agente público o de un particular, en el marco del circuito de la gestión fiscal, característica que se observa en el campo de acción laboral del implicado, por cuanto el universo fiscal dentro del cual transita como potencial destinatario, entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales.

Es decir, la gestión fiscal está ligada siempre a unos bienes o fondos estatales inequívocamente estipulados bajo la titularidad administrativa o dispositiva de un servidor público o de un particular, concretamente identificados.

Lo anterior se aprecia ampliamente en el hecho investigado, ya que la gestión fiscal le concede al servidor público o de manera excepcional al particular, por vía funcional o contractual, no solo la disposición material sobre el patrimonio público, sino esencialmente la disposición jurídica sobre el mismo. Es decir, la capacidad de disposición legítima y válida, acaeciendo naturalmente la posición de garante sobre tales bienes.



Nit. 891.190.246-1

Entonces, podemos concluir, en primer lugar, que la gestión fiscal hace relación con las tareas funcionales concernientes a la administración DIRECTA del patrimonio público, administración que debe someterse al principio de legalidad, así como a los postulados de la función pública en general y de la función administrativa.

Dicha compra presenta presunto detrimento patrimonial al Municipio, toda vez que por parte del de la Administración vigente para la época de los hechos, no se buscó un avalúo comercial del bien inmueble que favoreciera los intereses de Municipio y preservara los recursos institucionales y optó por solicitar un avalúo privado (con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de evaluador folio 35), y no acudió a un avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por tanto prefirió realizarlo ante un evaluador privado, el cual presenta sobrevaloración del precio del valor comercial, además de que presuntamente para la época del avalúo no se encontraba certificado por Fedelonjas, según certificación obrante a folio 35.

En consecuencia, mal haría este Despacho en endilgar responsabilidad por este hecho en contra del investigado que fungió en calidad de vendedor del bien inmueble el señor HERIBERTO ARCILA PUENTES, por cuanto no se evidencia que con su actuar contribuyera al daño patrimonial y en consecuencia no se configurarían los elementos de la responsabilidad fiscal, por lo que la decisión que adoptará esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal respecto al hecho de la venta del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, será la de archivar, toda vez que no se evidencia el manejo de recursos por parte del vendedor antes de realizarse el negocio jurídico de compraventa en cuantía de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE.**, por tanto se procederá al archivo de conformidad con el artículo 47 de la Ley 610 del 2000, para el vendedor, toda vez que no comportó la gestión fiscal:

*"(...) Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma.(...)"*

Finalmente, advierte el Despacho que la totalidad del bien inmueble comprado por el Municipio de El Paujil, Caquetá; producto del Contrato de Compraventa No. 001 de fecha 26 de diciembre de 2013, se escrituró efectivamente al Ente Territorial, pero no fue adquirido a precios del mercado, presentándose un presunto sobrecosto en la compra del bien inmueble. Lo que permite concluir que se presenta un presunto detrimento al Municipio en cuantía de **NOVENTA**



Nit. 891.190.246-1

Y SEIS MILLONES TREINTE Y DOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.

Por lo tanto, este Despacho procederá a **IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL** en contra del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.681.291, expedida en Florencia, Caquetá, quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos se desempeñó como Alcalde de El Paujil, Caquetá; de conformidad con la declaratoria de la Comisión Escrutadora Municipal de fecha 30 de octubre de 2011 (folio 203), el acta de posesión de fecha 31 de diciembre de 2011 obrante a folio 204, la promesa de compraventa No. 001, suscrita el día 26 de diciembre de 2013 (folio 8 al 10) y la ordenación del pago según comprobante de pago No. 3783 de fecha 30 de diciembre de 2013 (folio 12).

***"Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal.** El funcionario competente proferirá auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados".*

Como primera medida es necesario identificar los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, Artículo 125. Modificar el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

**ARTÍCULO 5o. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL.** La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.
- Un daño patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

En ese orden de ideas, en el marco constitucional colombiano, identificar la gestión fiscal conlleva establecer la administración o manejo de recursos públicos. Si no se establece previamente la naturaleza jurídica de los recursos no se puede intentar establecer si un sujeto público o privado se encuentra ante el ejercicio de gestión fiscal.

Respecto al tema de la calidad de gestores fiscales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en radicado No. 848 de 1996 acerca del concepto de gestión fiscal expresó:

*"(...) Gestión fiscal es, entonces, el conjunto de actividades económico jurídicas relacionadas con la adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, o disposición de los bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de*



Nit. 891.190.246-1

*sus rentas en orden a cumplir los fines de éste y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado (...)."*

Igualmente, La Corte Constitucional en Sentencia C- 549 de 1993 señaló:

*"(...) El concepto de gestión fiscal alude a la administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de recaudo o percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición. Consiguientemente, la vigilancia de la gestión fiscal se endereza a establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados o señalados por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración (Ley 42 de 1993, artículos 8 a 13)".*

Se presume entonces, que constituye Responsabilidad Fiscal una conducta **dolosa o gravemente culposa** atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal entre los dos elementos anteriores, los cuales se razonan en relación al implicado: **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETENCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá.

La Constitución Política en su artículo 267, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019, establece que dicho control se ejerce de manera posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principio que establezca la ley, con el fin de vigilar, determinar y establecer la responsabilidad de quienes realizan la Gestión Fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

Es entonces, que el erario siempre debe ser invertido buscando alcanzar el mayor beneficio o valor agregado para la buena y eficiente prestación del servicio a la comunidad regida a cargo de la Entidad Territorial y no un actuar irresponsable, liberado y sin medición de consecuencias financieras y presupuestales tal como se aprecia en los casos *sub examine*, pues, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETENCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.6691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; pues la naturaleza de su cargo, en primer lugar tiene responsabilidad directa de la ordenación del gasto en condiciones de la protección de los recursos de la Entidad, buscando el mayor beneficio posible

para la comunidad que administra, los cuales debían buscar el menor precio posible en la compraventa objeto de investigación

Es evidente así, que las acciones desplegadas por el indiciado aluden con presuntas irregularidades en la compra del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, que de acuerdo con la Conclusión de la Denuncia D-003-16, obrante a folio 205 al 209, determinó un presunto detrimento patrimonial, lo que se eleva a daño fiscal el valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

#### **9.1 Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.**

Se entiende por gestión fiscal de conformidad con el artículo 3 de la Ley 610 de 2000:

*"(...) El conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas (...)". (Subrayado fuera de texto).*

De esta forma, el proceso de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica en el sentido que un determinado servidor público o particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado debe asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares en que haya incurrido de manera dolosa o culposa en la administración de los dineros públicos.

De otra parte, destaca el artículo 4 de la Ley 610 de 2000:

**"ARTÍCULO 4o. OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL.** *La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.*

*Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.*

**PARAGRAFO 1o.** *La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad."*

Así mismo, se reitera que: La Responsabilidad Fiscal únicamente se puede pregonar respecto

de los servidores públicos o de los particulares que estén jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir que tengan poder decisorio sobre fondos o bienes del Estado puestos a su disposición, advirtiendo que esa especial responsabilidad está referida exclusivamente a los fondos o bienes públicos que hallándose bajo el radio de acción del titular de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y condiciones prescritos por la Ley.

La Corte Constitucional ha resumido la doctrina constitucional sobre la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal, subrayando el carácter no penal o disciplinario del mismo:

*"(...) Cabe destacar que este tipo de responsabilidad -la fiscal- se establece mediante el trámite de un proceso eminentemente administrativo, inicialmente regulado en la ley 42 de 1993 para el ámbito financiero y después en la ley 610 de 2000 para todos los casos, definido como el conjunto de actuaciones materiales y jurídicas que, con la observancia plena de las garantías propias del debido proceso, le compete adelantar a las Contralorías a fin de determinar la Responsabilidad que les asiste a los servidores públicos y a los particulares, por la mala administración o manejo de los dineros o bienes públicos a su cargo. A través del mencionado proceso, se persigue pues una declaración jurídica mediante la cual se defina que un determinado servidor público, ex-servidor o particular, debe responder patrimonialmente por la conducta dolosa o culposa en la realización de su gestión fiscal (...)". (Subrayado fuera del texto).*

En este sentido, se tiene el presunto sobrecosto producto del pago del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, comprado por el Municipio de El Paujil, Caquetá, sin acudir ni solicitar avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en cambio optar por la compra del mencionado bien, producto de un avalúo comercial privado, con quien presuntamente para la época del avalúo no estaba certificado para realizarlo, como tampoco se evidencia la solicitud por parte del señor Alcalde realizar solicitud ante Fedelonjas, condujeron a determinarse detrimento patrimonial al Municipio de El Paujil, Caquetá.

Aunado a lo anterior, retomamos algunas de las funciones, competencias y obligaciones que conexas el vínculo como administrador fiscal a los hechos acontecidos, pertinentes al implicado, de la siguiente manera:

El señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, conformidad con la declaratoria de la Comisión Escrutadora Municipal de fecha 30 de octubre de 2011 (folio 203), el acta de posesión de fecha 31 de diciembre de 2011 obrante a folio 204, la promesa de compraventa No. 001, suscrita el día 26 de diciembre de 2013 (folio 8 al 10) y la ordenación del pago según comprobante de pago No. 3783 de fecha 30 de diciembre de 2013 (folio 12), cuyo

Constitución Política de Colombia en su artículo 315 establece dentro de sus funciones a cumplir:

*"9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto."*

Pues la naturaleza del cargo tiene relación directa con la disposición y manejo de los recursos asignados al Municipio de El Paujil, Caquetá, con el fin de buscar y alcanzar los fines del Estado, por lo que se predica el nexo causal entre el hecho generador y la conducta culposa efectuada por el gestor fiscal.

La responsabilidad del Estado según la Corte Constitucional en Sentencia C-619 de agosto 8 de 2002, Magistrados Ponentes, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, señaló:

*"(...) el criterio o fundamento de imputación de la responsabilidad patrimonial del agente frente al Estado ha sido claramente definido por el constituyente. Como ha quedado visto, él se circunscribe a los supuestos de dolo y culpa grave y, por tanto, no es posible que se genere responsabilidad patrimonial del agente estatal cuando su obrar con culpa leve o levísima ha generado responsabilidad estatal."*

*"Así las cosas, el criterio de imputación a aplicar en el caso de la responsabilidad fiscal no puede ser mayor al que el constituyente fijó para la responsabilidad patrimonial del funcionario frente al Estado, pues se estaría aplicando un trato diferencial de imputación por el solo hecho de que a la declaración de responsabilidad se accede por distinta vía (...)"*

Es entonces, que se establece un nuevo marco jurídico para el daño antijurídico imputable al Estado como fundamento de su responsabilidad patrimonial. Debe tener origen en la conducta del agente que debe ser **dolosa o gravemente culposa**, para que pueda procederse a la indemnización resarcitoria a través de la acción de reparación establecida en la ley.

En consideración de los análisis realizados, cada vez que se establezca responsabilidad fiscal, debe enmarcarse la conducta en las acciones o actividades en el rango de dolo o culpa grave. Para abundar en definiciones es importante recordar la que trae a este propósito el Código Civil:

*"(...) **Culpa Grave:** "La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. Esta culpa en materia civiles equivale al dolo (...)" (artículo 63 del Código Civil).*

De lo anterior se colige que se predica responsabilidad de carácter fiscal a cargo del implicado **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT A TÍTULO DE CULPA GRAVE**, por cuanto en su calidad de **Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá**; para la época de los hechos, desconoció el ordenamiento jurídico acerca de los principios de las contratación estatal establecidas en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993:

**"ARTÍCULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.** *Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.*"

En consecuencia se evidencia que en su calidad de gestor fiscal, indica que no asumió con la debida responsabilidad la disposición y control de los bienes del Municipio, sobre los cuales se canceló el pago que se efectuó por parte del Municipio de El Paujil, Caquetá; al señor Heriberto Arcila Puentes en desarrollo del negocio jurídico compraventa del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, con destino a la construcción de un proyecto de vivienda, el cual se adquirió a través de un evaluador privado presuntamente no certificado para la época del avalúo ni se observa la solicitud ante Fedelonjas, además de que no se evidencia el trámite realizado por parte del Municipio ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el establecimiento de dicho avalúo, y que a la postre una vez realizado por parte de este Instituto determina un avalúo sensiblemente muy elevado próximamente en un 40%. Por tanto, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en su condición de Alcalde del Municipio de El Paujil, debió conservar el debido cuidado y manejo dado a los recursos de la Entidad Territorial al momento de adquirir el lote con destino a la construcción de vivienda, y es quien particularmente debía adoptar las medidas necesarias a efectos de asegurar la compra a precios del mercado, buscando el mejor precio que protegiera la finanzas de la Entidad.

En este sentido, el término manejar o administrar, no se refiere solamente al gasto público, de la norma se desprenden diferentes actividades como de adquisición, planeación, conservación, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, inversión, disposición y recaudación, de tal forma que su inversión produzca la maximización de resultados, obtener en igualdad de condiciones los bienes y servicios al menor costo posible logrando los objetivos y metas trazados teniendo en cuenta que el manejo de los recursos públicos está sujeto a las normas presupuestales vigentes.

Al respecto, es pertinente resaltar lo manifestado por la Contraloría General de la República en Concepto **80112-EE27661** del 07 de mayo de 2012, en el cual expuso *"Una de las actividades más importantes para procurar una adecuada gestión fiscal que realiza la administración es la*

contratación estatal. Mediante esta, el Estado realiza parte importante de la ejecución de recursos públicos y por ello merece un especial control de los órganos de control creados en la Constitución Política.

En este mismo orden de ideas, la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-713 de 1999, señaló lo siguiente:

*"El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado"*<sup>1</sup>.

Se observa entonces que la conducta desplegada por el implicado generó una gestión inadecuada que conllevó a incurrir en las conductas determinadas en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, que se refieren a la Gestión Fiscal y el Daño Patrimonial al Estado.

El artículo 1° de la Ley 610 de 2000, es enfático en establecer que mediante el proceso de responsabilidad fiscal se determina la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal, o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

En tal sentido, el artículo 1° de la Ley 610 de 2000, expresamente indica *"el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado"*. (Subrayado fuera de texto).

Así las cosas, con todo lo anteriormente expuesto encuentra esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal acreditado el primer elemento constitutivo de la Responsabilidad Fiscal.

<sup>1</sup>Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 1999.

## 9.2. Un daño patrimonial al Estado

Respecto de la certeza del daño ha dicho la corte en sentencia SU- 620: “Desde los principios generales de responsabilidad, es necesario destacar que el daño debe ser cierto”. Se entiende que el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante.

Por su parte la Ley 610 de 2000 artículo 6, establece:

**ARTÍCULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO.** <Apertes tachados INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.

La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en Sentencia del 04 de Abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor Fernando Hinestrosa, sostuvo sobre este requisito lo siguiente:

*“(...) Dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se de responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquél, cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizadora (...).”*

Entonces, se tiene plenamente demostrado en el plenario un detrimento fiscal ocasionado al erario del **Municipio de San Vicente El Paujil**, toda vez que el implicado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT quien ejercía funciones de Alcalde del mencionado Municipio quebrantó lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, “**ARTÍCULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.** Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en

las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo." En consecuencia, no se presentó el debido cuidado y la falta de diligencia en la compra del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-1109661, en desarrollo de la compraventa, generándose un presunto detrimento en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE., y por tanto se incurrió en una erogación antieconómica, ineficaz, inoportuna e injustificada, lo que conlleva a la certeza del daño.

Por lo anterior, el detrimento ocasionado al Municipio de El Paujil, Caquetá, se encuentra determinado en la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, que corresponde al valor pagado por encima del avalúo comercial establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el mes de diciembre de la vigencia 2013 (fecha en que se produce la compra), es decir fue una conducta que omitió el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, al no acudir en primera instancia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el fin de establecer el valor comercial del predio que finalmente compró el Municipio de El Paujil, conforme a la normatividad y procedimiento, pudiendo haber evitado que se generara el detrimento patrimonial en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

### 3. El nexa causal

Establecido de esta manera el hecho gravemente culposo y el daño que se le ha ocasionado al erario del **Municipio de El Paujil**, se deduce que se produjo con ocasión de la conducta del presunto responsable, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.6691.533, expedida en Florencia, Caquetá, quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, en lo relacionado con la compra con presunto sobrecosto del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, desconociéndose los principios de la contratación estatal en la compra del tantas veces mencionado bien inmueble, de esta manera no se cumplió con los fines del Estado; en ejercicio de gestión fiscal, es la personas directamente responsable del daño ocasionado a los recursos del Estado, pues con la omisión del señor Alcalde y con la falta del debido cuidado, custodia y vigilancia del presupuesto municipal, conlleva a que se origine el detrimento patrimonial generando la cuantificación causación del daño.

En conclusión, la violación directa e inexcusable del ordenamiento jurídico, generó un desconocimiento de los principios que orientan la función administrativa. Por lo anterior, se hace acreedor de la imputación de responsabilidad fiscal configurada en este proceso.

Conforme lo dicho en la parte motiva del presente auto y a la percepción y señalamiento figurado en las pruebas acercadas al expediente, no hay duda alguna de la existencia de la irregularidad fiscal producida y de la cual está establecida y demostrado el daño al patrimonio del Estado y los demás elementos constitutivos que conlleva al auto de imputación de Responsabilidad Fiscal por los hechos aquí investigados conforme lo enmarca el artículo 48 de la Ley 610 de 2000.

El control fiscal es una función pública, que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan recursos públicos, este control es ejercido por la Contraloría General de la República y/o Contralorías Territoriales, en procura del buen manejo de los recursos públicos y la buena inversión de los mismos para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

La Constitución Política en su artículo 267, modificado por el acto legislativo No. 2 de 2015, establece que dicho control se ejerce de manera posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley, con el fin de vigilar, determinar y establecer la responsabilidad de quienes realizan la Gestión Fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

El **ejercicio del control fiscal** se hace necesaria la aplicación del régimen probatorio a fin de establecer la existencia de hechos que puedan generar detrimento patrimonial, que afecte los intereses estatales.

La Responsabilidad Fiscal que determinan las Contralorías, debe estar soportada en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, a fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de los investigados, como derechos fundamentales consagrados en el **artículo 29 de la Constitución Política**.

La prueba es la **razón, argumento o elemento de convicción** que se saca del medio probatorio, para llevar el convencimiento al juez o investigador, sobre el acaecimiento de los hechos que se debaten en un proceso.

Para la recolección de las pruebas deben tenerse en cuenta los **principios** que rigen el aspecto probatorio y que se constituyen en los parámetros mínimos a tener en cuenta en la recolección e interpretación de las mismas.

Los principios de la prueba se refieren a los conceptos básicos que iluminan al operador en este caso, administrativo al momento de admitir, decretar, practicar y valorar los diversos tipos de pruebas que soportan el fallo. Estos principios son: **necesidad, unidad, comunidad,**

326



inmediación, publicidad, contradicción, evaluación, oportunidad, pertinencia, conducencia, igualdad, eficacia, equidad y el principio inquisitivo, entre otros.

Apreciar la prueba *"es la actividad intelectual que lleva a cabo el juez para medir la fuerza probatoria de un medio de prueba"*. Por lo tanto, **fuerza o valor probatorio** es la aptitud que tiene un hecho (solo o en concurrencia con otros) para demostrar judicialmente otro hecho o para que el mismo hecho quede demostrado.

Para adoptar su decisión con fundamento en la prueba, es indispensable que el juez se considere convencido por ella, o, dicho de otra manera, que se encuentre en **estado de certeza** sobre los hechos que declara.

Una indebida valoración del acervo probatorio puede generar una nulidad, que será la falta de motivación como irregularidad sustancial por violación de las formas propias de cada juicio, consistente en este caso, en no fijar el alcance de las pruebas en las cuales se fundamenta el juicio de responsabilidad (tipicidad – antijuridicidad y culpabilidad).

En el trámite procesal es necesario **PROBAR**, es decir, aportar al proceso los motivos o razones, por los medios y procedimientos aceptados por la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos y la responsabilidad de las personas.

Esta garantía constitucional implica: el derecho a buscar la prueba, el derecho a postular la prueba, el derecho a que se le decrete la prueba, el derecho a que se le practique la prueba, el derecho a que se le niegue la prueba, el derecho a que se le valore la prueba. La cual se puede definir como las razones, argumentos o elementos de convicción que se sacan del medio probatorio, para llevar al convencimiento del Juez o Instructor, sobre el acaecimiento de los hechos que se debaten en el proceso.

La **carga probatoria** es una facultad discrecional de ofrecer y solicitar pruebas y de intervenir en su práctica. Para que los hechos, cosas y actos que se plantean en el proceso estén debidamente probados, se recurre a la práctica de pruebas. **En materia de responsabilidad fiscal le corresponde al Estado, en cabeza del órgano de control fiscal correspondiente, probar los hechos investigados.**

La Prueba ha sido definida como: *"Todo lo que sirve para darnos la certeza acerca de la verdad de una proposición. La Certeza está en nosotros, la verdad en los hechos. Aquella nace cuando uno cree que conoce ésta; más por la facilidad humana, puede haber certeza donde haya verdad y viceversa"*. Es necesario llevar a cabo las acciones tendientes a obtener la finalidad procesal de la prueba, siendo ésta *"la de producir la certeza sobre la existencia o inexistencia"*

del elemento típico de la responsabilidad (gestión fiscal) y los estructurales de la misma", a través de los diferentes medios de prueba.

Los conceptos de **conducencia y pertinencia** son conceptos diversos; mientras el primero alude a la idoneidad de la prueba para demostrar lo que se pretende probar, el concepto de pertinencia cubre la relación lógica entre el medio de prueba y lo que se pretende probar, o la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio o la materia del proceso.

Al momento de llevar a cabo un análisis jurídico-fiscal en los hechos materia de investigación, el mismo se debe realizar de manera integral, apreciando cada una de las pruebas que reposan en el plenario, tanto las documentales, testimoniales, periciales o cualquier otro medio probatorio que se haya practicado dentro de los parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Lo anterior con base en lo normado en el **artículo 26 de la Ley 610 de 2000** que determina: *"APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional"*.

Lo anterior, permite inferir que el acervo probatorio contenido en las presentes diligencias conlleva a determinar responsabilidad fiscal en cabeza de los investigados, pues están dados los elementos contentivos de ella, los cuales se encuentran claramente definidos en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, esto es, *"- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal y - Un daño patrimonial al Estado y - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores."*

En la Constitución Política de 1991 se reconoce expresamente la función de control fiscal, como una actividad independiente y autónoma, diferenciada de la que corresponde a las clásicas funciones estatales, lo cual obedece no sólo a un criterio de división y especialización de las tareas públicas, sino a la necesidad político-jurídica de controlar, vigilar y asegurar la correcta utilización, inversión y disposición de los fondos y bienes públicos que pertenecen a la Nación.

En efecto tenemos que las pruebas aportadas, se ciñen a los principios de conducencia, pertinencia y necesidad y se valoran de conformidad con las reglas de la sana crítica y se aprecian en forma racional y en aplicación de los principios que rigen la acción fiscal y la función administrativa, siguiendo los parámetros fijados por nuestra Carta Política en sus artículos 29 y 209, la Ley 610 de 2000, la Ley 1474 de 2011, Ley 80 de 1993; y las demás normas concordantes con el objetivo de establecer la verdad de estos hechos con aplicación de análisis objetivos, prudentes y veraces.

La Contraloría Departamental del Caquetá llevó a cabo el trámite de la Denuncia D-003-16, acerca de presuntas irregularidades presentada en la compra del bien inmueble identificado

con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, de propiedad del señor Heriberto Arcila Puentes, evidenciándose presunto sobrecosto en la compra del mismo, toda que el Municipio de El Paujil no acudió al avalúo comercial realizado por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en su defecto lo hizo a través de avalúo particular que si bien está facultado por la Ley, presuntamente se contrató con una persona no certificada al momento de rendir el avalúo comercial ni tampoco se evidencia haber acudido a Fedelonjas para que determinara la persona idónea para que lo realizara; sin embargo consultado por la Contraloría Departamental del Caquetá el avalúo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi se evidencia un sobrecosto en cuantía de Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos cuarenta y Ocho Pesos (\$96.032.548) M/Cte.,

Por lo anterior se observa la existencia de una gestión fiscal ineficiente, ineficaz, antieconómica y desconocedora del ordenamiento jurídico para la realización del avalúo comercial del mencionado bien inmueble para la época de los hechos.

#### 10. TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, este Despacho procedió a vincular mediante Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, visible a folios 152 al 162, por los hechos presuntamente irregulares que se encuentran afianzados por la siguiente póliza expedida por la compañía de Seguros Aseguradora de Colombia, Seguro Póliza Multirriesgos No. 630-73-994000000032, vigente desde el 01 de noviembre de 2013 hasta el 01 de marzo de 2014, la cual amparaba la Cobertura Global de Sector Oficial por valor de \$100.000.000 M/Cte., constituidas a favor del Municipio de El Paujil, Caquetá.

Al respecto, es preciso señalar que el deducible pactado corresponde al 10% sobre el valor de la pérdida, así como también la Cobertura que se pretende hacer efectiva corresponde a la de Manejo Global Sector Oficial, precisando que la Entidad asegurada es el Municipio de El Paujil, Caquetá; asegurando que los hechos objeto de cobertura acaecieron dentro de la vigencia de la citada póliza que se pretenden afectar según lo dispuesto por el artículo 1073 del código de comercio, respecto al trámite de la Denuncia D-003-16, por la cuantía establecida de **Noventa y Seis millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos (\$96.032.548) M/Cte.**, se afectará la Póliza Multirriesgo No. 630-73-994000000032, hasta por la suma de **Cien Millones de Pesos (\$100.000.000) M/Cte.**,

#### 11. INSTANCIA

Una vez establecida la cuantía del detrimento al patrimonio del Estado en la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, y teniendo en cuenta que el valor de la menor cuantía



Nit. 891.190.246-1

establecido para la contratación del Municipio de El Paujil, Caquetá, para la vigencia 2013, corresponde a la suma de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL PESOS (\$165.060.000) M/CTE.**, tal y como se evidencia en la certificación obrante a folio 200, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal se tramitará en UNICA INSTANCIA dado que el valor estimado del detrimento no supera el valor de la menor cuantía establecido para la contratación de la entidad afectada.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Imputar Responsabilidad Fiscal en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, en contra del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.691.533, expedida en Florencia; Caquetá; quien se desempeñó como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETÁ**, inclusive para la época de ocurrencia de los hechos, y tener como tercero civilmente responsable a la aseguradora **SOLIDARIA DE COLOMBIA**, en la cuantía **OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$86.429.293) M/CTE.**, en virtud de las póliza No. 630-73-994000000032, vigente desde el 01 de noviembre de 2013 hasta el 01 de marzo de 2014, expedidas por la **Compañía de Seguros Solidaria de Colombia NIT 860.524.654-6**, conforme se expresa en la parte motiva de la presente providencia.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Archivar la responsabilidad fiscal a favor del investigado **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291, toda vez que de acuerdo con las consideraciones realizadas en la presente providencia no comportó la gestión fiscal.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar personalmente del presente auto conforme al artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, así:

- 1) Al señor **Rodrigo Andrés Castro Betancourt**, al correo electrónico [rodrigoandrescastro@hotmail.com](mailto:rodrigoandrescastro@hotmail.com), y a través de su defensor de oficio la estudiante de Derecho John Edwin Ortiz Cuéllar, al correo electrónico [john.ortiz@udla.edu.co](mailto:john.ortiz@udla.edu.co) (folio 279).
- 2) Al señor **Heriberto Arcila Puentes**, al correo electrónico [luiscarcila2424@gmail.com](mailto:luiscarcila2424@gmail.com) (folio 292).
- 3) Al tercero Civilmente Responsable la compañía de **Seguros Solidaria de Colombia** al correo electrónico [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co)

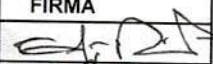

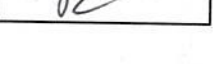
**ARTÍCULO CUARTO:** Fíjese el presente proceso de **UNICA INSTANCIA** teniendo en cuenta que el detrimento al patrimonio del Estado corresponde a la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TRIENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, teniendo en cuenta que el valor de la menor cuantía establecido para la contratación del Municipio de El Paujil, Caquetá; para la vigencia 2013 corresponde a la suma de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL PESOS (\$165.060.000) M/CTE.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

**ARTÍCULO QUINTO:** Dejar el presente proceso en la Secretaría de esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, para que los sujetos procesales, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del proceso, presenten los argumentos de defensa frente a las imputaciones aquí señaladas y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer de conformidad al art. 50 de la Ley 610 de 2000.

**ARTÍCULO SEXTO:** Cumplido el término anterior, por la Secretaría de este Despacho remítase el presente proceso al Despacho del señor Contralor Departamental del Caquetá para que surta el grado de consulta respecto del presente Auto de Imputación Mixta, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**HERLINDA JOHANA RIVERA RAMÍREZ**  
 Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Elaboró:	Edgar Medina Pérez	Profesional Universitario	26-02-24	
Revisó:	Herlinda Johana Rivera Ramírez	DTRF.	26-02-24	
Aprobó:	Herlinda Johana Rivera Ramírez	DTRF.	26-02-24	

florencia-Caguets - 04/03/2024

Señores

Contraloría Departamental del Cauca

Nit. 899.190.246-1

E.S.D

Asunto: Acceso a Expediente.


El día 04 de marzo de 2024, el suscrito Defensor de Oficio del Señor Romulo Andres Castro Betancor, Imputado en Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario de Única Instancia N° 1748, en visita a las instalaciones de la Contraloría Departamental, tuve acceso al Expediente del Proceso ya referido a efectos de verificación de documentos en relación con el Auto de Imposición de Pena N° 001 de fecha 26/02/2024, así: folios 3, 4 al 7, 8 al 11, folio 12, folios 25 al 33, 37, 40 al 50, 54 al 55, 56, 61, 63 al 97, 152 al 162, 200, 201, 204, 207 al 209.

Le presento a solicitud y por Instrucciones del Señor Profesor Universitario Dr. EDGAR FERRER PÉREZ a cargo del proceso.

Respetuosamente,

Juan Edwin Castro Caceres  
C.C. 11449452 de facultades  
Ejército Nacional y suscritor.

332

 Cuerpo del mensaje:

Señores:

RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURTH

JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR

HERIBERTO ARCILA PUENTES

SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA

En la presente fecha se procede a notificar del Auto de Imputación mixta del Proceso de Responsabilidad Fiscal N°1148 del 26 de febrero del 2024, en donde se procede al Auto de Imputación de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de la ley 610 del 2000.

Es preciso indicarle que contra el presente Auto de Imputación para que los sujetos procesales, presente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del proceso los Argumentos de defensa frente a las imputaciones aquí señaladas.

Contra el presente auto No procede Recurso.

Adjunto copia íntegra del Acto Administrativo en (36) Hojas

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes




El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

**LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO**

**SECRETARIA**

Correo: [lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co](mailto:lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co)


 Adjuntos

Nombre

Suma de Verificación (SHA-256)

AUTO\_DE\_IMPUTACION\_MIXTA\_DEL\_PR\_F\_1148\_0001.pdf

69deaabdef6e5757f703ee25661b636bed9ac3dabfd459cc7848aa4b3c1bd310

 Descargas

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 527 de 1999, la presente notificación electrónica como los documentos adjuntos a esta, son documentos íntegros, ya que es posible determinar que los mismos no han sido modificados ni alterados desde el momento en que fue enviado el mensaje de datos por parte del emisor del mensaje, por lo tanto dichos documentos tienen plena validez jurídica y probatoria.

**[www.4-72.com.co](http://www.4-72.com.co)**

333

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S Certifica que ha realizado por encargo de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA identificado(a) con NIT 891190246 el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

#### Resumen del mensaje

**Id mensaje:** 1071  
**Emisor:** contraloriadelcaqueta@contraloriadelcaqueta.gov.co (no-reply@contraloriadelcaqueta.gov.co)  
**Destinatario:** rodrigoandrescastro@hotmail.com - RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURTH  
**Asunto:** NOTIFICACION DEL AUTO DE IMPUTACION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148  
**Fecha envío:** 2024-02-26 09:21  
**Estado actual:** Acuse de recibo

#### Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
<p><b>Estampa de tiempo al envío de la notificación</b></p> <p>El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - Artículo 23 Ley 527 de 1999.</p>	<p><b>Fecha:</b> 2024/02/26 <b>Hora:</b> 09:52:13</p>	<p><b>Tiempo de firmado:</b> Feb 26 14:52:13 2024 GMT <b>Política:</b> 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.6.0.</p>
<p><b>Acuse de recibo</b></p> <p>Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el Artículo 24 de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.</p>	<p><b>Fecha:</b> 2024/02/26 <b>Hora:</b> 09:52:15</p>	<p>Feb 26 09:52:15 cl-t205-282cl postfix/smtp[16455]: ED9F21248828: to=&lt;rodrigoandrescastro@hotmail.com&gt; t ; relay=hotmail-com.olc.protection.outlook.com[52.101.41.7]:25, delay=1.5, delays=0.08/0.03/0.49/0.95, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 &lt;a07ca2156ac42c59afe500cf6b6a832c1c2361bf20b04f1316369cac381f1be2@correocertificado4-72.com.co&gt; [InternalId=11115375387902, Hostname=DS0PR12MB6608.namprd12.prod.outlook.com] 26728 bytes in 0.227, 114.828 KB/sec Queued mail for delivery -&gt; 250 2.1.5)</p>

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

**Importante:** En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, en estos casos, si el mensaje no pudo ser entregado dicho servidor enviará una segunda respuesta indicando que no fue exitosa la entrega del mensaje, si no hay una segunda respuesta del servidor de correo electrónico, quiere decir que tu mensaje fue entregado satisfactoriamente por lo que este documento pasa a constituir acuse de recibo

#### Contenido del Mensaje

Asunto: NOTIFICACION DEL AUTO DE IMPUTACION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S Certifica que ha realizado por encargo de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA identificado(a) con NIT 891190246 el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

### Resumen del mensaje

**Id mensaje:** 1072  
**Emisor:** contraloriadelcaqueta@contraloriadelcaqueta.gov.co (no-reply@contraloriadelcaqueta.gov.co)  
**Destinatario:** john.ortiz@udla.edu.co - JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR  
**Asunto:** NOTIFICACION DEL AUTO DE IMPUTACION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148  
**Fecha envío:** 2024-02-26 09:21  
**Estado actual:** Lectura del mensaje

### Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
<p><b>Estampa de tiempo al envío de la notificación</b></p> <p>El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - Artículo 23 Ley 527 de 1999.</p>	<p><b>Fecha:</b> 2024/02/26 <b>Hora:</b> 09:52:13</p>	<p><b>Tiempo de firmado:</b> Feb 26 14:52:13 2024 GMT <b>Política:</b> 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.6.0.</p>
<p><b>Acuse de recibo</b></p> <p>Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el Artículo 24 de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.</p>	<p><b>Fecha:</b> 2024/02/26 <b>Hora:</b> 09:52:17</p>	<p>Feb 26 09:52:17 cl-t205-282cl postfix/smtp[16784]: 85627124881A: to=&lt;john.ortiz@udla.edu.co&gt;, relay=udla-edu-co.mail.protection.outlook.com[52.101.41.4]:25, delay=4.2, delays=0.12/0.2.2/1.9, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 &lt;8299a58c12b328082e6d43673f8e56b96e2c127af334b077d5ffb8635ebf83c1@correocertificado4-72.com.co&gt; [InternalId=5862630379813, Hostname=MN0P220MB1992.NAMP220.PROD.OUTL O OK.COM] 27700 bytes in 0.287, 93.942 KB/sec Queued mail for delivery)</p>
<p><b>El destinatario abrió la notificación</b></p>	<p><b>Fecha:</b> 2024/02/26 <b>Hora:</b> 10:06:16</p>	<p><b>Dirección IP:</b> 186.102.12.178 <b>Agente de usuario:</b> Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 2201117SL Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/111.0.5563.116 Mobile Safari/537.36</p>
<p><b>Lectura del mensaje</b></p>	<p><b>Fecha:</b> 2024/02/26 <b>Hora:</b> 10:06:24</p>	<p><b>Dirección IP:</b> 186.102.12.178 Colombia - Meta - Villavicencio <b>Agente de usuario:</b> Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36</p>

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así

Acta de Envío y Entrega de Correo  
Electrónico

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S Certifica que ha realizado por encargo de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA identificado(a) con NIT 891190246 el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

## Resumen del mensaje

**Id mensaje:** 1073

**Emisor:** contraloriadelcaqueta@contraloriadelcaqueta.gov.co (no-reply@contraloriadelcaqueta.gov.co)

**Destinatario:** luisarcila2424@gmail.com - HERIBERTO ARCILA PUENTES

**Asunto:** NOTIFICACION DEL AUTO DE IMPUTACION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148

**Fecha envío:** 2024-02-26 09:21

**Estado actual:** Acuse de recibo

## Trazabilidad de notificación electrónica

## Evento

## Fecha Evento

## Detalle

## ● Estampa de tiempo al envío de la notificación

**Fecha:** 2024/02/26  
**Hora:** 09:52:13

**Tiempo de firmado:** Feb 26 14:52:13 2024 GMT  
**Política:** 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.6.0.

El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - Artículo 23 Ley 527 de 1999.

## ● Acuse de recibo

**Fecha:** 2024/02/26  
**Hora:** 09:52:14

Feb 26 09:52:14 cl-t205-282cl postfix/smtp[818]: AA2F91248811: to=<luisarcila2424@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[172.253.122.26]:25, delay=1.1, delays=0.09/0.02/0.15/0.85, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 1708959134 f22-20020ac84716000000b0042c4208f213si510 4465qtp.44 - gsmtip)

Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el Artículo 24 de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

**Importante:** En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, en estos casos, si el mensaje no pudo ser entregado dicho servidor enviará una segunda respuesta indicando que no fue exitosa la entrega del mensaje, si no hay una segunda respuesta del servidor de correo electrónico, quiere decir que tu mensaje fue entregado satisfactoriamente por lo que este documento pasa a constituir acuse de recibo

## ✉ Contenido del Mensaje

Asunto: NOTIFICACION DEL AUTO DE IMPUTACION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148

Cuerpo del mensaje:

Acta de Envío y Entrega de Correo  
Electrónico

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S Certifica que ha realizado por encargo de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA identificado(a) con NIT 891190246 el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

## Resumen del mensaje

**Id mensaje:** 1074

**Emisor:** contraloriadelcaqueta@contraloriadelcaqueta.gov.co (no-reply@contraloriadelcaqueta.gov.co)

**Destinatario:** notificaciones@solidaria.com.co - SEGUROS LA SOLIDARIA

**Asunto:** NOTIFICACION DEL AUTO DE IMPUTACION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148

**Fecha envío:** 2024-02-26 09:21

**Estado actual:** Lectura del mensaje

## Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
<b>Estampa de tiempo al envío de la notificación</b>  El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - <b>Artículo 23 Ley 527 de 1999.</b>	<b>Fecha:</b> 2024/02/26 <b>Hora:</b> 09:52:13	<b>Tiempo de firmado:</b> Feb 26 14:52:13 2024 GMT <b>Política:</b> 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.6.0.
<b>Acuse de recibo</b>  Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el <b>Artículo 24 de la Ley 527 de 1999</b> y sus normas reglamentarias.	<b>Fecha:</b> 2024/02/26 <b>Hora:</b> 09:52:14	Feb 26 09:52:14 cl-t205-282cl postfix/smtp[16789]: 2EAEA124880B: to=<notificaciones@solidaria.com.co>g t;; relay=solidaria-com-co.mail.protection.o u tlook.com[52.101.11.10]:25, delay=1.7, delays=0.08 /0.05/0.43/1.2, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <fdffc1befc56c44c757bc748f98a2c0e7020 b dab15d40c96f8bc6cfb6c62c486@correocerti fi cado4-72.com.co> [InternalId=114856015461616, Hostname=MW4PR17MB4827.namprd17.prod.out look.com] 27672 bytes in 0.166, 162.203 KB/sec Queued mail for delivery)
<b>El destinatario abrió la notificación</b>	<b>Fecha:</b> 2024/02/26 <b>Hora:</b> 10:58:05	<b>Dirección IP:</b> 191.107.133.67 <b>Agente de usuario:</b> Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)
<b>Lectura del mensaje</b>	<b>Fecha:</b> 2024/02/26 <b>Hora:</b> 11:52:49	<b>Dirección IP:</b> 45.238.183.160 Colombia - Cundinamarca - Cota <b>Agente de usuario:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

**Importante:** En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft

338

**Envío Argumentos de Defensa**

John Edwin Ortiz Cuellar &lt;john.ortiz@udla.edu.co&gt;

11 de marzo de 2024, 16:59

Para: "lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co" &lt;lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;

Cc: Edgar Medina Perez &lt;emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co&gt;, "rodrigoandrescastro@hotmail.com" &lt;rodrigoandrescastro@hotmail.com&gt;

Floencia, 11 de marzo de 2024

Señores

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**

E.S.D

**REFERENCIA:****ARGUMENTOS DE DEFENSA****TIPO DE PROCESO:****RESPONSABILIDAD****FISCAL ÚNICA INSTANCIA****RADICADO:**

PRF-1148

**ENTIDAD AFECTADA:****MUNICIPIO DEL PAUJIL****PRESUNTO RESPONSABLE:****RODRIGO ANDRÉS****CASTRO BETANCOURT****VALOR DETRIMENTO PATRIMONIAL:**

\$96.032.548 M/CTE COP

**JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR**, identificado con cédula de ciudadanía N°11.449.452 expedida en Facatativá Cundinamarca, estudiante de décimo semestre de Derecho de la universidad de la Amazonia, con código estudiantil N°1910087014, como **DEFENSOR DE OFICIO** designado en el proceso de la referencia, con sustento en el artículo 50 de la ley 610 de 2000, presento de manera respetuosa ante su Despacho, los argumentos de defensa que pretendo hacer valer contra el **AUTO DE IMPUTACIÓN MIXTA No. 001**, de fecha 26 de febrero de 2024, que en su parte resolutoria imputa dentro del proceso Ordinario de única instancia PRF-1148 con responsabilidad fiscal a título de **CULPA GRAVE**, a mi defendido, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, Alcalde del municipio de El Paujil Caquetá, para la época de los hechos, en virtud de las irregularidades en la compra del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 420-109661, el cual no fue adquirido a precios del mercado, presentándose un sobrecosto en la compra del mismo que derivó en un presunto detrimento al patrimonio del municipio en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/Cte. COP.

Respetuosamente,

**JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR**


Defensor de Oficio

Cédula de ciudadanía 11.449.452 de Facatativá Cundinamarca

Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Amazonia

Adscrito al Consultorio Jurídico Código Estudiantil N°1910087014  
Número de Celular 318 549 4034 e-mail Institucional: john.ortiz@udla.edu.co

---

 **Argumentos de Defensa PRF-1148.pdf**  
3399K

339

Florencia, 11 de marzo de 2024

Señores

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**  
E.S.D

**REFERENCIA:**  
**TIPO DE PROCESO:**  
**RADICADO:**  
**ENTIDAD AFECTADA:**  
**PRESUNTO RESPONSABLE:**  
**VALOR DETRIMENTO PATRIMONIAL:**

**ARGUMENTOS DE DEFENSA**  
**RESPONSABILIDAD FISCAL ÚNICA INSTANCIA**  
PRF-1148  
**MUNICIPIO DEL PAUJIL**  
**RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**  
\$96.032.548 M/CTE COP

**JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR**, identificado con cédula de ciudadanía N°11.449.452 expedida en Facatativá Cundinamarca, estudiante de décimo semestre de Derecho de la universidad de la Amazonia, con código estudiantil N°1910087014, como **DEFENSOR DE OFICIO** designado en el proceso de la referencia, con sustento en el artículo 50 de la ley 610 de 2000, presento de manera respetuosa ante su Despacho, los argumentos de defensa que pretendo hacer valer contra el **AUTO DE IMPUTACIÓN MIXTA No. 001**, de fecha 26 de febrero de 2024, que en su parte resolutoria imputa dentro del proceso Ordinario de única instancia PRF-1148 con responsabilidad fiscal a título de **CULPA GRAVE**, a mi defendido, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, *Alcalde del municipio de El Paujil Caquetá, para la época de los hechos*, en virtud de las irregularidades en la compra del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 420-109661, el cual no fue adquirido a precios del mercado, presentándose un sobrecosto en la compra del mismo que derivó en un presunto detrimento al patrimonio del municipio en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/Cte. COP.

## I. HECHOS

**PRIMERO-**. A petición del municipio de **EL PAUJIL** el señor **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO** realiza el día 10 de mayo de 2012 informe de avalúo del predio correspondiente a la **FICHA CATASTRAL N°00-01-00031-0004-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA N°440-88285**. En dicho informe, determina que el valor comercial total del terreno corresponde a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$240.000.000) DE PESOS M/Cte. COP**.

**SEGUNDO-**. Por medio de **ACUERDO MUNICIPAL N°011** del 22 de junio de 2012, el **CONCEJO MUNICIPAL** del **PAUJIL** Caquetá, autorizó al entonces **ALCALDE MUNICIPAL**, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, para que con el lleno de todo todos los requisitos legales, presupuestales y técnicos, adquiriera en nombre del municipio, un terreno, previos los estudios técnicos adelantados por la secretaría de **PLANEACIÓN MUNICIPAL**, con el fin de ejecutar los programas de interés social y/o interés prioritario, consignados en el plan de desarrollo.

**TERCERO-** Posteriormente, el día 26 de diciembre de 2013, por medio de **CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA VENTA N°001**, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT** en calidad de **ALCALDE MUNICIPAL** y el señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, se comprometen a comprar y vender respectivamente, un terreno para la construcción de un proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del municipio de **EL PAUJIL**, Caquetá, por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$240.000.000) de PESOS M/Cte. COP**. Cabe señalar que el señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, había adquirido por compra en los términos de la escritura pública número 452 del 10 de diciembre de 2013, el terreno identificado con **FICHA CATASTRAL N°00-01-00031-0004-000**, a su anterior propietario.

**CUARTO-** Es así como, mediante escritura pública número 3078 del día 26 de diciembre de 2013 y bajo el folio de **MATRÍCULA INMOBILIARIA 420-109661**, el señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, vende al municipio de **EL PAUJIL**, Caquetá, el inmueble correspondiente a la **FICHA CATASTRAL N°00-01-00031-0004-000**. Dicha venta, fue autorizada por la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**, mediante **RESOLUCIÓN NÚMERO 019** del día 17 de diciembre de 2013. Finalmente, es preciso citar, que por medio del **COMPROBANTE NÚMERO 3783**, el municipio de **EL PAUJIL**, Caquetá, efectuó el pago con dineros del rubro código 020204050201020103, del terreno ya referido, cuyo objeto era la construcción del proyecto de vivienda.

**QUINTO-** Por medio del memorando CF -066 del 5 de abril de 2016, la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral remitió la denuncia D-003-16 relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en municipio de El Paujil. De acuerdo con el traslado de dicha denuncia, se estableció que el municipio ya referido, suscribió el contrato de compraventa N.°001 del 26 de diciembre de 2013, con el señor Heriberto Arcila Puentes, en cuantía de **DOS CIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) Moneda Cte. COP**, con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del citado ente territorial, el cual fue adquirido presuntamente con sobrecosto en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE. COP**.

## **II. ULTIMAS ACTUACIONES PROCESALES:**

**PRIMERO-** El señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, quien fungía como **ALCALDE** del **MUNICIPIO DE EL PAUJIL**, según manifiesta el ente acusador, no observo el principio de responsabilidad, transparencia y economía al adquirir y pagar por el terreno identificado con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 420-109661**, destinado a construcción del proyecto de vivienda de interés social y/o interés prioritario consignado en el plan de desarrollo, un sobrecosto cuya cuantía asciende a **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE. COP**, conllevando con ello un daño patrimonial al estado y en contra del **MUNICIPIO DE EL PAUJIL**, materializando además, una gestión antieconómica e ineficiente en los términos

340

prescritos en la ley 610 de 2000. Es por ello que la **DIRECTORA TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL** de la **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, mediante auto de apertura N°025 del 18 de diciembre de 2018 y, con fundamento en la denuncia D-003-16, **AVOCA CONOCIMIENTO Y DECLARA ABIERTO** proceso de responsabilidad fiscal ordinario N°1148, en contra de los señores **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, HERIBERTO ARCILA PUENTES y a la COMPAÑÍA DE SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.**, ésta última, bajo la calidad de **TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE**, por las presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto ya referido, y que fuera constatado a petición del ente de control, por el **INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI**, entidad que determinó que de acuerdo con el avalúo comercial, el valor estimado del bien con **FICHA CATASTRAL N°00-01-00031-0004-000**, a diciembre de 2013, correspondía a la suma de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS (\$143.967.452) M/Cte. COP.**

**SEGUNDO.-** Mediante Auto de Imputación Mixta N.º001, de fecha 26 de febrero de 2024, dentro del proceso Ordinario de única instancia PRF-1148, la **DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL** de la **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, resolvió **IMPUTAR** responsabilidad fiscal a título de **CULPA GRAVE**, a mi defendido, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE. COP** y Archivar la responsabilidad fiscal a favor del Investigado **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, quien obrara como vendedor del bien inmueble a que se ha hecho referencia.

### **III. MARCO NORMATIVO GENERAL Y BLOQUE DE CONVENCIONALIDAD**

#### **CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS:**

**Artículo 25. Protección Judicial** 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

#### **Constitución Política de 1991:**

**ARTÍCULO 29.** El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

**ARTÍCULO 83:** Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.

**ARTÍCULO 122:** (...) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.

**ARTICULO 209 SUPERIOR.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

**ARTÍCULO 230:** Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

**ARTÍCULO 315:** Son atribuciones del alcalde:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos.
5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio.
6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.
8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que solo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado.
9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.
10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen.

#### **Código General del Proceso:**

**ARTÍCULO 42. DEBERES DEL JUEZ.** Son deberes del juez:

...

2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este código le otorga.
3. Prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.

## **LEY 610 DE 2000:**

De conformidad con lo establecido en la ley 610 de 2000, se advierten los siguientes articulados:

### **Aspectos Generales:**

**Artículo 2°. Principios orientadores de la acción fiscal.** En el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo.

**Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal.** (Modificado por el At. 125 del Decreto 403 de 2020) La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores".

**Artículo 6 Daño patrimonial al Estado** (Modificado por el At. 126 del Decreto 403 de 2020) Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.

### **De las pruebas:**

**Artículo 23. Prueba para responsabilizar.** El fallo con responsabilidad fiscal sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado.

**Artículo 26. Apreciación integral de las pruebas.** Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional.

**Artículo 32. Oportunidad para controvertir las pruebas.** El investigado podrá controvertir las pruebas a partir de la exposición espontánea en la indagación preliminar, o a partir de la notificación del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

### **Del Trámite del Proceso:**

**Artículo 47. Auto de archivo.** *Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma.*

**Artículo 50. Traslado.** Los presuntos responsables fiscales dispondrán de un término de diez (10) días contados a partir del día siguiente a la notificación personal del auto de imputación o de la desfijación del edicto para presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el auto y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer. Durante este término el expediente permanecerá disponible en la Secretaría.

**Artículo 54. Fallo sin responsabilidad fiscal.** El funcionario competente proferirá fallo sin responsabilidad fiscal, cuando en el proceso se desvirtúen las imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal.

**Artículo 66. Remisión a otras fuentes normativas.** En los aspectos no previstos en la presente ley se aplicarán, en su orden, las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal. En materia de policía judicial, se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

### **Decreto Reglamentario 1420 de 1998:**

**Artículo 2º:** "Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más probable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien".

### **Decreto Nacional 734:**

**Artículo 3.4.2.6.1.** Arrendamiento y adquisición de inmuebles. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa.

Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.

Toda vez que el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, advierte que la **DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, en virtud del **AUTO N°001**, de fecha **26 de febrero de 2024**, **RESOLVIÓ: "IMPUTAR** responsabilidad fiscal en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE. COP** en contra de mi **DEFENDIDO"** procedo, de manera respetuosa y amparado en el marco legal y jurídico Colombiano a presentar ante su **DESPACHO**, **LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA** de mi **PROHIJADO**, de conformidad con las siguientes:

#### **IV. CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS:**

En punto de lo manifestado por el ente acusador, mi Representado, no observó el principio de responsabilidad, transparencia y economía al adquirir y pagar por el terreno identificado con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 420-109661**, destinado a construcción del proyecto de vivienda de interés social y/o interés prioritario consignado en el plan de desarrollo, un sobrecosto cuya cuantía asciende a **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE. COP**, conllevando con ello, un daño patrimonial al estado y en contra del **MUNICIPIO DE EL PAUJIL**, materializando además, una gestión antieconómica e ineficiente en los términos prescritos en la ley 610 de 2000.

Revisado el contenido del Auto de Imputación N.º 001, proferido por la Contraloría Departamental, se evidencia que la misma en sus argumentaciones, señaló presuntas irregularidades respecto de los siguientes:

- ✓ PRIMERO: EL AVALÚO.
- ✓ SEGUNDO: LA IDONEIDAD DEL PERITO AVALUADOR.
- ✓ TERCERO: LA LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES DEL SEÑOR **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**

Aquí, es preciso referir, que en línea con lo anterior, el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, en defensa de las garantías, prerrogativas y derechos que le asisten al señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT** y en el ejercicio de Defensa y Contradicción que a éste le corresponde, desarrollará el presente escrito en apartados que obrarán en el mismo orden allí referido y que para acompañar los argumentos y consideraciones que a cada uno corresponden, se permitirá incorporar al presente escrito, capturas de imagen, tomadas de los documentos y material probatorio que obra en el expediente del proceso de la referencia, que corroborarán las actuaciones y procedimientos desplegados por la Administración Municipal en cabeza de mi Prohijado. De los elementos de prueba que reposan en el expediente, se infiere, desde ya, no se ha adelantado la correspondiente valoración probatoria, acorde con lo referido en la ley 610 de 2000.

Éste y otros hallazgos importantes respecto de lo actuado por parte de la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del

Caquetá, emergerán y se harán notorios, conforme al desarrollo de dichos apartados, en el orden que a cada uno corresponde, así:

### APARTADO PRIMERO: DEL AVALÚO:

Sirva precisar que mi PROHIJADO, en primer lugar, acudió ante PERITO AVALUADOR PROFESIONAL, esto es, el señor **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, Ingeniero Civil de Profesión, inscrito en el **REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES**, con Matrícula R.N.A/C.C. - 25-1885, para que éste, realizara el informe de **AVALÚO** del predio con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285**.

**Mencionado PROFESIONAL**, en efecto, el día 10 de mayo de 2012, a solicitud de la Alcaldía Municipal del Paujil, presentó informe de **AVALÚO DE PREDIO RURAL**, con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285**, ubicado en la vereda el Borugo del mismo municipio. En dicho informe destacan, entre otros aspectos, el apartado **"N.º 5 INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS - 5.1 METODOLOGÍA - COMPARACIÓN DE MERCADOS"**, en donde manifiesta el Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO**, lo siguiente:

*"Para efectos de establecer el valor del terreno se tuvieron en cuenta las características propias del mismo, las vías de acceso, estado de aprovechamiento del predio, la consulta de conocedores del sector, con conocedores del mercado inmobiliario. Se trabajó con 3 variables estadísticas una de medida de tendencia central y dos de dispersión que son: Media aritmética, desviación Standard y coeficiente de variación, el cual se acepta en la toma de decisiones por ser inferior a 7.5%"*

Seguido a ello, aprecia el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, cuadro estadístico contenido en el apartado **"5.2 CUADRO ESTADÍSTICO"**, del cual inserto para su correspondiente corroboración, captura de imagen respectiva, así: **(Ver Captura N.º 1)**

5.2 CUADRO ESTADÍSTICO					
INFORMANTE	VALOR/ Ha.	MEDIA ARITMÉTICA	39.250.000		
Victor Gomez	38.000.000	DESVIACION ESTÁNDAR	2.061.552,81		
Lazaro Rivera	41.000.000	COEF. DE VARIACIÓN	5,25%		
Alex Moises	37.000.000	ADOPTADO	\$ 39.250.000		
Perito	41.000.000				
	157.000.000				
		431.034			
5.3 VALOR POR HA. PROPUESTA POR EL ENCUESTADO POR CLASE AGROLÓGICA					
CLASE I	CLASE II	CLASE III	CLASE IV	CLASE V	CLASE VI
			\$ 39.250.000		

**Captura N.º 1**

Nótese que el Ingeniero **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, consultó el valor por Hectárea con los señores **VÍCTOR GÓMEZ, LÁZARO RIVERA y ALEX MOISES**. Que los valores aportados por éstos, más el que aporta el PERITO, dan cuenta de un valor estimado de \$39.250.000 por Hectárea, al cual, se le suman aquellos con ocasión de las mejoras, en

virtud de los 1334 metros de Cerca Eléctrica en Alambre Acerado, por valor de \$2.001.000 y \$2.500.000, por los pastos mejorados, presentes en CINCO (5) de las SEIS (6) hectáreas del predio, como así se establece en el apartado "6. MEJORAS"- 6.1 CERCAS y 6.3 USO ACTUAL DEL SUELO. Lo anterior, se puede apreciar en la **Captura N.º 2**.

**FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO**  
**INGENIERA CIVIL**

Avalúos en general, Interventorias, acueductos, vías, vivienda

<b>5.4 VALOR INTRÍNSECO DEL TERRENO</b>					
CLASE AGROLÓGICA	ÁREA /Ha.	VALOR \$ / Ha.	VR. \$ / por clase agrológica		
Clase IV	6,00	\$ 39.250.000	\$ 235.500.000		
		<b>SUBTOTAL 1</b>	\$ 235.500.000		
<b>6. MEJORAS</b>					
<b>6.1 CERCAS</b>					
CLASE	METROS	MATERIALES	ESTADO ACTUAL	\$ / M LINEAL	VALOR TOTAL
Cerca eléctrica	1334	Alambre Acerado	Bueno	\$ 1.500	\$ 2.001.000
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 2.001.000
<b>6.2 ESTANQUES O RESERVORIOS</b>					
DIÁMETROS (MTS)	PROFUNDIDAD (Mts)	MATERIALES Y MANO DE OBRA EMPLEADA	VALOR TOTAL		
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>6.3 USO ACTUAL DEL SUELO</b>					
CULTIVO	DESCRIPCIÓN ESTADO	ÁREA (HÁS)	\$ POR HECTÁREA	\$POR CULTIVO	
SEMIPERMANENTES				\$ 2.500.000	
PASTOS:	Mejorados, Bueno	5,00	\$ 500.000	\$ 0	
OTROS:					
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 2.500.000
<b>SUB TOTAL 2 (6.1), (6.2), (6.3)</b>					\$ 4.501.000

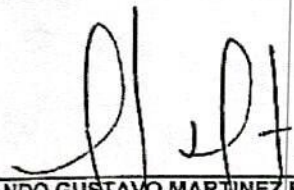
**Captura N.º 2**

Es de todo lo anterior, que se concluye el "**RESUMEN DE VALORES PARCIALES**", contenido antes de la firma del PERITO AVALUADOR, como adelante se muestra: (**Ver Captura N.º 3**)

344

**FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO**  
**INGENIERA CIVIL**  
Avalúos en general, Interventorias, acueductos, vías, vivienda

RESUMEN VALORES PARCIALES	
VALOR TERRENO (SUBTOTAL 1)	\$ 235.500.000
VALOR CERCAS, JAGUEYES Y CULTIVOS (SUBTOTAL 2)	\$ 4.501.000
VALOR CONSTRUCCIONES Y ANEXOS (SUBTOTAL 3)	\$ 0
VALOR MAQUINARIA Y EQUIPOS (SUBTOTAL 4)	\$ 0
SUB-TOTAL	\$ 240.001.000
REDONDEO	-1000
VALOR AVALUO	\$ 240.000.000
SON	
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE	

  
 FIRMA PERITO  
 NOMBRE: **FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO.**  
 Perito Avaluador R.N.A.No. CC-25-1885 AFILIADO A CORPOLONJAS

**Captura N.º 3**

En dicho resumen, se constata el valor total del PREDIO objeto de dicho AVALÚO, por cuantía de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/Cte. COP. Es decir, CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) M/Cte. COP, por hectárea, lo cual es congruente con el análisis del mercado realizado por el PERITO AVALUADOR, de manera directa en la ZONA, como evidentemente se muestra en la Captura N.º 1 ya referida.

En este punto, es importante destacar que el **AVALÚO REALIZADO POR EL IGAC**, dista de la realidad del mercado en la zona, por cuanto éste, refiere que el AVALÚO de dicho predio, corresponde a la suma de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$143.967.452) M/Cte. COP**, ello, en consideración del "dato de mercado número 10", contenido en la "página 14 de su INFORME DE AVALÚO COMERCIAL RURAL", así: **(Ver Captura N.º 4)**

El dato de mercado número 10, corresponde a una finca de menor extensión, topografía plana y ondulada, ubicada adjunta a la zona urbana de El Paujil y al predio de estudio. Valor por hectárea es de \$26.300.000.

Considerando lo anterior, el valor más aproximado por hectárea de terreno para la unidad fisiográfica (1) es de \$26.300.000; teniendo en cuenta el valor de terreno hectárea del dato de mercado número 10, por tener áreas de terreno de menor extensión, topografía similar, ubicarse cerca de la zona urbana de El Paujil y al predio objeto de avalúo.

## 11.2 INVESTIGACIÓN DIRECTA:

De acuerdo con el artículo 9 de la Resolución N° 620 de 2008 del IGAC, como se encontraron ofertas de alguna manera comparables y con base en

14

Carrera 30 N.º 48-51 Conmutador: 369 4100 - 369 4000 Fax: 369 4098 Información al Cliente 368 3443 - 369 4000 Ext. 4674 Bogotá, D.C. www.igac.gov.co

## Captura N.º 4

Si bien, se procura dar fundamento al AVALÚO REALIZADO por el IGAC, DEBE ADVERTIR el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, que el AVALÚO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, no fue realizado de manera DIRECTA, por cuanto, como así se advierte en su estudio en la página 12, ***“la INVESTIGACIÓN ECONÓMICA, se llevó a cabo de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET”***, y es por intermedio de éstos datos, que infiere ***“NO ES NECESARIO REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DIRECTA”***: (Ver Capturas N.º 5 y 6)

## 11. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

### 11.1 INVESTIGACIÓN INDIRECTA:

**Método de Comparación o de Mercado** Se utilizó este método para determinar el valor del terreno y se analizó la información de ofertas obtenidas en el sector y por internet de la siguiente manera:

En los antecedentes de avalúos del año 2012 se encontraron avatíos comerciales de predios ubicados en el municipio de El Paujil, se evidenció que para predios ubicados en la zona montañosa rural y a distancias mayores de más de siete kilómetros los valores de terreno oscilan entre \$800.000 y 2.500.000, dependen principalmente de la distancia a la zona urbana y de clase agrológica.

A continuación, se presenta la investigación indirecta para el año 2015:

## Captura N.º 5

la investigación indirecta se pueden adoptar valores, no es necesario  
realizar la investigación directa.

### 11.3 VALORES ADOPTADOS

Con base en la investigación indirecta, se obtiene el siguiente resultado:

ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
U.F.1	Ha	\$ 28.300.000

Captura N. °6

Es claro entonces, de conformidad con lo aportado, que a diferencia de lo actuado por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – **IGAC**, el AVALÚO realizado por el Ingeniero CIVIL **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, **sí cuenta con un estudio de mercado directo, lo cual, incide en la veracidad de los datos que en su informe incorpora** y que a efectos de restar mayores esfuerzos en controversia, EL **SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO**, pudo corroborar que el señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 6.681.291 de EL PAUJIL- CAQUETÁ, y quien fuera el propietario de la extensión de predio rural, objeto de compraventa con la Alcaldía Municipal del Paujil, como así obra en escritura pública N.º3078, debidamente registrada ante la Oficina de Instrumentos Públicos en Folio de Matrícula Inmobiliaria 420-109661, **manifestó en VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA** rendida el día 06 de febrero de 2024 a las 09:15 a.m., lo siguiente: (Ver Captura N.º 7)

**“Preguntado a:** A su juicio considera que la venta del predio se realizó por el valor comercial

**CONTESTÓ:** “No señor eso fue muy barato, no recuerdo, pero yo le pedí como a \$50.000.000 millones por hectárea”.



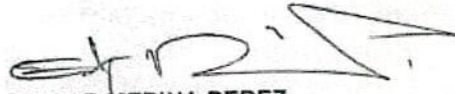
**PREGUNTADO:** A su juicio considera que la venta del predio se realizó por el valor comercial.  
**CONTESTÓ:** No señor, eso fue muy barato, no recuerdo, pero yo le pedí como a \$50.000.000 por hectárea.  
**PREGUNTADO:** Ha sido usted llamado a declarar por estos hechos ante la Fiscalía o Procuraduría.  
**CONTESTO:** No señor.  
**PREGUNTADO:** Sirvase manifestar si tiene algo más que agregar, corregir, suprimir, o enmendar a la presente diligencia.  
**CONTESTADO:** No señor.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina después de leída y aprobada por los que en ella intervinieron, siendo las 9:40 a.m.

EXPONENTE:

  
HERIBERTO ARCILA PUENTES  
C.C. 6.681.291 de El Paujil.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO:

  
EDGAR MEDINA PEREZ  
Abog. Sustanciador.

Captura N. °7

Manifestación, que por sí sola, da cuenta del valor que estimaba el anterior propietario, el señor **HERIBERTO ARCILA, por su terreno**. Que obra, además, en consonancia con los valores tomados por el **PERITO AVALUADOR de manera DIRECTA** y que incluso, corrobora que la Administración en cabeza de mi PROHIJADO, "**obró de conformidad con los valores contenidos en dicho avalúo y no aceptó o pactó un valor superior al allí establecido, esto es DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$240.000.000) DE PESOS M/Cte. COP**", resultando por demás excesiva, la forma como la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, constató el presunto detrimento, esto es, "mediante la diferencia establecida entre el avalúo INDIRECTO determinado por el Instituto Agustín Codazzi y el avalúo DIRECTO, realizado por el PERITO AVALUADOR, señor Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO. Lo anterior, por cuanto la forma en la cual fuera realizado el estudio de mercado por parte del IGAC, obedece a uno que no corresponde en efecto, con la realidad.

Téngase en cuenta, también, que en virtud del Artículo 2º del Decreto Reglamentario N.º 1420 de 1998, *"Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más probable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien"*. Si bien, el señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 6.681.291 de EL PAUJIL- CAQUETÁ, y quien fuera el propietario de la extensión de predio rural, objeto de compraventa con la Alcaldía Municipal del Paujil, consideró que el valor de cada hectárea correspondía a CINCUENTA MILLONES DE PESOS **(\$50.000.000) M/Cte. COP.**

Por su parte, el estudio de mercado adelantado por el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL y contenido en el avalúo presentado a la Administración Municipal, arrojó un valor en cuantía que daba cuenta de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/Cte. COP, menos por hectárea, respecto del precio considerado por su propietario.

Si se observa con detenimiento, la Administración municipal, en cuanto no pagó por el predio en mención, suma distinta a la contenida en el Avalúo realizado, le ahorró al municipio la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000) por cuanto no reconoció el valor que consideraba el propietario, de tal suerte, que dicho predio se comprara en DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/Cte. COP y no en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000) que así consideraba el señor ARCILA PUENTES, era el valor comercial de la extensión de terreno que era de su propiedad.

Tal ahorro, de conformidad con lo contenido en el Artículo 2 del Decreto Reglamentario 1420 de 1998, demuestra que tanto el comprador como el vendedor actuaron libremente y que en todo caso, EL COMPRADOR, - en virtud de la *INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS* y de la *METODOLOGÍA* empleada para la *COMPARACIÓN DE MERCADOS*", contenida en el avalúo comercial del predio rural y realizada por el PERITO AVALUADOR requerido, esto es, el Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO, a partir de la cual: *"Para efectos de establecer el valor del terreno se tuvieron en cuenta las características propias del mismo, las vías de acceso, estado de aprovechamiento del predio, la consulta de conocedores del sector, con conocedores del mercado inmobiliario. Se trabajó con 3 variables estadísticas una de medida de tendencia central y dos de dispersión que son: Media aritmética, desviación Standard y coeficiente de variación, el cual se acepta en la toma de decisiones por ser inferior a 7.5%", - se sujetó a los valores allí señalados, respecto de la sumatoria del valor intrínseco del terreno Agrícola Clase IV a razón de \$39.250.000 por Hectárea, más, aquellos con ocasión de las mejoras en virtud de los 1.334 metros de Cerca Eléctrica en Alambre Acerado, por valor de \$2.001.000 y \$2.500.000, por los pastos mejorados, presentes en cinco (5) de las seis (6) hectáreas del predio, cuya descripción obra en el apartado **"6. MEJORAS"- 6.1 CERCAS y 6.3 USO ACTUAL DEL SUELO, de dicho avalúo.***

Que así obrara la Administración en apego estricto a los valores contenidos en el Avalúo, y no de conformidad con los valores estimados por el VENDEDOR, *"da cuenta del pago del precio más probable por el cual éste se transaría, y que se obtuvo a partir de la INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS y de la METODOLOGÍA empleada para la*

**COMPARACIÓN DE MERCADOS"** realizada por el PERITO AVALUADOR", quien era persona natural de carácter privado, inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores con Matrícula R.N.A/C.C-25-1885 vigente a la fecha y que fuera requerido por la Administración Municipal, en cabeza de mi Prohijado.

Así, efectivamente se constata que se pagó por el bien inmueble con MATRÍCULA INMOBILIARIA N.º 420-109661, "el precio más probable por el cual éste se transaría" (VALOR COMERCIAL ART. 2º DECRETO REGLAMENTARIO 1420 DE 1998). También, al concretarse dicha compra, con apego al contenido normativo de carácter reglamentario así referido y habiendo con ello, dejado de pagar los SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000) M/Cte. COP, de más, que consideraba EL VENDEDOR, **(circunstancia que se traduce en un ahorro para el Municipio)**, se desvirtúa en consecuencia la lesión del patrimonio público enrostrada por el ENTE ACUSADOR y que se advierte en punto del **"Artículo 6º Daño patrimonial al Estado** (Modificado por el At. 126 del Decreto 403 de 2020), contenido en la Ley 610 de 2000", así: "Lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado... (..) Daño que podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.

A contrario sensu, se observa en lo actuado por mi PROHIJADO, "apego irrestricto al principio de LEGALIDAD, por cuanto, como se advertirá más adelante, no hay vicios o irregularidades en el procedimiento adelantado por éste, en cabeza de la Administración Municipal y como representante legal de la Entidad Territorial de orden municipal. Si bien, se ha querido mostrar por parte del DESPACHO, que era necesario acudir en primera instancia ante el IGAC y agotar términos que ya no se encontraban consagrados en el marco legal vigente para la fecha en que se suscribiera el Avalúo, lo cierto es que, el hecho de que se acudiera a persona Natural de Carácter Privado, registrada en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, configura o constituye, "un obrar de conformidad con el marco normativo que sí le era exigible a la administración en el año 2012".

En tal sentido, se solicita a la honorable Contraloría Departamental del Caquetá, que, en virtud de lo argumentado, por cuanto, demostrándose un obrar con apego a la Constitución y a la ley, que desvirtúa los elementos Constitutivos de Responsabilidad Fiscal como así se establece en el **Artículo 5º. Elementos de la responsabilidad fiscal de la Ley 610 de 2000**, ((Modificado por el At. 125 del Decreto 403 de 2020) **a saber:** "i) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, ii) un DAÑO patrimonial al Estado y iii) el nexo causal entre los dos elementos anteriores, por cuanto los mismos, no se materializan"; toda vez que como así se consagra en el Artículo 122 Constitucional, "Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que

347

le incumben", también, porque en sentencia C-341 de 2014, la honorable Corte Constitucional, ha sido expresa en señalar al Derecho al Debido Proceso:

*"como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia".*

Manifestó, además, que Hacen parte de las garantías del debido proceso:

*(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva el Derecho a obtener decisiones motivadas (...)*

*(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.*

Razón por la cual, corresponde al DESPACHO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL, en ejercicio de la titularidad de la Responsabilidad Fiscal, en virtud de lo aportado hasta ahora, más todo aquello que en adelante se argumentará con rigor jurídico suficiente y que desvirtúa las imputaciones formuladas por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá en su Auto de Imputación N.º 001, "se prevea por parte del Funcionario Competente en los términos de lo así estipulado en el **Artículo 54 de la Ley 610 de 2000**, PROFERIR FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL EN FAVOR DE MI DEFENDIDO".

Ahora bien, respecto del señor Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ, resulta imperativo referir lo atinente a su IDONEIDAD PROFESIONAL y la facultad que en efecto le acudía al momento de suscribir el Avalúo que se ha buscado cuestionar en el proceso de la referencia, como adelante se sigue.

#### **APARTADO SEGUNDO: DE LA IDONEIDAD DEL PERITO AVALUADOR:**

Respecto de la IDONEIDAD DEL PERITO AVALUADOR, advierte el SUSCRITO, **se cuestiona, señala y afirma por parte de la DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ** en el AUTO DE IMPUTACIÓN N.001 del 26 de febrero de 2024, lo siguiente: **(Ver Capturas N.º 8, 9 y 10)**

En la página 21 de 36:

Dicha compra presenta presunto detrimento patrimonial al Municipio, toda vez que por parte del de la Administración vigente para la época de los hechos, no se buscó un avalúo comercial del bien inmueble que favoreciera los intereses de Municipio y preservara los recursos institucionales y optó por solicitar un avalúo privado (con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de evaluador folio 35), y no acudió a un avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por tanto prefirió realizarlo ante un evaluador privado, el cual presenta sobrevaloración del precio del valor comercial, además de que presuntamente para la época del avalúo no se encontraba certificado por Fedelonjas, según certificación obrante a folio 35.

Captura N. °8

Se lee en dicho apartado:

(..) *"y optó por solicitar un avalúo privado (con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de evaluador folio 35). (...)*

En la página 25 de 36:

En este sentido, se tiene el presunto sobrecosto producto del pago del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, comprado por el Municipio de El Paujil, Caquetá, sin acudir ni solicitar avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en cambio optar por la compra del mencionado bien, producto de un avalúo comercial privado, con quien presuntamente para la época del avalúo no estaba certificado para realizarlo, como tampoco se evidencia la solicitud por parte del señor Alcalde realizar solicitud ante Fedelonjas, condujeron a determinarse detrimento patrimonial al Municipio de El Paujil, Caquetá.

Captura N. °9

Se lee en dicho apartado:

(...) *y en cambio optar por la compra el mencionado bien producto un avalúo comercial privado con quién presuntamente para la época del Avalúo no estaba certificado para realizarlo" (...)*

En la página 34 de 36:



Nit. 891.190.246-1

con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, de propiedad del señor Heriberto Arcila Puentes, evidenciándose presunto sobrecosto en la compra del mismo, toda que el Municipio de El Paujil no acudió al avalúo comercial realizado por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en su defecto lo hizo a través de avalúo particular que si bien está facultado por la Ley, presuntamente se contrató con una persona no certificada al momento de rendir el avalúo comercial ni tampoco se evidencia haber acudido a Fedelonjas para que determinara la persona idónea para que lo realizara; sin embargo consultado por la Contraloría Departamental del Caquetá el avalúo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi se evidencia un sobrecosto en cuantía de Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos cuarenta y Ocho Pesos (\$96.032.548) M/Cte.,

Captura N. °10

Se lee en dicho apartado:

*(...) presuntamente se contrató con una persona no certificada al momento de rendir el avalúo comercial" (...)*

**Dicha presunción** que obra de manera reiterativa en las argumentaciones de la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento, se resalta, se queda sólo en ello, en la presunción. Advierte el **SUSCRITO**, que no figura en el expediente, prueba allegada por el ente acusador, que de cuenta de la validez de tal afirmación. Que se diga de manera reiterativa como ya fue expuesto, que "PRESUNTAMENTE SE CONTRATÓ A UNA PERSONA NO CERTIFICADA AL MOMENTO DE RENDIR EL AVALÚO COMERCIAL", es una formulación que pretende hacer caer en error al JUEZ y que da cuenta de un actuar temerario por cuanto carece de sustento, incluso legal, como se demostrará en apartado posterior, respecto de la legalidad de lo actuado.

Bastará aquí, con manifestar que, como se verá, el **PERITO AVALUADOR**, estaba acreditado **COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES y contaba con Registro en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A., con Matrícula R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012**. De ello, consecuentemente, lo que sigue.

En punto de las manifestaciones y señalamientos que hace el **DESPACHO**, que considera de manera respetuosa el **SUSCRITO** "No cuentan con el debido sustento", debe observar el **FALLADOR**, que al revisarse los **ELEMENTOS DE PRUEBA** contenidos en el expediente del proceso de la referencia **PRF-1148**, se advierte que el señor **INGENIERO CIVIL FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.541.581 de Popayán, para la época en la que elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi

PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, esto es, el día 10 de mayo de 2012, "sí contaba con APROBACIÓN COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA". Aprobación certificada por el **CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA"**, de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004.

Nótese que el Ingeniero Civil **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, para la fecha en que elaboró y suscribió el **INFORME DE AVALÚO DEL PREDIO** al que se ha hecho mención y que fuera adquirido posteriormente por parte del Municipio, **contaba con Registro R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012.**

**De lo anterior se colige, NO SOLO LA IDONEIDAD** del Ingeniero Civil **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, también, que el mismo se encontraba facultado y habilitado para "avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general, a nivel Nacional" (Véase la **Captura N.º 11**).

Lo así referido, consta en la certificación emitida por la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", que el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, reitera, se encuentra contenida en el expediente y controvierte de manera fidedigna e incontestable, las afirmaciones y señalamientos que hace la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ. **(VER CAPTURAS N.º 11 y 12)**

Certifica además que es **Miembro Activo** de esta Entidad Gremial desde el año **2004** y le fue otorgado el **Registro-Matrícula No. R.N.A/C.C-25-1885**, que respalda ésta determinación **con vigencia hasta el día 31 de Julio de 2012**, lo cual le faculta para **avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional.**

Se expide en Bogotá, D.C., a los **09** días del mes de **Agosto** de **2010**

  
**PATRICIA GONZALEZ GUIO**  
Gerente Administrativo  
Junta Directiva



**Captura N.º 11**



## CORPOLONJAS DE COLOMBIA

El Presidente de la Junta Directiva, con base en las matrículas de la  
**CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS**  
**"CORPOLONJAS DE COLOMBIA"**

### **CERTIFICA QUE:**

**FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO**  
C. C. 10.541.581. Popayán

Presentó solicitud de inscripción en esta Lonja, la cual fue estudiada y aprobada por el Consejo Directivo de Avaluadores de CORPOLONJAS DE COLOMBIA Bogotá, D.C., comprobándose su idoneidad como Perito Avaluador Profesional, ejerciendo en las siguientes áreas:

**INMUEBLES URBANOS: AVALUO COMERCIAL Y DE RENTA**

**INMUEBLES RURALES: AVALUO COMERCIAL Y DE RENTA**

**AVALUOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

**AVALUOS MASIVOS - ESPECIALES**

**AVALUOS ESPECIALES: RONDAS, HUMEDALES, LOTES CUÑA,  
SEMOVIENTES Y VALOR DE PLOTTAGE**

Certifica además que es Miembro Activo de esta Entidad Gremial desde el año **2004** y le fue otorgado el Registro-Matrícula No. **R.N.A/C.C-25-1885**, que respalda esta determinación con vigencia hasta el día **31 de Julio de 2012**, lo cual le faculta para avalar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional.

Se expide en Bogotá, D.C., a los **09** días del mes de **Agosto** de **2010**

  
**PATRICIA GONZALEZ GUIO**  
Gerente Administrativo  
Junta Directiva


SEDE NACIONAL: Carrera 11 No. 95 - 75 Oficina 302B - P.O. Box 480 59 59 - Fax: 256 52 58  
Celular: 310 571 12 00 - 300 785 50 44 - 315 315 4305 - E-mail: [radinmocolombia@hotmail.com](mailto:radinmocolombia@hotmail.com)  
Bogotá D.C. - Colombia

Captura N.º 12

Si bien, ha querido la DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, genera confusión a partir de una impresión distinta y apartada de la verdad y la realidad, lo cierto es que dicha CERTIFICACIÓN SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE y que el **REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, R.N.A.** es una prestigiosa entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en 1985 por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz "**FEDELONJAS**" y la Sociedad Colombiana de Avaluadores "**SCDA**", que propende por la profesionalización de la actividad valuatoria en Colombia. Entidad que se ha dedicado desde su fundación a la certificación de avaluadores en el país, buscando brindar seguridad y confianza a los usuarios de avalúos sobre la idoneidad y competencia de los avaluadores inscritos. Registro Nacional de Avaluadores RNA | LinkedIn.

El **REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, R.N.A** ha representado a Colombia ante la Asamblea General de la International Valuation Standards Committee – IVSC y a la fecha, se encuentra acreditada en NORMA INTERNACIONAL ISO-IEC17024:2012 por la ONAC – ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA, institución que pertenece al Subsistema Nacional de la Calidad – SICAL-, (Registro Nacional de Avaluadores acreditado por la ONAC - La Lonja) – (<https://www.youtube.com/@r.n.a.avaluadores/>) y, como se verá en apartado posterior, para la fecha de los hechos, - no en el año 2013 que es cuando se compró el Bien Inmueble, sino, en el año 2012, el 10 de mayo de esa anualidad, precisamente la fecha exacta en la que fue elaborado y suscrito el Avalúo que sirvió de base para la posterior aprobación emitida por el Concejo Municipal (Acuerdo N.º11) para adquirir el bien inmueble con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285**, ubicado en la vereda el Borugo del mismo municipio y del cual se desprendería la **MATRÍCULA INMOBILIARIA N.º 420-109661 como así obra en la Oficina de Instrumentos Públicos** - es en el Registro Nacional de Avaluadores en donde debía encontrarse registrada la persona natural o jurídica de carácter privado, encargada de realizar dicho Avalúo.

Respecto de la Acreditación por parte de la ONAC al REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, en la cual consta el Alcance de la Acreditación de la misma y que muestra, además, de su relevancia, se permite aportar el SUSCRITO, las **Capturas N.º 13, 14 y 15**, como adelante se sigue, así: ([14-OCP-008 \(onac.org.co\)](https://onac.org.co))



**ONAC ACREDITA A**

**REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R N A**  
 NIT. 830.038.917-4  
 Cl 72 A 6 44 Of 801 Edificio Appa, Bogotá D.C.,  
 Colombia

La acreditación de este Organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional  
**ISO/IEC 17024:2012**  
 Requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas.  
 Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:  
**14-OCP-008**

Página 1 de 3      FR 353-05 V7 Aprobado 2023-07-18

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral Suscritos por ONAC con:




Fecha de publicación del Otorgamiento:	2015-06-30
Fecha de Renovación:	2023-06-30
Fecha de publicación última actualización:	2023-08-15
Fecha de vencimiento:	2028-06-29

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscarpor-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscarpor-organismo) o escaneando el código QR



  
 Director Ejecutivo

**Captura N.º 13**

350



# ANEXO DEL CERTIFICADO

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R N A  
14-0CP-008  
ACREDITACION ISO/IEC 17024:2012  
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Certificación de Personas	Documento Normativo	Esquema
AVALUADOR DE INMUEBLES URBANOS	NTS C 002: 2018-07-10 Norma técnica sectorial de competencia para el valuador que realiza avalúos de bienes inmuebles urbanos	EQ/DC/01 Esquema de Certificación de Personas. Categoría o Especialidad de Avalúos de Inmuebles Urbanos v13. 2021/08/31
AVALUADOR DE INMUEBLES RURALES	NTS C 003: 2018-07-10 Norma técnica de competencia para el valuador que realiza avalúos de bienes inmuebles rurales	EQ/DC/02 Esquema de Certificación de Personas. Categoría o Especialidad de Avalúos de Inmuebles Rurales v13. 2021/08/31
AVALUADOR DE MAQUINARIA FIJA, EQUIPOS Y MAQUINARIA MOVIL	NTS C 002: 2018-07-10 Norma técnica sectorial de competencia para el valuador que realiza avalúos de Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil	EQ/DC/03 Esquema de Certificación de Personas. Categoría o Especialidad de Avalúos de Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil v13. 2021/08/31
AVALUADOR DE INMUEBLES ESPECIALES	NSCL 210302012 SENA Versión 2 - Preparar avalúo de acuerdo con normativa y encargo valuatorio. - Fecha Aprobación 2020-04-23 NSCL 210302015 Versión 1 - Caracterizar bienes inmuebles de acuerdo con normativa valuatoria. - Fecha Aprobación 2020-04-23	EQ/DC/05 Esquema de Certificación de Personas. Categoría o Especialidad de Avalúos de Inmuebles Especiales. v 6. 2021/02/25
AVALUADOR DE INTANGIBLES ESPECIALES EN INMUEBLES URBANOS	NTS C 001: 2018-08-13 Norma técnica sectorial de competencia para el valuador que realiza avalúos de intangibles especiales.	EQ/DC/06 Esquema de Certificación de Personas. Categoría o Especialidad de Avalúos de Intangibles Especiales Versión 5 Fecha de Aprobación: 2022-05-06
AVALUADOR DE INTANGIBLES ESPECIALES EN INMUEBLES RURALES	NTS C 001: 2018-08-13 Norma técnica sectorial de competencia para el valuador que realiza avalúos de intangibles especiales.	EQ/DC/06 Esquema de Certificación de Personas. Categoría o Especialidad de Avalúos de Intangibles Especiales Versión 5 Fecha de Aprobación: 2022-05-06

Página 2 de 3

FR 353-05 V7 Aprobado 2023-07-18

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC



Captura N.º 14



# ANEXO DEL CERTIFICADO

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R N A  
14-0CP-008  
ACREDITACION ISO/IEC 17024:2012  
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Certificación de Personas	Documento Normativo	Esquema
AVALUADOR DE INTANGIBLES ESPECIALES EN MAQUINARIA FIJA, EQUIPOS Y MAQUINARIA MOVIL	NTS C 001: 2018-08-13 Norma técnica sectorial de competencia para el valuador que realiza avalúos de intangibles especiales.	EQ/DC/06 Esquema de Certificación de Personas. Categoría o Especialidad de Avalúos de Intangibles Especiales Versión 5 Fecha de Aprobación: 2022-05-06
AVALUADOR DE INTANGIBLES ESPECIALES EN INMUEBLES ESPECIALES	NTS C 001: 2018-08-13 Norma técnica sectorial de competencia para el valuador que realiza avalúos de intangibles especiales.	EQ/DC/06 Esquema de Certificación de Personas. Categoría o Especialidad de Avalúos de Intangibles Especiales Versión 5 Fecha de Aprobación: 2022-05-06

Página 3 de 3

FR 353-05 V7 Aprobado 2023-07-18

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC



Captura N.º 15

Debe observar entonces el FALLADOR, se solicita respetuosamente, que todos los argumentos aportados e imágenes (capturas) incorporadas, en conjunto, como así se predica en el Artículo **Artículo 26 de la Ley 610 de 2000**, deben ser valorados y tenidos en cuenta, por cuanto obra en su contenido, prueba fehaciente que, se reitera:

"desvirtúa lo dicho por la honorable **DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL** de la **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, en aras de restar mérito y credibilidad, presuntamente, tanto a la acreditación como a la facultad que en efecto sí le acudía al PERITO AVALUADOR, **Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, mismo a quien acudiera la Administración del Municipio de El Paujil y quien suscribió el día 10 de mayo de 2012, el AVALÚO que se ha cuestionado desde la Contraloría Departamental y del cual, al parecer, *también se ha querido restar el mérito que le corresponde, en consideración de los argumentos en punto del Principio de Legalidad, contenidos en el apartado que me permio exponer más adelante.*

Sea ésta la oportunidad, para comentar, antes de acudir con el siguiente apartado, " *sin ser necesaria la exigencia esgrimida por el DESPACHO respecto de la exclusividad y necesidad de acudir previamente con solicitud ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi*", que pese a que no lo refiere ampliamente **la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL** de la **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, en su **Auto de Imputación N.º001, reposa en el expediente**, oficio número 7832014EE3493-01 de fecha 17 de octubre 2014, suscrito por el director territorial del **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI**, a través del cual informa que a la fecha no existen avalúos en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria **Nº440-88285**, esto es, el inmueble objeto de controversia y también, documento suscrito por el **DIRECTOR TERRITORIAL ENCARGADO**, que da cuenta de la incapacidad de la Dirección Territorial Caquetá del **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI**, para realizar avalúos comerciales, pues no cuentan con personal Idóneo, ni los recursos para realizarlos.

Circunstancia que obra en el oficio 7832015EE1617-01-F:1 – A:0 de fecha 29 de mayo de 2015 y radicado ante la Contraloría Departamental el día 02 de junio de 2015, es decir, dos meses después de ser requerido de manera insistente por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, quien les ofició con antelación en el mes de marzo de 2015, para que se hiciera el avalúo que ésta requería. En dicho documento consta lo mencionado y también, que tuvo que ser direccionado el requerimiento por parte de la Dirección Territorial del IGAC, a la SEDE CENTRAL IGAC "para que ella estudiara la posibilidad de enviar personal que apoyara tales requerimientos". **(Ver Captura N.º 16)**



IGAC  
INSTITUTO GEOGRÁFICO  
AGUSTÍN CODAZZI  
Territorial Caquetá



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
POR EQUIDAD EDUCATIVA

6006/

Florencia,

Señor:  
CESAR AUGUSTO OVIEDO  
Carrera 13 No. 15-00 Piso 3  
Tel: 3206859894  
Florencia - Caquetá

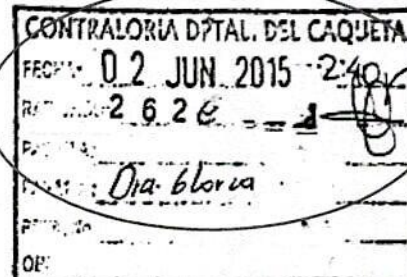
Asunto: Respuesta a su Solicitud

Respetado Señor Oviedo:

Atendiendo sus peticiones con radicados No.7832015ER706, No.7832015ER707 del 24 de Marzo de 2015 y No.7832015ER602, No.7832015ER603 del 13 Marzo, me permito informarle que esta Dirección Territorial no cuenta con el personal idóneo ni los recursos para realizar estos avalúos comerciales, por lo tanto se hizo traslado de sus peticiones a la Sede Central IGAC, para que ella estudie la posibilidad de enviar personal que apoye sus requerimientos

FELIPE ANDRÉS DUSSAN CÁRDENAS  
Director Territorial (E)

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI 29-05-2015 13:08  
Al Contestar Cite Nr.:7832015EE1617-01 - F:1 - A:0  
ORIGEN: Sede de DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA/DUSSAN CARDENAS  
DESTINO: PERSONA NATURAL/CESAR AUGUSTO OVIEDO  
ASUNTO: RESPUESTA A RADICADOS 706, 707 DEL 24 DE MARZO  
OBS: LAURA C



Captura N.º 16

Hasta aquí, se han aportado elementos que dan cuenta de lo obrado en punto del Avalúo Comercial cuyo estudio de mercado se hizo de manera directa en el lugar en donde se encuentra ubicado el predio, avalúo elaborado y suscrito el día 10 de mayo de 2012 por Perito Avaluador Profesional. De los dineros que, en virtud de la sujeción a lo contenido en dicho avalúo, efectivamente, le ahorró la Administración al Municipio de El Paujil y con lo cual, se contradice la gestión antieconómica predicada por el Ente Acusador, quien se basó en Avalúo **adelantado por el IGAC** y cuya **INVESTIGACIÓN ECONÓMICA para determinar el MERCADO, se llevó a cabo de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET**. También, de la Idoneidad del PERITO AVALUADOR PROFESIONAL requerido por la Administración Municipal en cabeza de mi Prohijado, esto es, el Ingeniero Civil **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, persona natural de carácter privado **certificado por CORPOLONJAS DE COLOMBIA, debidamente registrado en el Registro Nacional de Avaluadores con MATRÍCULA R.N.A/C.C-25-1885 VIGENTE para la fecha en que éste, realizó tal Avalúo y quien se encontraba habilitado COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES**

**RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA. Aprobación certificada por el CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004, misma entidad que corroboró su registro en el Registro Nacional de Avaluadores. También, se incorporó una visión más amplia respecto del Registro Nacional de Avaluadores,** prestigiosa entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en 1985 por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz "**FEDELONJAS**" y la Sociedad Colombiana de Avaluadores "**SCDA**", que se ha dedicado desde su fundación a la certificación de avaluadores en el país, buscando brindar seguridad y confianza a los usuarios de avalúos sobre la idoneidad y competencia de los avaluadores inscritos.

Todos los anteriores, entre otros aspectos, dan cuenta que no había lugar a generar controversia respecto de lo obrado en el Avalúo, así como no existe sustento para las afirmaciones que lamenta el SUSCRITO, fueran referidas por la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá. para desvirtuar tanto la acreditación como la Idoneidad el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL, requerido por la Administración Municipal, pasando por alto también, el mérito que le corresponde al Registro Nacional de Avaluadores, entidad en la cual se encontraba registrado.

**No debe perderse de vista tampoco, la manifestación a modo de lamentación que hace el Señor ARCILA PUENTES, a quien, cuando se le preguntó si a su juicio consideraba que la venta del predio se realizó por el valor comercial, respondió: ""No señor eso fue muy barato..."**

Abordados los anteriores Apartados, procederá el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, a presentar sus argumentos respecto de la legalidad de lo actuado por el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, mi DEFENDIDO.**

### **APARTADO TERCERO: "DE LA LEGALIDAD DE LO ACTUADO POR EL SEÑOR RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT"**

Observa el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, que la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en su Auto de Imputación N. °001 de fecha 26 de febrero de 2024, en punto de los Fundamentos de Derecho que soportan el inicio de la Investigación, señala los siguientes:

**Artículo 209, 267 y 268 Numeral 5 de la Constitución Política**  
**Ley 610 de 2000**  
**Ley 1474 2011**  
**Ley 80 de 1993**

También, advierte que, con sustento en el contenido del Artículo 15° de la ley 9 de 1989, reglamentado parcialmente por el Decreto 855 de 1994 y modificado por el artículo 2°

352

del Decreto 4117 de 2006, como se verá en lo sucesivo, en sus consideraciones, la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, encuentra los motivos de reproche en contra de mi Prohijado, por las actuaciones que éste realizó, en punto del Avalúo comercial que se elaboró el 10 de mayo del año 2012 por persona natural de Carácter Privado que contaba con Registro VIGENTE en el Registro Nacional de Avaluadores, y a quien acudió para esa fecha, la Administración Municipal en cabeza de mi Representado. Avalúo que determinó el valor comercial y que en efecto sirvió de base para la adquisición posterior, ya en el año 2013, - (contando eso sí, con la aprobación debida por parte del Concejo Municipal y la supervisión de la secretaría de Planeación Municipal para dicha adquisición) - de predio con extensión de seis hectáreas e identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661.

Es a partir de dicho contenido, es decir, **con apego al contenido normativo de carácter reglamentario respecto del artículo 15 de la ley 9 de 1989 así referido, que termina IMPUTANDO RESPONSABILIDAD FISCAL A TITULO DE CULPA GRAVE**, en cuantía por NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE, **en contra del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, mi DEFENDIDO.**

Nótese que, **"En referencia a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales, y con sustento en el artículo 15° de la ley 9 de 1989, reglamentada parcialmente por el Decreto 855 de 1994 y modificado por el artículo 2° del Decreto 4117 de 2006, cuyo tenor es el siguiente:**

**Ley 9 de 1989:**

**"Artículo 15:** El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones de conformidad con el artículo 18 de la presente ley...

**La ley 9 de 1989 fue parcialmente modificada por el Decreto 855 de 1994, en ella, respecto del articulado anterior, se expresa:**

**Artículo 15.** Para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo, que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad.

Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con tal fin, una persona natural o jurídica experta en la materia.

**Luego, dicho articulado así contenido en el Decreto 855 de 1994, fue modificado por el Artículo 2° del DECRETO 4117 DE 2006, en el cual se expresó:**

**Artículo 2°.** El artículo 15 del Decreto 855 de 1994 quedará así:

**"Artículo 15.** Avalúo de bienes inmuebles. Para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.

**Parágrafo.** Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles".

la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en su Auto de Imputación N. °001 de fecha 26 de febrero de 2024, manifestó:

"Al respecto evidencia este despacho que no obra solicitud a la Lonja de propiedad raíz donde se encuentra ubicado el bien inmueble y además el certificado presentado por el Evaluador del bien inmueble el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo que lo acredita como tal (folio 35) tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2012, siendo expedido el informe del avalúo en la fecha 10 de mayo de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior es preciso advertir que tal como lo adujo el trámite de la conclusión de la denuncia D-003-16 **evidencia este Despacho que no se requirió por parte del municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto geográfico Agustín Codazzi** sino al particular facultado por la norma para la expedición del Avalúo comercial del bien inmueble en comento, presentándose un avalúo muy por encima del avalúo determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien es la entidad estatal en orden de importancia autorizada por la ley para realizar AVALÚOS COMERCIALES en el país, generándose un presunto daño patrimonial al municipio de El Paujil, en la cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/CTE.

En ese sentido es preciso indicar que el presente proceso tiene su origen en la conclusión trámite de la denuncia D-003-16 de fecha 17 de marzo 2016, relacionado con presuntas irregularidades ocasionadas por la compra el bien inmueble Lote No. 1, ubicado en el en el municipio del Paujil, Caquetá; el cual consta de 6 hectáreas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 del Círculo Notarial de Florencia, Caquetá; el cual fue adquirido por el representante legal del municipio de El Paujil, al realizarle la compra al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.681 291.

Lo anterior, como así consta, se encuentra contenido en el Auto de Imputación N.º 001 del 26 de febrero de 2024, en las páginas 13, 14 y 15 del mismo, como en efecto se muestra en las imágenes que se siguen a continuación: **(VER CAPTURAS 17, 18, 19, 20 y 21)**

353

La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal determina que el presunto detrimento patrimonial se establece en la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, como lo expresó la Conclusión de la Denuncia D-003-16, toda vez que es el resultado cuantificado de la confrontación entre los avalúos realizados por el particular Fernando Gustavo Martínez a quien acudió el Municipio de El Paujil y el solicitado por la Contraloría Departamental del Caquetá ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En cuanto a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales encontramos:

La Ley 9 de 1989, "Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones", en su artículo 15 establece:

Página 13 de 36

CAPTURA N.º 17

**DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**

Nit 891.190.246-1

**"Artículo 15º.- El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones, de conformidad con el artículo 18 de la presente Ley.**

*La forma de pago, en dinero efectivo, títulos-valores o bienes muebles e inmuebles, será convenida entre el propietario y el representante legal de la entidad adquirente. Las condiciones mínimas del pago del precio serán las previstas en el artículo 29.*

*Si quedare un saldo del precio pendiente de pago al momento de otorgar la escritura pública de compraventa, la entidad adquirente deberá entregar simultáneamente una garantía bancaria incondicional de pago del mismo. La existencia del saldo pendiente no dará acción de resolución de contrato, sin perjuicio del cobro del saldo por la vía ejecutiva.*

*Facúltase a los establecimientos bancarios para emitir las garantías de que trata el inciso anterior." (Subrayado fuera de texto).*

CAPTURA N.º 18

**Artículo 2º.** El artículo 15 del Decreto 855 de 1994 quedará así:

**"Artículo 15. Avalúo de bienes inmuebles.** Para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.

**Parágrafo.** Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles".  
(Subrayado fuera de texto).

Al respecto evidencia este Despacho, que no obra solicitud a la Lonja de propiedad raíz donde se encuentra ubicado el bien inmueble y además el certificado presentado por el Evaluador del bien inmueble el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo, que lo acredita como tal (folio 35), tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2012, siendo expedido el informe del avalúo en la fecha 10 de mayo de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso advertir que tal como lo adujo el trámite de la Conclusión de la Denuncia D-003-16, evidencia este Despacho que no se requirió por parte del Municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sino al particular facultado por la norma para la expedición del

CAPTURA N.º19

se encuentra ubicado el bien inmueble y además el certificado presentado por el Evaluador del bien inmueble el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo, que lo acredita como tal (folio 35), tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2012, siendo expedido el informe del avalúo en la fecha 10 de mayo de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso advertir que tal como lo adujo el trámite de la Conclusión de la Denuncia D-003-16, evidencia este Despacho que no se requirió por parte del Municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sino al particular facultado por la norma para la expedición del avalúo comercial del bien inmueble en comento, presentándose un avalúo muy por encima del avalúo determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien es la entidad estatal en

CAPTURA N.º20

# CONTRALORIA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

orden de importancia autorizada por la ley para realizar AVALÚOS COMERCIALES en el país, generándose un presunto daño patrimonial al Municipio De El Paujil en la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

En este sentido, es preciso indicar que el presente proceso tiene su origen en la Conclusión trámite de la denuncia D-003-16 de fecha 17 de marzo de 2016, relacionado con presuntas irregularidades ocasionadas por la compra del bien inmueble Lote No. 1, ubicado en el Municipio de El Paujil, Caquetá; el cual consta de seis (69 hectáreas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 del Círculo Notarial de Florencia, Caquetá; el cual fue adquirido por el representante legal del Municipio de El Paujil, al realizarle la compra al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291.

CAPTURA N. °21

En consecuencia, es con sustento en dicho contenido normativo como así se indicó, de donde se desprenden las siguientes consideraciones:

- I. Que el precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones... (Ley 9 de 1989 Artículo 15)
- II. Que, para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo, que servirá como base de la negociación y **que dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad.**

*Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con tal fin, una persona natural o jurídica experta en la materia. (Decreto 855 de 1994, Artículo 15)*

- III. Que, para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, **dicha persona debe encontrarse registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.**

*A lo que debe sumarse lo contenido en su párrafo y es que, si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles".*

Nótese que es a partir de lo precitado, que se extrae que la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, hace la respectiva valoración para argumentar en su Auto de imputación, lo siguiente:

- a) Que **no obra solicitud a la Lonja de propiedad raíz donde se encuentra ubicado el bien inmueble.** (Auto de Imputación N.º 001 página 14)
- b) Que tal como lo adujo el trámite de la conclusión de la denuncia D-003-16 evidencia este Despacho **que no se requirió por parte del municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto geográfico Agustín Codazzi sino al particular facultado por la norma para la expedición del Avalúo comercial del bien inmueble en comento.** (Auto de Imputación N.º 001 página 14)
- c) Que el presente proceso tiene su origen en la conclusión trámite de la denuncia D-003-16 de fecha 17 de marzo 2016. (Auto de Imputación N.º 001 página 15)
- d) Que no acudió a un avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, **por tanto, prefirió realizarlo ante un evaluador privado (...)** (Auto de Imputación N.º 001, Página 21 de 36)
- e) Que, se tiene el presunto sobre costo producto del pago el bien inmueble indicado con matrícula inmobiliaria número 420-109661 comprado por el municipio del Paujil Caquetá, **sin acudir ni solicitar avalúo comercial ante el Instituto geográfico Agustín Codazzi, y en cambio optar por la compra del mencionado bien, producto de un avalúo comercial privado (...)** (Auto de Imputación N.º 001, Página 25 de 36)
- f) Que, **tampoco se evidencia la solicitud por parte del señor Alcalde realizar solicitud ante FEDELONJAS, lo cual, en conjunto con lo anterior, condujo a determinarse detrimento patrimonial al municipio de El Paujil, Caquetá".** (Auto de Imputación N.º 001, Página 25 de 36)
- g) (...) **Que no se evidencia el trámite realizado por parte del municipio ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el establecimiento de dicho avalúo** (Auto de Imputación N.º 001, Página 27 de 36)
- h) (...) **fue una conducta que omitió el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, al no acudir en primera instancia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el fin de establecer el valor comercial del predio que finalmente compró el municipio de El Paujil, conforme a la normatividad y procedimiento, pudiendo haber evitado que se generara el detrimento patrimonial en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/CTE.** (Auto de Imputación N.º 001, Página 30 de 36)

**En línea con tales ponderaciones,** es que la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en alusión a mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y en relación con sus funciones en cabeza de la Administración Municipal de El Paujil, señaló:

- 355
- a) Era el encargado de dar cumplimiento los fines del Estado para reservar los recursos del municipio y adquirir bienes y servicios a precios del mercado evitando presuntos sobrecostos en la compra de los mismos" (Auto de Imputación N.º001, Página 19 de 36)
  - b) (...) Que dentro de sus funciones se precisa la establecida en el numeral 9 del Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia: **"Ordenar los Gastos municipales de acuerdo con el Plan de inversión y el presupuesto"**. (Auto de Imputación N.º 001, Página 19 de 36)
  - c) (...) **Que incumplió con los deberes señalados por la Constitución y la ley Respecto a seguir sus actuaciones a la normativa vigente** buscando un avalúo comercial que favoreciera las arcas de la entidad territorial que representaba" (...) (Auto de Imputación N.º 001, Página 20 de 36)
  - d) (...) Podemos concluir en primer lugar que la gestión fiscal hace relación con las tareas funcionales concernientes a la administración directa del patrimonio público, **administración que debe someterse al principio de legalidad así como a los postulados de la Función Pública en general y la función administrativa**" (...) (Auto de Imputación N.º001, Página 21 de 36)
  - e) Citó apartado de la Sentencia C-549 DE 1993, en donde se preceptúa que: **"... La vigilancia de la acción fiscal se endereza a establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas financieras y materiales en las que se traduce la gestión fiscal, se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes ... y, finalmente los objetivos planes programas y proyectos que constituyen en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración"** (Auto de Imputación N.º001, Página 23 de 36)
  - f) Que se evidencia que en su calidad de gestor fiscal indica **que no asumió con la debida responsabilidad la disposición y control de los bienes del municipio sobre los cuales se canceló el pago que se efectuó por parte del municipio del paujil Caquetá al señor HERIBERTO ARCILA PUENTES**" (...) (Auto de Imputación N.º 001, Página 27 de 36)
  - g) Que no se evidencia el trámite realizado por parte del municipio ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el establecimiento de dicho avalúo y que a la postre una vez realizado por parte de este Instituto determina un avalúo sensiblemente muy elevado próximamente en un 40%, por tanto el señor Rodrigo Andrés Castro Betancourt en su condición de Alcalde del municipio de El Paujil, **debió conservar el debido cuidado y manejo dado los recursos de la Entidad territorial al momento de adquirir el lote con destino a la construcción de vivienda,** y es quien particularmente **debía adoptar las medidas necesarias a efectos de**

**asegurar la compra a precios del mercado**, buscando el mejor precio que protegiera las finanzas de la entidad" (...) (Auto de Imputación N. °001, Página 27 de 36)

- h) (...) **Que la conducta desplegada por el implicado generó una gestión inadecuada** que conllevó a incurrir en las conductas determinadas en los artículos 3 y 6 de la ley 610 de 2000, que se refieren a la Gestión Fiscal y el Daño Patrimonial al Estado" (...) (Auto de Imputación N. °001, Página 28 de 36)
- i) **Que se quebrantó lo estableció en el artículo 23 "De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales" de la ley 80 de 1993**, en punto de los principios de transparencia economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa" (Auto de Imputación N. °001, Página 29 de 36)
- j) (...) **Que "En consecuencia no presentó el debido cuidado y la falta de diligencia en la compra del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 420-1109661**, en desarrollo de la compraventa, **generándose un presunto detrimento en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/CTE., y por cuanto se incurrió en una erogación antieconómica, ineficaz, inoportuna e injustificada, lo que conlleva la certeza del daño"** (...) (Auto de Imputación N. °001, Página 30 de 36)
- k) (...) **fue una conducta que omitió el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, al no acudir en primera instancia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el fin de establecer el valor comercial del predio que finalmente compró el municipio de El Paujil, conforme a la normatividad y procedimiento, pudiendo haber evitado que se generara el detrimento patrimonial en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/CTE.** (Auto de Imputación N. °001, Página 30 de 36)

**También, haciendo énfasis en la compra realizada, la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, entre otros:**

- a) Indicó que dicha compra presenta presunto detrimento patrimonial al municipio toda vez que por parte de la administración vigente para la época de los hechos no se buscó un avalúo comercial del inmueble que favoreciera los intereses del municipio y preservara los recursos institucionales y **optó por solicitar un evaluador privado con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de evaluador (folio 35) y no acudió a un avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi**, por tanto prefirió realizarlo ante un evaluador privado, el cual presenta sobrevaloración del precio del valor comercial, **además de que presuntamente para la época el avalúo no se encontraba certificado por**

**FEDELONJAS** según certificación obrante a folio 35. (Auto de Imputación N. °001, Página 21 de 36)

- b) Plasmó que se tiene el presunto sobre costo producto del pago el bien inmueble indicado con matrícula inmobiliaria número 420-109661 comprado por el municipio del Paujil Caquetá, ***sin acudir ni solicitar avalúo comercial ante el Instituto geográfico Agustín Codazzi, y en cambio optar por la compra del mencionado bien, producto de un avalúo comercial privado, con quien presuntamente para la época del avalúo no estaba certificado para realizarlo, como tampoco se evidencia la solicitud por parte del señor Alcalde realizar solicitud ante FEDELONJAS, condujeron a determinarse detrimento patrimonial al municipio de El Paujil, Caquetá***" (Auto de Imputación N.°001, Página 25 de 36)

Y, es que, ***a partir de todo lo anterior, cuya sustento jurídico de base fue el ya referido en consideración a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales y en punto del artículo 15 de la ley 9 de 1984 y sus modificaciones hasta las contenidas en el Artículo 2° del Decreto 4117 de 2006, es que la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, teniéndolo como base, motiva su Auto de imputación N°001, en el cual, desde la página 22 de 36 páginas en las que se encuentra contenido, se avizora la procedencia de la IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD en contra de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía número 17.681.291 de Florencia – Caquetá, a TÍTULO DE CULPA GRAVE como así lo expresó el DESPACHO en la página 27 del mismo y que finalmente se RESUELVE en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/Cte. COP.***

El problema, ***es que incide lamentablemente la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en un yerro, equivocación por supuesto que se advierte, por cuanto para la fecha de los hechos*** que motivaron la Denuncia D-003-16, allegada por persona anónima a la Oficina de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL el 21 de agosto de 2014 y a partir de cuyo trámite se arribó a la conclusión de las "presuntas irregularidades ocasionadas por la compra el bien inmueble Lote No. 1, ubicado en el en el municipio del Paujil, Caquetá; el cual consta de 6 hectáreas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 del Círculo Notarial de Florencia, Caquetá; el cual fue adquirido por el representante legal del municipio de El Paujil, al realizarle la compra al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.681 291", conclusión a la que hace referencia el DESPACHO en su Auto de Imputación N.° 001 de fecha 26 de febrero de 2024, **la normatividad vigente que amparaba y contenía los parámetros legales a los cuales debía apegarse y a las cuales se sujetó MI DEFENDIDO en sus actuaciones y para el cumplimiento de sus funciones, es en efecto normatividad diferente a la referida por la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ.**

Debe advertirse, para encontrar el acierto de tal afirmación, EL DESARROLLO NORMATIVO CORRESPONDIENTE y que se sigue a continuación, por cuanto es de suma importancia señalar que el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, encontró que: *"En referencia a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales, y con sustento en el artículo 15° de la ley 9 de 1989, reglamentada parcialmente por el Decreto 855 de 1994 y modificado por el artículo 2° del Decreto 4117 de 2006, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá, motivó las consideraciones y argumentos para IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL, a TÍTULO DE CULPA GRAVE, en cuantía ya referida, contra mi PROHIJADO"*.

En punto de dicho contenido legal y el normativo de carácter reglamentario, tomado como sustento para la IMPUTACIÓN de mi DEFENDIDO, (pues así consta y obra en Auto de Imputación N°001 de fecha 26 de febrero de 2024), se tiene entonces que:

La Ley 9 de 1989, que establecía en su:

**"Artículo 15: El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones de conformidad con el artículo 18 de la presente ley...**

Dicha Ley, como en efecto lo señala el DESPACHO, fue parcialmente modificada por el Decreto 855 de 1994, de tal suerte que, en dicho Decreto, respecto del articulado anterior, se expresó:

**Artículo 15.** Para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo, que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad.

Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con tal fin, una persona natural o jurídica experta en la materia.

Se acota, no obstante, que la Ley 388 de 1997, ya había introducido modificación sustancial, por cuanto ésta, modificó la ley 9 de 1989, en donde a tenor de lo expresado en su artículo 138, las disposiciones de la misma, sustituyeron expresamente las disposiciones contenidas entre otros, en el Inciso 1 del Artículo 15 de la ley 9 de 1989. En la ley 388 de 1997, que ha sufrido adiciones hasta la fecha, se encuentra contenido el Artículo 61, a partir del cual se introdujeron modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9 de 1989 y contenido en su Capítulo III. Así las cosas, destaca en dicho articulado:

**L. 388 de 1997/ARTÍCULO 61.-** Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9 de 1989: " El precio de adquisición será igual al valor comercial

357

determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, **o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno**"...

Luego, dicho articulado así contenido en el Decreto 855 de 1994, fue modificado por el Artículo 2º del DECRETO 4117 DE 2006. En dicho DECRETO, se expresó:

**Artículo 2º.** El artículo 15 del Decreto 855 de 1994 quedará así:

**"Artículo 15.** Avalúo de bienes inmuebles. Para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.

**Parágrafo.** Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles".

**Recordemos que es hasta aquí, el sustento legal a que hizo mención el Ente Acusador**"**"En referencia a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales", esto es, el artículo 15º de la ley 9 de 1989, reglamentada parcialmente por el Decreto 855 de 1994 y modificado por el artículo 2º del Decreto 4117 de 2006, para reprochar la conducta de mi PROHIJADO, quien debía, según el CRITERIO del DESPACHO que hace la IMPUTACIÓN, seguir las reglas que se establecían en su contenido. Sin embargo, debe tener en cuenta el fallador, que la norma preexistente al hecho que se le imputa a mi defendido, no es ésta, pues, como se verá a continuación:**

**El DECRETO 4117 de noviembre de 2006, fue DEROGADO expresamente por el Artículo 83 del Decreto Nacional 066 de 2008, en los siguientes términos:**

**"Artículo 83.** Derogatoria y vigencias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación **y deroga expresamente** el artículo 25 del Decreto 679 de 1994, **los Decretos 855 de 1994**, 1898 de 1994, 329 de 1995, 1275 de 1995, 287 de 1996 salvo sus artículos 3º y 4º, 2964 de 1997, 1436 de 1998, 2334 de 1999, 2170 de 2002 salvo sus artículos 6º, 9º y 24; 3740 de 2004, 2503 de 2005, 219 de 2006, 959 de 2006, 2434 de 2006, **4117 de 2006**, 4375 de 2006 y 499 de 2007 y las demás normas que le sean contrarias.

**Por su parte, el Decreto Nacional 066 de 2008, "Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y**

**se dictan otras disposiciones", contempló en su Artículo 82 "Arrendamiento y adquisición de inmuebles":**

*Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa.*

*Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad.*

*Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con el fin, un experto avalado por el Registro Nacional de Avaluadores. El estudio previo se pronunciará sobre la posibilidad o no de obtener varias ofertas según la necesidad que la entidad deba atender, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la adquisición deba tener lugar. Así mismo y en el evento de concluir la posibilidad de obtenerlas, determinará la manera de compararlas.*

*A pesar de lo anterior, **salvo el Artículo 83, todo lo contenido en el Decreto 066 de 2008, fue DEROGADO en su integridad, por el Artículo 92 del Decreto 2474 de 2008.** En dicho DECRETO, se encuentra contenido el Artículo 83, que fuera posteriormente modificado por el Artículo 4º del DECRETO NACIONAL 3576 de 2009, así:*

**Artículo 4º.** Modifíquese el artículo 83 del Decreto 2474 de 2008, el cual quedará así:

**"Artículo 83. Arrendamiento y adquisición de inmuebles.** Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa.

*Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores. (...)*

Obsérvese que hasta éste punto los decretos anteriores y que fueran tenidos en cuenta por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá como Sustento jurídico para su argumentación y a partir de las cuales se hacía el Reproche correspondiente a la Administración Municipal en cabeza de mi Prohijado por no acatar lo que éstos contenían y para arribar con ello, finalmente a la IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL a título de CULPA GRAVE, en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/Cte.

358

COP. en su contra, ya se encontraban derogados por la entrada en vigencia del **Decreto Nacional 066 de enero de 2008**.

**Pues bien**, con la entrada en vigencia del **DECRETO NACIONAL 734 de 2012**, a partir de su publicación en el diario oficial 48400 de abril 13 de 2012, y a partir de lo contenido en su Artículo 9.2, que derogó en su integridad las disposiciones vigentes de un gran compendio de Decretos, entre los que se cuentan: **El Decreto 066 de 2008, Decreto 2474 de 2008 y se daría también, la derogación del decreto 3576 de 2009.**

**Téngase en cuenta**, que **El Decreto Nacional 734 de 2012**, era en efecto el compendio normativo y reglamentario vigente para la época de los hechos, esto es, la vigencia del año 2012. Recuérdese que el Avalúo realizado por el PERITO AVALUADOR, **Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, a quien** acudiera mi PROHIJADO, como Alcalde y Representante Legal del municipio de El Paujil, **elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DEL PREDIO** al que se ha hecho mención - y, que fuera adquirido posteriormente por parte del Municipio- **el día 10 de mayo de 2012.**

De hecho, el Decreto Nacional 734, **"Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones"**, vigente desde el día 13 de abril de 2012 hasta antes del 17 de julio de 2013, fecha en la cual entró en vigor el Decreto 1510 de 2013, señalaba en la Subsección VI **"Del Arrendamiento y la adquisición de inmuebles"**:

**Artículo 3.4.2.6.1. Arrendamiento y adquisición de inmuebles.** Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, **las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa.**

Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín **Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.**

**En contraste con lo argüido por el DESPACHO que hiciera la IMPUTACIÓN, se colige de la normatividad vigente para la época en la cual se realizó el avalúo (12 de mayo de 2012), esto es, la precitada en el Artículo 3.4.2.6.1. del Decreto Nacional 734 y no la referida por la Honorable Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en punto de las reglas contenidas en los Decretos 855 de 1994 y 4117 de 2006, por encontrarse Derogados desde el año 2008, que:**

- a) **Para efectos de la adquisición del inmueble el municipio debía solicitar un avalúo comercial, el cual serviría como base para la negociación. Cosa que, en efecto, así se hizo.**
- b) **Dicho Avalúo podría ser adelantado bien sea por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado.**

Efectivamente, mi Prohijado acudió, con la debida sujeción y apego a lo así establecido, optando por la Persona Natural de Carácter Privado, se insiste, porque así lo permite la norma.

- c) **La persona natural o jurídica de carácter privado encargada de adelantar el Avalúo, debía estar o encontrarse registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.** Cosa que efectivamente se comprobó y se demostró con suficiencia en el Apartado Segundo, Respecto de **"La Idoneidad del PERITO AVALUADOR"**, de quien se corroboró, como así obra en las Capturas de Imagen N.º11 y 12, incorporadas en el presente Escrito, respecto de Certificación Contenida en el Expediente del Proceso de la Referencia y de la Cual se cuestiona el SUSCRITO, no se haya realizado la valoración debida por parte del DESPACHO que hiciera la IMPUTACIÓN, pues, en la misma se aprecia, que el Señor INGENIERO CIVIL **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.541.581 de Popayán, para la época en la que elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, esto es, el día 10 de mayo de 2012, "sí contaba con APROBACIÓN COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA" y contaba con Registro en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A., con Matrícula R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012. Registro cuya existencia fue corroborada y Certificada por el CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004. Razones, todas éstas, para desvirtuar las presunciones manifestadas por el DESPACHO, quien, para IMPUTAR, realizó ponderaciones sin sustento bajo la expresión "PRESUNTAMENTE NO CONTABA", pudiendo con ello, inducir al error y restar el mérito que le corresponde y que debe ser observado, se solicita de manera reiterativa y respetuosa, por el FALLADOR, en punto de la ya ACREDITADA IDONEIDAD del Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, quien, también, acorde con los criterios de contenido reglamentario así contenidos en el **Artículo 3.4.2.6.1. del Decreto Nacional 734, "se encontraba facultado y habilitado para "avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general, a nivel Nacional"** (Véanse Capturas N.º 11 y 12).

Por tanto, no se hacían necesarias para la Administración Municipal, en cabeza de mi Defendido, como tampoco podía exigírsele a éste, por parte de la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA de RESPONSABILIDAD FISCAL, que obrara de conformidad con los parámetros legales establecidos en norma DEROGADA.

Se tiene, en virtud de lo contenido en el expediente del proceso de la referencia, que mi Defendido, obró con apego a lo establecido en el Decreto Nacional 734 de 2012, vigente para la época de los hechos. Ello, toda vez que acudió a persona natural de carácter privado, esto es, El Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, persona

registrada en el Registro Nacional de Avaluadores, quien, como ya se dijo, contaba con APROBACIÓN COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA. Aprobación certificada por el CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004.

Nótese que, CONTRARIO A LAS MANIFESTACIONES Y ARGUMENTOS esgrimidos por el DESPACHO en su Auto de Imputación del 26 de febrero de 2024, el Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, para la fecha en que elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DEL PREDIO al que se ha hecho mención y que fuera adquirido posteriormente por parte del Municipio, contaba con Registro en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES: R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012.

De lo anterior se colige, como ya fue referido en apartado anterior: **i) LA IDONEIDAD** del Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, **ii)** que el mismo se encontraba facultado para "avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional", pues su registro se encontraba vigente (Véase la Captura N.º 11), **iii)** que contrario a lo manifestado en Auto de Imputación N.º 001, mi Representado, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, obró con estricto apego a lo contenido en Decreto Reglamentario, expedido por el Señor Presidente de la República, en ejercicio de las facultades legales que a éste se le confieren por virtud del numeral 11 del artículo 189 superior y con vigencia en la época en que ocurrieron los hechos. **iv)** No puede desconocerse entonces, que mi PROHIJADO, **sí cumplió con los deberes señalados por la Constitución y la ley Respecto a seguir sus actuaciones con apego a la normativa vigente.** Es de allí que se predica que el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, "asumió con la debida responsabilidad la disposición y control de los bienes del municipio", por cuanto, es con apego a la Ley y no de otra forma, como se garantiza el cumplimiento de las funciones encomendadas, incluso, en el ejercicio de la función fiscal. No olvidemos también, que es en la Ley, en donde se prevén, además, los principios que rigen tales actuaciones. Si el honorable DESPACHO consideró la presunta existencia del Daño, debió advertir también, que mi PROHIJADO actuó de conformidad con lo establecido en el contenido de carácter reglamentario que se encontraba Vigente al acto que se le imputa. *Lamentablemente, tal IMPUTACIÓN, como se ha visto, no obró de conformidad con las leyes preexistentes y en cambio encontró sustento, en norma DEROGADA, distinta a la que se encontraba vigente para la fecha 10 de mayo de 2012, cuando se realizó el avalúo y la cual se sujetó con apego irrestricto mi Prohijado.*

Todas las anteriores, son razones suficientes que desvirtúan lo argumentado por la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá, quien, en desacuerdo lamentable, imputó responsabilidad fiscal a mi Prohijado, con sustento en las reglas establecidas en contenido normativo que no podía aplicarse, por cuanto se encontraba DEROGADO.

**En síntesis:** i) Mi prohijado no estaba obligado a acudir exclusivamente ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que previa solicitud a éste, el mismo, realizara el avalúo. ii) Tampoco le era exigible que agotara los términos establecidos de 15 días hábiles en caso de no obtener respuesta por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o esperar pronunciamiento alguno del Instituto, que diera cuenta de la imposibilidad del mismo para hacer dicho avalúo, para poder, en dicho caso, acudir ante persona natural o jurídica de carácter privado y así, adelantar el avalúo requerido. iii) Tampoco se requería que la persona en cuestión, debiera encontrarse registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde se encuentra ubicado el bien para adelantar dichos avalúos, por cuanto sólo bastaba que la persona encargada de hacer el avalúo, se encontrara registrada en el Registro Nacional de Avaluadores. iv) No se requería elevar solicitud alguna a FEDELONJAS, como tampoco, autorización por parte de esta o que la misma, delegara a dicha persona. Todo lo anterior, se insiste, por encontrarse contenido en los decretos 855 de 1994 y 4117 de 2006, derogados desde 2008, que no eran aplicables y por cuanto los criterios que acogió la administración municipal, en cabeza de mi Defendido y que debían ser acatados, corresponden a los establecidos en el Decreto Nacional 734 de 2012, vigente para la época de los hechos.

Al respecto y en punto del reproche que se le hace a mi Prohijado y por el cual se le imputa RESPONSABILIDAD FISCAL a TÍTULO DE CULPA GRAVE, con sustento en compendio normativo DEROGADO, como en efecto ya fue argumentado, se advierte vulneración del Debido Proceso, derecho de carácter fundamental, establecido en el Artículo 29, superior y cuyo tenor señala:

*"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.*

*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.*

En consecuencia, **La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica)**, advierte en su Artículo 25 **"que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante jueces o tribunales que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales"**

Con relación al derecho al debido proceso, derecho fundamental extensible y con aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, en **sentencia C-341 de 2014, la honorable Corte Constitucional**, ha sido enfática en señalar:

### **5.3. El derecho al debido proceso:**

5.3.1. El debido proceso como derecho fundamental, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, y como primer elemento cabe resaltar su aplicación no solo para los juicios y procedimientos judiciales, sino también para todas las actuaciones administrativas, cuando establece que: "El

debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas" ...

5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

En dicha sentencia, también precisó la Honorable Corte:

"Hacen parte de las garantías del debido proceso:

(i) El derecho a la jurisdicción, ... **a obtener decisiones motivadas (...)**

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, **conforme a los imperativos del orden jurídico**, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

Así mismo, es oportuno considerar que, de conformidad con lo Establecido **Sentencia C-710/01, respecto del principio constitucional de legalidad, la honorable Corte Constitucional indicó que dicho principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas.** Señaló, además, que la consagración constitucional del principio de legalidad, define la relación entre el individuo y el Estado al prescribir que **el uso del poder de coerción será legítimo solamente si está previamente autorizado por la ley. De allí que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa.**

**El solo hecho de haberse imputado Responsabilidad Fiscal** en contra de mi Prohijado por parte de la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, con sustento en normatividad cuya aplicación no era exigible al momento de la ocurrencia de los hechos que ésta señala para determinarla, **motivando sus decisiones para IMPUTAR en procedimientos y reglas que se encontraban derogadas y que NO tenían por qué haber sido observadas por mi REPRESENTADO, IMPLICA**, advierte el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, **una clara vulneración al principio de Legalidad contenido en el Artículo 29 superior, por cuanto Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa.**

No en vano, lo contenido en el **Artículo 2º de la ley 610 de 2000, "Principios orientadores de la acción fiscal"**, en cuyo contenido se advierte que **"En el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos, entre otros, en el artículo 29 Superior"**

No puede perderse de vista que, al respecto, la **Honorable Corte Constitucional en sentencia C-428 de 2019**, advierte que:

**"El principio de legalidad como principio rector del ejercicio del poder estatal para restringir derechos se deriva de los artículos 6°, 29 y 122 de la Constitución e implica que los servidores públicos solo pueden hacer lo prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en el ordenamiento jurídico. De este modo, (i) se protege la dignidad humana, al reconocer la capacidad de las personas para ajustar su conducta a las prescripciones de las normas; (ii) se evita la arbitrariedad, tan ajena a la noción de Estado de derecho; (iii) se asegura la igualdad en la aplicación de las normas y, por esta vía, se refuerza la legitimidad del Estado; y (iv) se fortalece la idea de que en un Estado de derecho el principio general es la libertad"**

Contrario al reproche que hiciera la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá, el Señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, Alcalde y Ordenador del Gasto del Municipio de El Paujil Caquetá, obró con apego estricto al contenido de carácter reglamentario que sí estaba vigente y al cual debía sujetarse para el cumplimiento de las funciones respecto del acto que hoy, sin sustento jurídico y, por tanto, faltando al principio de legalidad se le imputa.

**Es preciso señalar que en virtud de lo consagrado en el numeral 1 del Artículo 315 Superior. Corresponde al alcalde "Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo".** Mi Prohijado, desplegó sus actuaciones, entre ellas, las contenidas también en el Numeral 3 Ibidem, respecto de la dirección de la acción administrativa del municipio, del cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios a su cargo, con apego a lo establecido en la norma vigente y no tenía por qué sujetarse a los procedimientos establecidos en aquellas que no lo estaban, como así pretende hacerlo ver el Despacho de la Contraloría Departamental en su Imputación.

Nótese que mi Prohijado ordenó los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto, que, para ello, contó con la aprobación conferida por parte del Concejo municipal a través de acuerdo aprobado en dos debates, con consecutivo N.º 11 de fecha 22 de junio de 2012, **"Por medio del cual se autorizó al Alcalde del municipio de El Paujil, Departamento del Caquetá, para adquirir un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda"**.

Es imperativo traer a colación, que, **si bien la Compra se realizó en el año 2013, tanto el Avalúo comercial, así como las actuaciones que permitieron la aprobación para la compra del bien inmueble, respecto de las cuales hizo reproche el DESPACHO, se surtieron en vigencia del año 2012, de ello, obra constancia suficiente en el expediente del proceso de la referencia,** como a continuación se expone a partir de apartes extraídos de los documentos **"INFORME AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES y ACUERDO N.º 011, de fecha 22 de junio de 2012: (Ver capturas 22 y 23)**

361

**FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO**  
**INGENIERA CIVIL**

Avalúos en general, Interventorías, acueductos, vías, vivienda.

**INFORME DE AVALÚOS DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES**

1. INFORMACIÓN BÁSICA			
DOCUMENTO SOLICITUD DE AVALÚO		OFICINA	SOLICITANTE
Solicitud de servicio		FLORENCIA	ALCALDIA DE PAUJIL
NOMBRE DEL PREDIO			ESCRITURA No.
LA BONANZA			450
NOTARIA No.	No. CATASTRAL	FECHA DE ESCRITURA	MATRÍCULA INMOB
Segunda del Circulo de Florencia	00 01 00031-0004- (00)	19 de Marzo de 2010	440 88285
VEREDA:		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
El Borugo		El Paujil	Cauqueta
NOMBRE DEL PROPIETARIO		NIT DEL SOLICITANTE	TELÉFONO
LUIS FERNANDO LEE DIAZ		800095763-0	984314080
DIRECCIÓN DEL PREDIO:			
Dentro de la cabecera Municipal de El Paujil, se toma la vía lleva al barrio 1 de Mayo, carrera 4E, hasta llegar al límite del perímetro urbano, en la zona que colinda con la vereda El Borugo.			
DOCUMENTOS REVISADOS PARA EL AVALÚO			
Escritura Publica No 450 del 19 de marzo de 2010, Notaria Segunda Florencia.			
FECHA DE VISITA		FECHA INFORME	
5 de Mayo de 2012		10 de Mayo de 2012	
2. INFORMACIÓN DEL SECTOR			
2.1 DESARROLLO			
El sector donde se ubica el predio objeto de avalúo se caracteriza por poseer viviendas dispersas construidas en un solo nivel con techos de Zinc, paredes y piso en maderas cortadas en el mismo sector. Los terrenos con			

Captura N.º 22



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ  
MUNICIPIO DE EL PAUJIL  
CONCEJO MUNICIPAL**

**ACUERDO N° 011  
(22 de Junio de 2012)**

**"Por medio del cual se autoriza al Alcalde de el municipio de El Paujil, departamento del Caquetá, para adquirir un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda".**

**El Concejo Municipal de El Paujil**  
En ejercicio de sus facultades que le otorga la ley 136 de 1994, la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 13333 de 1986

**ACUERDA**

**Artículo Primero:** Autorizar al alcalde municipal de el Paujil, Departamento del Caquetá, para que con el lleno de todos los requisitos legales, presupuestales y técnicos, adquiera a nombre del Municipio un terreno, previos estudios técnicos adelantados por la Secretaría de Planeación Municipal, para ejecutar los programas de Vivienda de Interés Social y/o interés prioritario, consignados en el plan de desarrollo

**Artículo Segundo:** El presente acuerdo rige a partir de su fecha de sanción y publicación.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚPLASE**

Presentado al Honorable Concejo de El Paujil, Caquetá a los 22 días del mes de Junio del 2012.

  
**ANGÉLICA MARIA HENAO TORRES**  
Presidenta Concejo Municipal

  
**MARY ROMERO PERLA**  
Secretaria Concejo Municipal

**Captura N.º 23**

También, que mi PROHIJADO, obrando de conformidad con dicha autorización, acompañado por la supervisión de la Secretaría de Planeación Municipal, estipulando

además, "la obligación al vendedor para que permitiera la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a estas la información y documentación que solicitaran en relación con el contrato que se suscribió y su ejecución, procedió a realizar los actos que materializaron la compra venta del bien inmueble tantas veces referido. De la autorización emitida por parte del Concejo municipal, así como de la Supervisión ejercida por el señor EDINSON CUESTA MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía N.º 91.322.202 de Puerto Wilches, Secretario de Planeación Municipal y de la estipulación contenida en la Cláusula Décimo Cuarta respecto de la vigilancia de las veedurías ciudadanas, obra constancia en apartes de los documentos contrato de Promesa de Compraventa N.º 001 y Escritura Pública N.º 3078 del 26 de diciembre de 2013, que se exhiben a continuación (Ver capturas 24, 25 y 26):


aplicación a lo dispuesto por el artículo 9º de la misma ley.

**DECIMA TERCERA. – INDEMNIDAD:** EL VENDEDOR mantendrá indemne al COMPRADOR de cualquier daño o perjuicio originado de reclamaciones de terceros que tengan como causa toda acción u omisión del VENDEDOR, subcontratista, proveedores o dependientes a su cargo y que con ellas haya ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios materiales y/o morales en la integridad personal y/o patrimonial de los mencionados terceros durante la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 5.1.6. del Decreto 734 de 2012.

**DECIMA CUARTA. – VEEDURÍA CIUDADANA:** El VENDEDOR se obliga a permitir la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a éstas la información y documentación que soliciten en relación con el presente contrato y su ejecución.

**DÉCIMA QUINTA. – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El COMPRADOR pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al RUBRO: Código: 020204050201020103, Denominado: "Planes y proyectos para la adquisición de vivienda" del presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia fiscal del año 2013, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 02 de Mayo de 2013.

Captura N.º 24

 República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	<b>CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA</b>
	Página 4 de 4
<b>CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA No. 001</b>	
<b>FECHA: DICIEMBRE 26 DE 2013</b>	

**Notificación de Supervisor del Contrato:**

Mediante mi firma en el presente documento me doy por notificado en la fecha, de mi designación como Supervisor del presente Contrato de Arrendamiento, por parte del señor Alcalde Municipal, por lo cual declaro estar en el deber de asumir las funciones señaladas en el inciso segundo del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.


Nombre:

Firma:

Cargo:

C.C.

Fecha:

  
 Secretario de Planeación Municipal  
 De Puerto Wilches  
 26 de diciembre del 2013.

Captura N.º 25

SEGUNDO - Venta Parcial: Que actuando en su condición de Vendedor(a) y debidamente autorizado según Resolución No. 019 del 17 de diciembre de 2013, emanada de Secretaría de Planeación Municipal de El Paujil - Caquetá, y Autorización de Fraccionamiento emanada de la Dirección Territorial de Caquetá del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural "INCODER", documentos que se agregan al protocolo del presente instrumento, transfiere a título de compraventa Parcial a favor del MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETÁ,

Identificado con NIT: 800.095.763-0, representado en éste acto por el señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT, mayor de edad, domiciliado(a) en el municipio de El Paujil y de paso por ésta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.533 expedida en Florencia, en su condición de Alcalde Popular y Representante Legal del Municipio de El Paujil - Caquetá, lo cual acredita con certificación expedida por la Gobernación del Caquetá y debidamente facultado mediante Acuerdo No. 11 del 22 de junio de 2012 emanado del concejo municipal de El Paujil - Caquetá, documentos que se protocolizan junto

Captura N.º 26

Que la compra realizada, fue elevada a instrumento público, de conformidad con la normatividad vigente para la época y **que medió la correspondiente autorización por parte del INCODER, así como de la Oficina de Planeación a través de Resolución 019 del 17 de Diciembre de 2013**, como consta en los apartes de los documentos Escritura Pública N.º 3078 del 26 de diciembre de 2013, Formulario de Calificación CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN F.M.I 420-109661 que se exhiben a continuación (**Ver capturas 27 y 28**):

PROTÓCOLO

Se presentan para agregar al protocolo: \_\_\_\_\_

1. Comprobantes requeridos (Art. 44 del Decreto 960 de 1970): - Paz y Salvo Prédial del 26 de diciembre de 2013, expedido por la Oficina de Recaudo Municipal de El Paujil - Caquetá, a favor de LUIS FERNANDO LEE DIAZ identificado con cc: 96.332.390, sobre el predio identificado con Ficha Catastral No. 00-01-0003-0004-000, avaluado en 95.900.000 por el año 2013, válido hasta el 31 de diciembre de 2013. NOTA: No se cobra Valorización. \_\_\_\_\_
2. Fotocopias de cédulas de ciudadanía de los comparecientes. \_\_\_\_\_
3. Certificación expedida el 26 de diciembre de 2013 por la Gobernación del Caquetá, en la cual se hace constar que el señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT, se desempeña actualmente como Alcalde Popular del Municipio de El Paujil - Caquetá. \_\_\_\_\_

4. Copia del Rut del municipio de El Paujil - Caquetá. \_\_\_\_\_

5. Resolución No. 019 del 17 de diciembre de 2013, emanada de Secretaría de Planeación Municipal de El Paujil - Caquetá. \_\_\_\_\_

6. Autorización de Fraccionamiento emanada de la Dirección Territorial de Caquetá del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural "INCODER". 7. Constancia de Reparto. 8. Acuerdo municipal No. 11 del 2012, por el cual se faculta al Alcalde Municipal para firmar el presente Instrumento. 9. Certificado de Libertad y Tradición. \_\_\_\_\_

Esta escritura se hizo conforme a datos suministrados por los comparecientes, se autoriza y firma en las hojas de papel Notarial números: \_\_\_\_\_

Papel notarial para una escritura pública - No tiene costo para el usuario

**Nro Matricula: 420-109661**

CIRCULO DE REGISTRO 420 FLORENCIA No. Catastro.  
MUNICIPIO EL PAJUIL DEPARTAMENTO CAQUETA VEREDA: EL BORUGO TIPO PREDIO: RURAL

DIRECCION DEL INMUEBLE  
1. LOTE 1

ANOTACION Nro 3 Fecha 27/12/2013 Radicación 2013-420-6-9583

DOC ESCRITURA 3078 DEL 26/12/2013 NOTARIA SEGUNDA DE FLORENCIA VALOR ACTO: \$ 240.000.000

ESPECIFICACION MODO DE ADQUISICION : 0126 COMPRAVENTA PARCIAL - 6 HAS CONFORME A LA RESOL.019

DEL 17-12-2013 EMANADA DE PLANEACION MPAL Y AUTORIZACION DEL INCODER

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE ARCILA PUENTES HERIBERTO CC# 6681291

A MUNICIPIO DE EL PAJUIL NIT# 8000957630

FOLIOS DERIVADOS DE LA ANOTACION

42-109661

Captura N.º 28

Que para el pago de la Obligación por concepto de Compra-venta del bien inmueble adquirido al señor ARCILA PUENTES, la administración destinó los recursos correspondientes para el pago y de ello obra constancia en comprobante de pago N.º 3783, el cual fue firmado también por el señor TESORERO MUNICIPAL, el REVISOR CONTABLE y el beneficiario del pago. Así obra constancia en el documento que se exhibe a continuación (Ver Capturas N.º 29 y 30):

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA  
MUNICIPIO DE EL PAJUIL  
TESORERIA MUNICIPAL  
NIT: 800,095,763-0

COMPROBANTE DE PAGO No. 3783

FECHA: 2013/12/30	BANCO: CTA 1336-6 DIAGRAMIO
BENEFICIARIO: ARCILA PUENTES HERIBERTO	CHEQUE: 1296
IDENTIFICACION: 6,681,291	DEPENDENCIA: Administracion Central
DIRECCION	VALOR DEL GIRO: \$ 237,600,000.00
TELEFONO	

LA SUMA DE: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESO M/CTE

FOR CONCEPTO DE:	VALOR
2401010100 CANCELA FACTURA No.	240,000,000.00
2436120000 Enajenación de propiedades, pl	(2,400,000.00)
CONCEPTO:	
PAGO COMPRAVENTA TERRENO MATRICULA INMOBILIARIA No 420-109661, CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA, SEGUN RECURSOS DE REGALIAS	

Captura N.º 29

364

**DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**  
**MUNICIPIO DE EL PAUJIL**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIT: 800,095,763-0

COMPROBANTE DE PAGO No.

3783

FECHA:	2013/12/30	BANCO:	CTA 1336-6 DIAGRARIO
BENEFICIARIO:	ARCILA PUEBLOS HERIBERTO	CHEQUE:	1296
IDENTIFICACION:	6,681,291	DEPENDENCIA:	Administración Central
DIRECCIÓN		VALOR DEL GIRO:	\$ 237,600,000.00
TELÉFONO			
LA SUMA DE: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESO M/CTE			
POR CONCEPTO DE:			VALOR
2401010100	CANCELA FACTURA No.		240,000,000.00
2436120000	Enajenación de propiedades, pl		(2,400,000.00)
CONCEPTO:			
PAGO COMPRAVENTA TERRENO MATRICULA INMOBILIARIA No 420-109661, CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA, SEGUN RECURSOS DE REGALIAS			
<p align="center"> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>  <b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b>  <b>MUNICIPIO DE EL PAUJIL</b>  <b>NIT. 800,095,763-0</b>  <b>FIEL COPIA TOMADO DEL ORIGINAL</b>  <b>FECHA: 09 SEP 2014</b>  <b>FIRMA: [Firma]</b>  <b>SECRETARIO DE GOBIERNO</b> </p>			
<b>RODRIGO A. CASTRO BETANCOURT</b> ALCALDE MUNICIPAL Ordenado		<b>JOSE DAIME SANCHEZ TORRES</b> TESORERO MUNICIPAL Elaboro	<b>EFREN DIAZ GARCIA</b> ASESOR CONTABLE Revisó
<b>FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO MIT o C.</b> <b>Recibo Cheque y Comprobante de Pago</b>			

**Captura N.º 30**

Aquí, se hace pertinente señalar, que en consideración de lo precitado en punto de las Atribuciones del Alcalde, contenidas en el Artículo 315 Superior, también, en virtud de lo establecido en el artículo 23 "De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales" de la ley 80 de 1993, así como en lo reglamentado en el Decreto **Nacional 734 de 2012**, se logra establecer que el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en el cumplimiento de sus funciones y su gestión como Alcalde del Municipio de El Paujil, y respecto de los señalamientos realizados por la **Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá**:

**PRIMERO:** Respaldó su gestión en los conocimientos del **INGENIERO CIVIL FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, persona idónea que reunía los requisitos legales exigidos en el Decreto Nacional 734 de 2012, por cuanto **para la fecha en la cual fuera realizado el avalúo, esto es, el 10 de mayo de 2012:**

- a) Se encontraba debidamente registrado en el Registro Nacional de Avaluadores con **MATRÍCULA R.N.A/C.C-25-1885 VIGENTE para la fecha y habilitado para "avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional", como así consta en CERTIFICACIÓN expedida por la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", de la cual era miembro activo desde el año 2004, y en la cual, además, consta que se comprobó su idoneidad como PERITO AVALUADOR PROFESIONAL"**
- b) A través de éste **PERITO AVALUADOR PROFESIONAL**, se obtuvo el respectivo informe de **AVALÚO COMERCIAL** del bien inmueble con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285**, el cual consta de 6 hectáreas, ubicado en la vereda el Borugo del municipio de El Paujil y del cual, posterior a la celebración de la Compra-venta, realizada al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.681 291, contando con la debida autorización por parte de la Secretaría de Planeación, así como la de Fraccionamiento emitida por el INCODER, se desprendería la **MATRÍCULA INMOBILIARIA N.º 420-109661 como así obra en la Oficina de Instrumentos Públicos.**
- c) A diferencia del Avalúo realizado por el IGAC, cuya investigación de mercado se hizo de manera indirecta, **a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET", El avalúo realizado por el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL requerido por la Administración Municipal, cuenta con una investigación económica comparativa de mercados realizada de manera directa en el lugar en donde se encuentra ubicado el predio adquirido, en la cual, "Para efectos de establecer el valor del terreno se tuvieron en cuenta las características propias del mismo, las vías de acceso, estado de aprovechamiento del predio, la consulta de conocedores del sector, con conocedores del mercado inmobiliario. Se trabajó con 3 variables estadísticas una de medida de tendencia central y dos de dispersión que son: Media aritmética, desviación Standard y coeficiente de variación, el cual se acepta en la toma de decisiones por ser inferior a 7.5%".**
- d) El Avalúo elaborado y suscrito por el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL, requerido por la Administración Municipal, fue realizado con apego al criterio definido en el Artículo 2º del Decreto Reglamentario 1420 de 1998.

**SEGUNDO:** No obró a su voluntad y desplegó su gestión con la aprobación, acompañamiento y supervisión del Concejo Municipal y de la Secretaría de Planeación, por cuanto:

- a) Contó con autorización respectiva, emanada del **CONCEJO MUNICIPAL, quien a través de Acuerdo** aprobado en dos debates, con consecutivo N.º 11 de fecha 22

de junio de 2012, "Por medio del cual se autorizó al Alcalde del municipio de El Paujil, Departamento del Caquetá, para adquirir un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda"

- b) Contó con la Supervisión y la aprobación de funcionarios de la Administración Municipal, como, por ejemplo, la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO, ejercida por el señor EDINSON CUESTA MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía N.º 91.322.202 de Puerto Wilches**, quien acompañó y supervisó el proceso de adquisición del mismo.
- c) Como así consta en la cláusula DÉCIMA CUARTA del contrato de promesa de compra venta N.º 001 de fecha diciembre 26 de 2013, estipuló la obligación al vendedor para que permitiera la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a estas la información y documentación que solicitaran en relación con el contrato que se suscribía y su ejecución.
- d) La Compra Venta, cuenta, además, con autorización para el Fraccionamiento del predio por parte del INCODER, así como de la Oficina de Planeación a través de Resolución 019 del 17 de diciembre de 2013.

**TERCERO:** Resulta oportuno observar también, los fines esenciales y relativos al **ESTADO SOCIAL DE DERECHO** que persiguió la **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**, por intermedio de mi Defendido, en aras de la concreción de lo estructurado en el plan de desarrollo, en materia de proyectos de vivienda de interés prioritario.

En punto de lo referido, hay razones para desvirtuar los señalamientos realizados por el **ENTE ACUSADOR**, pues es claro que mi Prohijado, observó en buena forma una gestión eficiente, responsable y transparente, no sólo actuó con apego a la legalidad como fue referido, también, basó sus actuaciones en la buena fe. Mi DEFENDIDO, obró de conformidad a los postulados de buena fé, por cuanto como así lo consideró **la Sala de Consulta del Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil en Concepto C.E. 811 de 1996:** "El principio general del derecho engendra una apreciación jurídica de contenido más amplio tendiente a que toda persona en razón de su actividad ejecute actos jurídicos lo haga motivado por una actitud honesta, leal desprovista de cualquier intención dolosa o culposa; lo que jurídicamente implica la honradez de toda relación jurídica manifestada en su doble dirección: el ejercicio del derecho de buena fe o el cumplimiento de la prestación derivada de la obligación que la causa, lo que debe también ejecutarse de buena fe" Nótese, que respecto de las actuaciones adelantadas por mi prohijado, no obra en el expediente prueba que demuestre un obrar contrario a dichos postulados o elementos contrarios a esa actitud honesta, leal al Municipio y desprovista de cualquier asomo de intenciones dolosas o culposas en el ejercicio de sus funciones.

Se destaca en sus actuaciones como Alcalde del Municipio de El Paujil, que buscó, además, garantizar, el principio de economía. Tal afirmación, a contrario sensu a lo argumentado por la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, se evidencia a través del informe de Avalúo que presentara el **INGENIERO CIVIL FERNANDO GUSTAVO**

**MARTÍNEZ BRAVO**, en quien, por contar con la idoneidad y la acreditación requerida, depositó mi prohijado una confianza legítima y quien, con su informe, aportó a ese ánimo e interés de la administración municipal en evitar una gestión antieconómica, la cual es manifiesta y palpable, precisamente, en virtud de la **investigación económica comparativa de mercados realizada de manera directa en el lugar en donde se encuentra ubicado el predio adquirido, para establecer** el valor real, esto es, el avalúo exacto del predio, que habría de comprar la Administración y que, conforme a los postulados y principios referidos, mi Prohijado, en su calidad de Ordenador del Gasto, así lo hizo.

Es claro, a partir de lo señalado, que el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, no buscó, **NI CAUSÓ**, ningún detrimento al patrimonio del **ESTADO, NI AFECTÓ** al **MUNICIPIO DE EL PAUJIL**. **No infringió** la Constitución ni las leyes, ni tampoco omitió o se extralimitó en el ejercicio de sus funciones.

Que, en virtud de las actuaciones desplegadas por éste, el sustento legal y probatorio al que se ha hecho referencia en el presente escrito, como así se evidencia en las imágenes (CAPTURAS) incorporadas en el mismo y que advierten de la existencia de medios de prueba suficientes para corroborar la idoneidad del Avaluador, la transparencia de lo actuado, en cuya constatación, emerge notoria un gestión económica favorable a los intereses del Estado y del Municipio, que no constituye daño y de la cual, por el apego que se evidencia en su actuación y en la forma como fue llevado a cabo cada procedimiento con estricta sujeción al contenido normativo de carácter reglamentario preexistente al momento de la ocurrencia de los hechos señalados por el ente acusador, permiten colegir que no se puede imputar la responsabilidad fiscal, como así lo expuso en sus consideraciones la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá. Huelga decir, que corresponde al DESPACHO que hizo la IMPUTACIÓN, *"observar en sus decisiones y motivaciones, pleno apego al principio de legalidad, cuyo orden es Constitucional y constituye garantía verdadera en la actuación procesal y en el ejercicio de la acción fiscal, de cara a las prerrogativas que le asisten a mi Prohijado"*.

Nótese que, de conformidad con el desarrollo normativo expuesto, se corrobora en primera instancia, que no hay lugar a la IMPUTACIÓN de mi DEFENDIDO. Que el mismo, contrario a lo referido por el DESPACHO, **cumplió con los deberes señalados por la Constitución y la ley Respecto a seguir sus actuaciones a la normativa vigente. El punto es que mi PROHIJADO así lo hizo**. En segundo lugar, se corrobora que no se actuó por parte del Titular de la Acción Fiscal, de conformidad con los postulados de Legalidad, necesarios en sus actuaciones. **Es por ello y no por otra razón, que Corresponde al DESPACHO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL**, en ejercicio de la titularidad de la Responsabilidad Fiscal, por cuanto se han aportado en el presente escrito, los argumentos de Defensa con rigor jurídico suficiente y que desvirtúan las imputaciones formuladas por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá en su Auto de Imputación N.º 001 de fecha 26 de febrero de 2024, obrar consecuentemente como en efecto se solicitará, para que se remedien los actos contrarios a la dignidad de la Justicia, la lealtad, probidad y buena fé, que no fueron observados por parte del Despacho que realizó la IMPUTACIÓN.

En tal sentido, Fundado en la argumentación esgrimida, cuyo sustento jurídico, alcance y efecto, no se puede desconocer, solicitará el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, se prevea por parte del funcionario Competente, en los términos de lo así estipulado en el **Artículo 25. Protección Judicial** de la **CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS**, los artículos 29, 122, 230 y 315, de orden Constitucional, los artículos 26, 32 de la ley 610 de 2000, también, del artículo 23 ibidem, por cuanto se requiere de Prueba para responsabilizar que conduzca a la certeza del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado, habida cuenta que, demostrándose un obrar recto por parte de mi Defendido, con apego a la Constitución y a la ley, que desvirtúa los elementos Constitutivos de Responsabilidad Fiscal como así se establece en el **Artículo 5° de la Ley 610 de 2000, invocando la necesidad urgente para que en su obrar, el ente acusador observe los principios orientadores de la acción Fiscal, preceptuados en el Artículo 2°, especialmente, los referentes al principio de legalidad implícito en el Debido Proceso, derecho de carácter fundamental que exige a la Contraloría Departamental del Caquetá, a instancias del Proceso de Responsabilidad Fiscal que se adelanta contra mi Prohijado, "le juzgue de conformidad a leyes preexistentes al acto que se le imputa" y como ha sido ampliamente demostrado en el presente escrito, que la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá se apartó de dichos postulados y que con sustento en norma derogada motivó las decisiones que le llevaron a IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL contra el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, "proceda a corregir de manera inmediata y aplique, en virtud de la Remisión Normativa contenida en el Artículo 66 de la ley 610 de 2000, lo contenido en el Numeral 3 del Artículo 42 del Código General del Proceso, para que se remedien los actos contrarios a la dignidad de la Justicia, la lealtad, probidad y buena fé, que no fueron observados por parte del Ente Acusador y que invocan la real necesidad de subsanar la falta de legalidad en las motivaciones y cargos enrostrados en contra de mi Representado.**

**Subsanación y remedio, que encuentra su materialización en lo establecido en los artículos 47 y 54 de la Ley 610 de 2000 y por el cual, el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, de manera respetuosa, se permite allegar las siguientes:**

## V. SOLICITUDES

**PRIMERA: CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL** por cuanto, en virtud de lo que se advierte a partir de lo contenido en las TREINTA (30) Capturas de imagen incorporadas en el presente documento y de los argumentos con rigor jurídico suficiente que han sido aportados y que las acompañan, se ha probado que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial y en tal sentido, **SE PROFIERA el AUTO DE ARCHIVO del proceso de la Referencia**, con sujeción a lo consagrado en los términos del **Artículo 47 de la ley 610 de 2000.**

**SEGUNDA:** Como petición subsidiaria, en caso de despachar desfavorable la petición anterior, le ruego en consecuencia, Se **PROFIERA FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL**, en favor del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.691.533 de Florencia, por obrar elementos de prueba y argumentación jurídica suficiente, que demuestran que no existe prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal y,

principalmente, la inobservancia del principio de Legalidad por cuanto no se juzgó a mi DEFENDIDO conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y a partir de las cuales se desvirtúan por sí solas, las imputaciones formuladas con sustento en contenido normativo DEROGADO, por parte de la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en contra de mi DEFENDIDO.

**TERCERA:** En virtud del Derecho de Defensa y Contradicción contenido en el Artículo 29 Constitucional, también en consideración del Artículo 32 de la ley 610 de 2000, **SEAN VALORADOS**, en su conjunto, para su decisión, conforme a lo preceptuado en el artículo 26 ibidem, todas las capturas de imagen incorporadas en el presente escrito y los argumentos y consideraciones aportados en el mismo, con los cuales se busca la defensa real de las garantías, prerrogativas y derechos de orden constitucional que le son inherentes al señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, *mi defendido* y que han sido vulnerados por el DESPACHO que profirió la IMPUTACIÓN, a instancias del Proceso de Responsabilidad Fiscal N.º 1148 que se adelanta en su contra.

## VI. PRUEBAS:

### Documentales:

Los documentos mencionados, cuyas capturas de imagen, desde la Captura N.º 1 hasta la N.º 30, en total treinta (30) capturas, fueron incorporadas en el presente escrito De Argumentos de Defensa cuya valoración se solicita, más no su práctica, pues fueron tomadas del expediente que reposa en el Despacho de la Contraloría Departamental y se encuentran por tanto dichos documentos, contenidos en el EXPEDIENTE del PROCESO de la Referencia PRF-1148, razón por la cual, los mismos, no se adjuntan en el presente apartado.

### Testimoniales:

Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.541.581 de Popayán. Su testimonio es conducente, pertinente y útil, toda vez que esta persona fue quien *elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO*, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

De dicha persona a partir del Informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales entregado a la Administración y del cual se encuentra copia contenida en el expediente del Proceso de la Referencia, se advierte que éste relaciona Dirección de Oficina en la Carrera 30 bis N.º 2E-38 de Florencia – Caquetá y número de Celular con Abonado N.º 312 312 73 02.

367

## VII. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificación, a través de alguno de los siguientes medios:

- Correo electrónico: [john.ortiz@udla.edu.co](mailto:john.ortiz@udla.edu.co) • Teléfono: 3185494034
- Dirección: Carrera 11 No. 5-69 Consultorio Jurídico, Campus Sede-Centro Universidad de la Amazonia, Florencia-Caquetá.

Respetuosamente,



**JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR**

Defensor de Oficio

Cédula de ciudadanía 11.449.452 de Facatativá Cundinamarca

Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Amazonia

Adscrito al Consultorio Jurídico Código Estudiantil N°1910087014

Número de Celular 318 549 4034 e-mail Institucional: [john.ortiz@udla.edu.co](mailto:john.ortiz@udla.edu.co)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONSTANCIA SECRETARIAL

Florencia, 12 de marzo del 2024

REFERENCIA: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Que el día 11 de marzo del 2024 el estudiante **JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR** defensor de oficio del señor **RODRIGO ANDREA CASTRO BETANCOURTH**, presento en términos argumentos de defender contra el auto de imputación mixta N° 001 del 26 de febrero del 2024.

Que el día 11 de marzo del 2024 vencieron en silencio los términos con los que contaba los demás implicados frente al Auto de la Imputación Mixta N° 001 del 26 de febrero del 2024

CONSTE



**LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO**

Secretaria

Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal

---

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS  
PUBLICOS**



MEMORANDO

PF-051

Florencia, 12 de marzo del 2024

PARA: Contralor Departamental del Caquetá  
DE: secretaria, Dirección Técnica de Responsabilidad fiscal  
ASUNTO: Grado de Consulta  
Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

De manera atenta remito a su despacho el Proceso de Responsabilidad Fiscal Expuesta en el asunto, para que Surta Grado de Consulta, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la ley 610 del 2000.

Cordial saludo



**LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO**  
Secretaria  
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal

Anexo: 02 cuaderno de (369) folios  
1 CMC de (27) folios

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS  
PUBLICOS**



**RESOLUCIÓN No.114**

**(21 marzo de 2024)**

Por la cual se surte el grado de consulta en el proceso de responsabilidad fiscal ordinario de única instancia No. 1148 cuya decisión fue archivo en el auto de imputación No.001 del 26 de febrero de 2024

**EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Constitución Política, artículo 18 de la ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011, resuelve:

**I. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:**

No. del Proceso	1148
Entidad Afectada	Municipio de Paujil
Cuantía del Daño sin Indexar	\$96.032.548 MCTE
Presuntos Responsables Fiscales	RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT con C.C. No. 17.691.533 Y HERIBERTO ARCILA PUENTES con C.C. No.6.681.291
Tercero Civilmente Responsable	Compañía de Seguros Solidaria de Colombia

**II. ANTECEDENTES:**

1. Originó la presente investigación la denuncia D003-16 mediante el cual se estableció que el municipio de el Paujil suscribió el contrato de compraventa No. 001 del 26 de abril de diciembre de 2013 con el señor HERIBERTO ARCILA PUENTES con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable y través del cual fue adquirido presuntamente son sobrecosto en cuantía de \$96.032.548 MCTE
2. Auto de Apertura No.025 del 18 de diciembre de 2018, del Proceso de Responsabilidad Fiscal No 1148 (folios 228-233).

**"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"**

3. Auto No. 034 del 30 de septiembre de 2019 designa defensor de oficio (folios 244-246)
4. Notificación por Estado No. 075 del 01 de octubre de 2019 (folio 247)
5. Diligencia de posesión del defensor de oficio del señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT (folio 249)
6. Diligencia de posesión del defensor de oficio del señor HERIBERTO ARCILA PUENTES (folio 251)
7. Auto suspensión de términos (folio 257)
8. Auto reanudación (folio 259)
9. Diligencia de posesión del estudiante STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ (folio 262)
10. Diligencia de posesión del estudiante JHON EDWIN ORTIZ CUELLAR (folio 279)
11. Diligencia de versión libre del señor HERIBERTO ARCILA PUENTES (folios 292-293)
12. Auto de imputación mixto No. 001 del 26 de febrero de 2024 (folios 295-330)
13. Mediante memorando PF-051 del 12 de marzo de 2024 se traslado al despacho del contralor para grado de consulta (folio 369)

### III. CONSIDERACIONES:

#### 1. Procedencia de la Consulta.

La Ley 610 de 2000 que establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, en su artículo 18, prescribe lo siguiente, así:

*"Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta **cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio.** Para efectos de la consulta, el funcionario que haya proferido la decisión deberá enviar el expediente dentro de los tres (3) días siguientes a su superior funcional o jerárquico, según la estructura y manual de funciones de cada órgano fiscalizador. Si transcurrido un mes de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la respectiva providencia, quedará en firme el fallo o auto materia de la consulta, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario moroso".*

**"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"**



Nit. 891.190.246-1

Continuación resolución No. 114 del 21/03/2024

3

Teniendo en cuenta que el auto de imputación mixto No.001 del 26 de febrero de 2024 decidió archivar el presente proceso a favor del señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291, por lo tanto se cumple uno de los requisitos exigidos por la norma para adelantar el grado de consulta, habilitando a este Despacho para decidir el mismo.

## 2. Objeto de la Consulta.

De igual manera, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, establece el objeto de la consulta:

*"Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio. Para efectos de la consulta, el funcionario que haya proferido la decisión deberá enviar el expediente dentro de los tres (3) días siguientes a su superior funcional o jerárquico, según la estructura y manual de funciones de cada órgano fiscalizador. Si transcurrido un mes de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la respectiva providencia, quedará en firme el fallo o auto materia de la consulta, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario moroso (...)"*

Es decir, el legislador a través de este mecanismo procesal propendió por la protección no sólo del ordenamiento jurídico y el esmero de los postulados orientadores del proceso de responsabilidad fiscal, sino también la correcta aplicación de los derechos esenciales que cobijan a los sujetos inmersos en el marco de la Ley 610 de 2000, cuya competencia radica en el superior jerárquico de quien profirió la decisión:

*"El grado de consulta es el mecanismo creado por el legislador para que, en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal, el superior de quien profiere una decisión que consista en el archivo, fallo sin responsabilidad fiscal o fallo con responsabilidad fiscal, según sea el caso, la modifique, confirme o revoque. En esta perspectiva resulta evidente que el competente para resolver el grado de consulta es el superior jerárquico o funcional de quien profirió la decisión. [...]"*

Dicha revisión no debe confundirse en ninguna manera con un recurso:

**"3.2.1. La consulta, como institución procesal, no está consagrada como un medio de impugnación o recurso ordinario al alcance de las partes. Opera como una especie de revisión por ministerio de la ley, tanto desde su consagración original en el Decreto 2158 de 1948[4] como actualmente. El entonces Tribunal Supremo de Justicia, consideró respecto de este mecanismo procesal, en Sentencia de julio 30 de 1985, Sala de Casación en lo Civil, lo siguiente:**

<sup>1</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala. Bogotá, D.C., 22 de octubre de 2015. Radicación número: 63001-23-31-000-2008-00156-01.

### "EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"



Nit. 891.190.246-1

Continuación resolución No. 114 del 21/03/2024

4

"La consulta, que no es ciertamente un recurso, sino un segundo grado de competencia funcional, está destinada a que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, en determinados negocios y según la índole de la decisión tomada. Aunque la consulta procede en las hipótesis precedentes, no hay lugar a ella cuando la parte, en cuyo beneficio se ha consagrado, ha interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia del a quo, porque si el objetivo de aquélla es dar origen a una segunda instancia y obtener una revisión oficiosa del fallo, tal objetivo se cumple con la interposición del recurso de alzada." (Subraya fuera de texto)

i. **Pese a que la jurisprudencia ha considerado que este mecanismo de control jurisdiccional de consulta no es propiamente un medio de impugnación, cuenta con una estrecha relación con los principios de derecho de defensa, debido proceso y doble instancia, sin que a la misma le sean aplicables todos los principios y garantías de la apelación, tanto así, que el juez que asume conocimiento en grado de consulta no está limitado por el principio de non reformatio in pejus, sino que oficiosamente puede hacer una revisión del fallo.** Esta Corporación en la sentencia C-583 de 1997 al examinar la constitucionalidad una disposición del Código de Procedimiento Penal, expresó en lo atinente a la relación de la consulta y la prohibición de reforma en perjuicio, que:

"Cuando el superior conoce en grado de consulta de una decisión determinada, está facultado para examinar en forma íntegra el fallo del inferior, tanto por aspectos de hecho como de derecho y, al no estar sujeto a observar la prohibición contenida en el artículo 31 de la Carta, bien puede el juez de segunda instancia modificar la decisión consultada a favor o en contra del procesado, sin violar por ello norma constitucional alguna. La autorización que se otorga en el precepto demandado al superior para que al decidir la consulta se pronuncie "sin limitación" alguna sobre la providencia dictada por el inferior, no lesiona la Ley Suprema, pues de su propia esencia se deriva la capacidad del funcionario de segunda instancia para revisar íntegramente la providencia consultada con el único objetivo de corregir los errores en que haya podido incurrir el fallador de primera instancia. De esta manera se busca evitar que se profieran decisiones violatorias no sólo de derechos fundamentales sino de cualquier otro precepto constitucional o legal, en detrimento del procesado o de la sociedad misma como sujeto perjudicado con el delito. El propósito de la consulta es lograr que se dicten decisiones justas. Y la justicia es fin esencial del Estado." (Subrayas fuera de texto)

3.2.3. De igual modo, la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del principio de consonancia en las sentencias de segunda instancia -artículo 35 de la Ley 712 de 2001- declaró su exequibilidad a través de la sentencia C-968 de 2003, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador. Adicionalmente, en dicha oportunidad, este Tribunal se refirió al grado jurisdiccional de consulta en los siguientes términos:

X

**"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"**



Nit. 891.190.246-1

Continuación resolución No. 114 del 21/03/2024

5

A diferencia de la apelación, la consulta no es un medio de impugnación sino una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. (Subraya fuera de texto)

La consulta es un mecanismo ope legis, esto es, opera por ministerio de la ley y, por tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por ésta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas. Además, la consulta está consagrada en los estatutos procesales generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate.

La jurisprudencia constitucional ha expresado que la consulta no es un auténtico recurso sino un grado jurisdiccional que habilita al superior jerárquico para revisar la legalidad de algunas providencias, por mandato de la ley y sin que medie impugnación por parte del sujeto procesal que se considere agraviado." (Subraya fuera de texto)

3.2.4. Lo anterior, se puede resumir en que el grado jurisdiccional de consulta (i) no es un recurso ordinario o extraordinario, sino un mecanismo de revisión oficioso que se activa sin intervención de las partes; (ii) es un examen automático que opera por ministerio de la ley para proteger los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles de los trabajadores y la defensa de la justicia efectiva y, (iii) al ser un control integral para corregir los errores en que haya podido incurrir el fallador de primera instancia, no está sujeto al principio de non reformatio in pejus.<sup>2</sup> (Negrillas fuera del texto).

Finalmente, se consuma el grado de consulta como:

"Respecto del grado de consulta, este Despacho en concepto 110.17.2020, concluyó:

De la normativa, jurisprudencia y doctrina conceptual relacionada, se obtiene respecto del grado de consulta en el proceso de responsabilidad fiscal, que i) está instituido en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales; ii) procede en los casos específicamente determinados por la ley; iii) el superior que conoce de él, cuenta con amplias

<sup>2</sup> Corte Constitucional. Sentencia C 424 de 2015.



Continuación resolución No. 114 del 21/03/2024

6

*facultades para tomar decisiones respecto de lo consultado, incluso sin estar sujeto al principio de non reformatio in pejus; iv) en desarrollo de esas facultades, el superior puede confirmar, modificar e incluso revocar la decisión objeto de consulta; v) lo decidido por el superior, es vinculante para el a quo; y vi) se debe decidir dentro de un término legal establecido, so pena de quedar en firme la decisión consultada.”<sup>3</sup>*

## 2.1. Defensa del interés público.

No existe en el mundo jurídico colombiano un concepto expreso que describa el interés público, puede entonces asimilarse al del interés general, interés nacional o interés social:

*“El concepto de interés general es una cláusula más indeterminada cuyo contenido ha de hacerse explícito en cada caso concreto. Entre tanto, el de “interés social”, que la Constitución emplea es una concreción del interés general que se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de derecho.*

(...)

*Es precisamente el carácter jurídicamente abstracto e indeterminado del concepto de interés general, lo que ha llevado a que las constituciones liberales modernas consideren la necesidad de armonizarlo con los derechos individuales y con el valor social que tiene la diversidad cultural. Por ello, constituye un requisito indispensable para la aplicación de la máxima de la prevalencia del interés general, que el operador jurídico analice minuciosamente las particularidades de cada caso, intente armonizar el interés general con los derechos de los particulares y, en caso de no ser posible, lo pondere teniendo en cuenta la jerarquía de valores propia de la Constitución.”<sup>4</sup> (Subrayas fuera del texto).*

Una aproximación doctrinal puede ser:

*“En síntesis, el interés público será aquella materia que se resuelve en decisión política gubernamental –nacional, regional o municipal– y también en el ámbito legislativo y jurisdiccional, que satisface al máximo los intereses de la comunidad involucrada, que se concibe y ejecuta mediante procedimientos jurídicos preestablecidos, con participación de los gobernados, y que tiene por finalidad última evitar conflictos políticos, religiosos, económicos, sociales y culturales y perfeccionar el bienestar de la población o de segmentos de esta última.*

(...)

*7ª La defensa del interés público es un bien jurídico de carácter colectivo, cuya titularidad puede ser ejercida por un individuo o la comunidad ante cualquier órgano competente del Estado. Diversas*

<sup>3</sup> Auditoría General de la República. Concepto 110.29.2020 del 09 de julio de 2020. Radicado No: 20201100015441.

<sup>4</sup> Corte Constitucional. Sentencia C 053 de 2001.



Continuación resolución No. 114 del 21/03/2024

7

*medidas han perfeccionado el acceso a la defensa del interés público: la amplificación de la representatividad política, subsanar las deficiencias en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales estatales, establecer organismos fiscalizadores del quehacer del Estado, fin al secretismo de los actos emanados de los órganos públicos."*<sup>5</sup> (Subrayas impropias).

Ahora bien, de la lectura de la Ley 610 de 2000 que se estatuye como el marco normativo del proceso que nos ocupa, se tiene que el proceso de responsabilidad fiscal determina la responsabilidad de los servidores públicos cuando en el ejercicio de la gestión fiscal causen daño patrimonial (artículo 1); entonces es la gestión fiscal el factor determinante para encausar el concepto de interés público:

**"Artículo 3º. Gestión fiscal.** Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales."

Corolario de lo anterior, se puede sugerir que la defensa del interés público es la correcta aplicación de los recursos o fondos públicos, su recaudación, manejo e inversión en procura de la consecución de los fines esenciales del Estado.

Entonces, en el sub examine se encuentra satisfecha la defensa del interés público como requisito legal del artículo 18 de la Ley 610 de 2020, al asumir conocimiento de la denuncia D003-16 mediante el cual se estableció que el municipio de el Paujil suscribió el contrato de compraventa No. 001 del 26 de abril de diciembre de 2013 con el señor HERIBERTO ARCILA PUENTES con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable y través del cual fue adquirido presuntamente son sobrecosto en cuantía de \$96.032.548 MCTE.

Evidencia este despacho que el auto de apertura No. 025 del 18 de abril de 2018, determino que el presunto detrimento al Estado el correspondía la suma de \$96.032.548 MCTE., presunto detrimento que constata mediante la diferencia establecida entre los avalúos determinados por el Instituto Agustin Codazzi y el avalúo Fernando gustavo Martinez bravo, conforme al comprobante de pago No. 3783 de fecha 30 de diciembre de 2013, por valor de \$143.967.452 MCTE., se vislumbra la falta en que incurrió el señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT quien se desempeñó como Alcalde para la época de los hechos, quien ostento la calidad de gestor fiscal quien suscribió la promesa de compraventa del bien inmueble Lote No. 1 con matricula inmobiliaria No. 420-109661 y que posteriormente fue consolidado el negocio jurídico de compraventa a través de la escritura publica No. 3078 y respecto al señor HERIBERTO ARCILA PUENTES, evidencia este despacho que actuó en condición de vendedor del

<sup>5</sup> Jorge Correa Fontecilla. Jefe de la División de Coordinación e Información Jurídica de la Contraloría General de la República de Chile. "Algunas consideraciones sobre el interés público en la Política y el Derecho". Páginas 140 y 160.

#### **"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"**

bien inmueble por lo tanto es claro que no contempla la calidad de gestor fiscal toda vez que quien desborda los alcances de la gestión fiscal es el señor alcalde para la época de los hechos y fue quien adelanto las acciones conducentes para la determinación del avalúo comercial del bien inmueble y por lo tanto el señor ARCILA PUENTES no fue receptor de anticipos y no se procederá a imputar responsabilidad fiscal en su contra.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 47 de la ley 610 de 2000, se procede a archivar el proceso por cesación de la acción fiscal.

"Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió que no es constitutivo de detrimento patrimonial o **no comporta el ejercicio de gestión fiscal**, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o perseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma". Negrilla y subrayado fuera del texto original).

En consecuencia, este Despacho confirma la postura de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal.

## 2.2. Defensa del ordenamiento jurídico.

El ordenamiento jurídico se concibe mediante un continuo axiológico: en un extremo se aprecian reglas y, en el otro, principios y valores; en forma similar lo determina la Real Academia de la Lengua Española:

*"Conjunto de reglas escritas, principios y valores que regulan la organización del poder, las relaciones con los ciudadanos y las garantías de los derechos y las relaciones entre estos, así como ordenan las políticas públicas en beneficio del interés general."*

Dicha sistematización normativa prevé una jerarquía (artículo 4 constitucional) que no siendo expreso su orden en la mayoría de las veces, si es tácita conforme a la lectura de la Carta:

*"El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que emana de la propia Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa que determine dicho orden, de su articulado puede deducirse su existencia, así no siempre resulte sencilla esta tarea. En efecto, diversas disposiciones superiores se refieren a la sujeción de cierto rango de normas frente a otras. Además de ser evidente que las normas constitucionales ocupan, sin discusión, el primer lugar dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico, dentro de la propia Carta, no todas las normas son igualmente prevalentes. Pero más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se desprende que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de competencias que le asigna la Constitución, ocupan, en principio, una posición prevalente en la escala normativa frente al resto del ordenamiento jurídico. Así las cosas, tenemos que los actos administrativos de contenido normativo, deben tener por objeto el obedecimiento y cumplimiento de la ley, de donde se deduce su sujeción a aquella. Tenemos entonces que, de manera general, la normatividad jurídica emanada de autoridades administrativas o de entes autónomos, debe acatar las disposiciones de la ley, tanto en su sentido material como formal. Aunque existe una jerarquía normativa que se desprende de la Constitución, ella*

---

### "EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

*no abarca, de manera completa, la posición de todas y cada una de las disposiciones que conforman el orden jurídico; es decir el orden de prevalencia normativa no ha sido señalado en su totalidad por el constituyente. (...)*

*La unidad del sistema jurídico, y su coherencia y armonía, dependen de la característica de ordenamiento de tipo jerárquico de que se reviste. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en dicha escala jerárquica. Las de inferior categoría, deben resultar acordes con las superiores, y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular. En esto consiste la connotación de sistema de que se reviste el ordenamiento, que garantiza su coherencia interna. La finalidad de esta armonía explícitamente buscada, no es otra que la de establecer un orden que permita regular conforme a un mismo sistema axiológico, las distintas situaciones de hecho llamadas a ser normadas por el ordenamiento jurídico.”<sup>6</sup>*

Se colige de lo precedente que, la defensa del ordenamiento jurídico conlleva la correcta aplicación de las normas, principios y valores que presuponen un manejo de herramientas legales para la decisión de los asuntos entre las autoridades, los ciudadanos y el interés general.

Ahora bien, revisada la fundamentación normativa contentiva en el auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 se encuentran plasmadas y aplicadas correctamente las disposiciones constitucionales de los artículos 29, 267, 268 y 272, las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011 y 687 de 2001 modificada por la Ley 1276 de 2009, Decreto 2785 de 2011, usando criterios auxiliares como la jurisprudencia en Sentencias C – 549 de 1993 y SU – 620 de 1996, C – 713 de 1999 y C – 840 de 2001 de la Corte Constitucional; que en forma armoniosa permitieron adelantar y llevar hasta el auto de imputación mixto No. 001 del 26 de febrero de 2024 dentro del presente procedimiento de responsabilidad fiscal, cumpliéndose así la defensa del ordenamiento jurídico instituido como requisito en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.

### **2.3. Defensa de los derechos y garantías fundamentales.**

La Constitución Política de 1991, en su artículo 29 instituyó el debido proceso como una garantía ius fundamental:

*“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.*

*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.*

*En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.*

<sup>6</sup> Corte Constitucional. Sentencia C – 037 de 2000.

*Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.*

*Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso."*

Este derecho y principio de rango constitucional irradia todas las actuaciones judiciales y administrativas que adelantan todas las autoridades en el territorio nacional, así, por ejemplo, lo dispuso el Legislador en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000:

**"Artículo 2º. Principios orientadores de la acción fiscal.** En el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo."

El precedente tiene sustento jurisprudencial según los siguientes pronunciamientos de la Corte Constitucional:

*"En este orden de ideas, el cumplimiento de las garantías mínimas del debido proceso contempladas en la Constitución, tendrán diversos matices según el derecho de que se trate, dado que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible encontrar "reglas y procedimientos" de otros órdenes como el civil, el administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el económico, entre otros, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que deberán ser contemplados en la regulación de sus propias reglas."*

*"El debido proceso constituye un conjunto de garantías destinadas a la protección del ciudadano vinculado o eventualmente sujeto a una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio. En consecuencia, implica para quien asume la dirección del procedimiento la obligación de observar, en todos sus actos, la plenitud de las formas previamente establecidas en la Ley o en los reglamentos. Esto, con el fin de preservar los derechos de quienes se encuentran incurso en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o una obligación o a la imposición de una sanción.*

*Bajo la acepción anterior, el debido proceso se resuelve en un desarrollo del principio de legalidad, en la medida en que representa un límite al poder del Estado. De esta manera, las autoridades estatales no pueden actuar a voluntad o arbitrariamente, sino únicamente dentro de las estrictas reglas*

<sup>7</sup> Corte Constitucional. Sentencia C – 248 de 2013.

380



Nit. 891.190.246-1

Continuación resolución No. 114 del 21/03/2024

11

*procedimentales y de contenido sustancial definidas por la Ley. La manera de adelantar las diferentes etapas de un trámite, de garantizar el derecho de defensa, de interponer los recursos y las acciones correspondientes, de cumplir el principio de publicidad, etc., se encuentra debidamente prevista por el Legislador y con sujeción a ella deben proceder los jueces o los funcionarios administrativos correspondientes.<sup>8</sup>*

*"El derecho al debido proceso, como desarrollo del principio de legalidad y como pilar primordial del ejercicio de las funciones públicas, es un derecho fundamental que tiene por objeto la preservación y efectiva realización de la justicia material. Este derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite al ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones administrativas, como en las de carácter jurisdiccional.*

*Adicionalmente, esta Corporación ha expuesto en forma reiterativa, que el derecho al debido proceso está conformado por un conjunto de garantías que tienden por el respeto y protección de los derechos de los individuos que se encuentran incurso en una determinada actuación de carácter judicial o administrativa; y en virtud de las cuales, las autoridades estatales cuentan con la obligación de ajustar su accionar conforme a los procedimientos contemplados para cada tipo de trámite.<sup>9</sup>*

Ahora bien, el debido proceso conlleva inmerso otros derechos o garantías:

*"La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso:*

*(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;*

*(ii) El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;*

*(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado*

<sup>8</sup> Corte Constitucional. Sentencia C – 163 de 2019.

<sup>9</sup> Corte Constitucional. Sentencia T – 115 de 2018.

**"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"**

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá

Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

www.cdc.gov.co

*cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;*

*(iv) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;*

*(v) El derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y*

*(vi) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas."<sup>10</sup>*

Conforme a la enumeración anterior, se revisará el debido proceso en el caso que nos ocupa:

Los numerales i) y iv) se encuentran garantizados por cuanto las disímiles decisiones adoptadas en el curso del proceso fueron adoptadas en los términos fijados en la ley, motivados conforme a la normatividad aplicable al caso y fueron notificadas en debida forma.

Los numerales ii), v) y vi) se tienen asegurados al decidir en única instancia la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal el proceso de responsabilidad fiscal y en grado de consulta el Contralor Departamental, sin que los funcionarios que ocuparon y/o ocupan dichos cargos, tengan impedimentos o recusaciones frente al asunto, procurando así que sus decisiones no se encuentren sujetas a ningún interés personal o particular disímil al interés público.

El numeral iii) se acreditó mediante las diversas notificaciones a los investigados hoy no sancionados para que comparecieran al proceso y rindieran versión libre, formularan descargos y presentaran y/o solicitaran pruebas, incluso mediante la designación de defensor de oficio a través de Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonía.

Por otra parte, según lo expuesto en la introducción de este sub-acápite, el artículo 2 de la Ley 610 de 2020 dispuso que el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal garantizará el debido proceso (que fue expuesto antes inmediatamente) y su trámite su sujetará a los principios de los artículos 29 y 209 constitucionales y del C.P.A.C.A. (artículo 3):

*"Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.*

<sup>10</sup> Corte Constitucional. Sentencia C - 341 de 2014.



Nit. 891.190.246-1

Continuación resolución No. 114 del 21/03/2024

13

*Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley."*

*"Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.*

*Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.*

*1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.*

*En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.*

*2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.*

*3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.*

*4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.*

*5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.*

*6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.*

#### "EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"



Nit. 891.190.246-1

Continuación resolución No. 114 del 21/03/2024

14

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.

10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas."

Los principios contenidos en los artículos 209 constitucional, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 por el auto de imputación mixta No. 001 del 26 de febrero de 2024, se encuentran ajustados en todo el proceso y en especial en el auto que hoy se revisa, conforme lo expuesto; derivación de esto, se halla garantizada la defensa de los derechos y garantías fundamentales en cabeza de este ente de control y por ende, el tercer requisito del grado de consulta contenido en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.

De conformidad con el acervo probatorio antes relacionado y analizado dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal, esta dependencia determina que el daño objeto del alcance fiscal ha sido resarcimiento totalmente.

#### "EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"



Nit. 891.190.246-1

Continuación resolución No. 114 del 21/03/2024

15

Esta decisión se adopta teniendo como fundamento que la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal, es meramente resarcitoria, en síntesis de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuesta en la sentencia C-340 del 2007, indica que la responsabilidad fiscal tiene como principio o razón jurídica la protección del patrimonio económico del Estado. **“...Su finalidad no es sancionatoria, puesto que no se orienta a reprimir una conducta reprochable, sino eminentemente reparatoria...”**, dado que pretende garantizar el patrimonio público frente al daño causado por la gestión fiscal irregular. De la misma forma, se interpreta y lo provee el artículo 4 de la ley 610 de 2000, en el entendido que los daños causados al erario público deben repararse mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido a la entidad pública. (Negrilla fuera del texto original de las comillas).

En este orden de ideas, se colige que la responsabilidad fiscal que se declara a través un proceso fiscal, es eminentemente administrativo, es patrimonial y no sancionatorio, por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; es autónoma e independiente, porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad, con el cual se persigue un fin legítimo de justicia material y la defensa del orden justo y del patrimonio público, que redundará en el beneficio de valores y fines constitucionales de mayor jerarquía como la justicia y el orden justo.

Así las cosas, al demostrarse probatoriamente la inexistencia del daño, no es dable continuar con las diligencias del caso, dado a las reglas consignadas en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000 y lo resuelto por la jurisprudencia constitucional. Toda vez, que las características y fines que persigue el proceso de responsabilidad fiscal, es exclusivamente reparatoria, donde la responsabilidad fiscal que se declara en el proceso es **“esencialmente patrimonial y no sancionatoria”** (Sentencia C-382 del 2008 MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto).

*“ARTICULO 47. AUTO DE ARCHIVO. Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma”.*

Señalar que el trámite de las diligencias y actuaciones realizadas en el presente proceso, fueron llevadas a cabo con la observancia plena de las garantías sustanciales y procesales propias del debido proceso y derecho de defensa. En consecuencia, lo resuelto en esta decisión de la acción fiscal se ajusta a lo dispuesto en acervo probatorio y marco jurídico ya expresado.

En virtud de lo expuesto en las consideraciones antes referidas en la presente Resolución, procede el suscrito Contralor Departamental del Caquetá a confirmar el auto de imputación mixto No. 001 del 26 de febrero de 2024 mediante el cual decide archivar a favor del señor HERIBERTO ARCILA PUENTES identificado con C.C. No. 6.681.291 de manera que conforme lo dicho en la parte motiva del presente auto y a la percepción y señalamiento figurado en las pruebas acercadas al expediente que hacen parte integral del mismo, no hay certeza de la existencia de irregularidad fiscal alguna por los hechos aquí investigados conforme lo enmarca la Ley 610 de 2000.

**“EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS”**

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá

Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

www.cdc.gov.co



Nit. 891.190.246-1

Continuación resolución No. 114 del 21/03/2024

16

Por último, resulta importante resaltar la diligente y cuidadosa labor de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal al analizar el artículo 47 de la Ley 610 de 2000, los elementos de la responsabilidad fiscal (artículo 5 de la Ley 610 de 2000), el material probatorio y régimen legal.

#### IV. DECISIÓN:

Revisada la totalidad del proceso y conforme a los lineamientos fijados en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, los cuales fueron desarrollados en el capítulo III de este grado de consulta, no se advierte irregularidad alguna que invalide lo actuado y por el contrario, se encuentran plenamente garantizadas las defensas del interés público, el ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales, para concluir que se debe confirmar la decisión que se consulta.

En mérito de lo expuesto,

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR** el Auto de imputación mixto No.001 del 26 de febrero 2024 proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 1148

**ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR** por estado la presente decisión en la forma y términos establecidos en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

**ARTÍCULO TERCERO:** Contra la presente decisión no proceden recursos.

**ARTÍCULO CUARTO:** Por secretaria librense los oficios correspondientes, una vez en **FIRME** la presente providencia, **EFFECTUESE** a través de la Secretaría de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, las constancias de Ley y anotaciones en el registro y control que se lleva en la dependencia y trasládese el expediente al archivo central de este Órgano de Control Fiscal para su guarda y custodia conforme la Ley 594 de 2000.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERMES TORRES NÚÑEZ

Contralor Departamental del Caquetá

Proyectó: Antonio Fajardo Rico- Abogado asesor  
Revisó: Hermes Torres Núñez- Contralor Departamental del Caquetá  
Aprobó: Hermes Torres Núñez- Contralor Departamental del Caquetá

**"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"**



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ  
Nit. 891.190.246-1

ESTADO No. 005  
Florencia, 22 de marzo de 2024

No. ESO	No. ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	DECISION	EJECUTADO	CLASE DE PROCESO	RECURSOS QUE PROCEDEN
189	Resolución No. 112	21/03/2024	Por la cual se surte un Grado de Consulta	LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA Y SANDRA MYLENA FLOREZ ULCUE	Fiscal	No proceden
1151	Resolución No. 113	21/03/2024	Por la cual se surte un Grado de Consulta	MARIA SUSANA PORTELA LOZADA Y OTROS	Fiscal	No proceden
1148	Resolución No. 114	21/03/2024	Por la cual se surte un Grado de Consulta	RODRIGO ANDRES CASTRO Y OTROS	Fiscal	No proceden

El presente Estado se fija en lugar visible de la cartelera y pagina web de la Contraloria Departamental del Caquetá, del dia de hoy 22 de marzo de 2024 a las 8:00 a.m.



Laura Patricia Sánchez Artunduaga  
Secretaria

El presente Estado se desfija de la cartelera y pagina web de la Contraloria Departamental del Caquetá, del dia de hoy 22 de marzo de 2024 a las 6:00 p.m.



Laura Patricia Sánchez Artunduaga  
Secretaria

**"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"**

Inicio

Act. Estado Procesos RFC Despa

Modificación: 2024/03/22 05:42:34 - Creación: 2024/03/22 06:42:34

# Estado No 005 del 2024

Fecha de expedición: 2024/03/22 08:00:00

Compartir

Los sujetos procesales que requieran copia de esta providencia pueden solicitarla a través del correo electrónico institucional [info@contralorialeica.queja.gov.co](mailto:info@contralorialeica.queja.gov.co), indicando el nombre del requerente, número de proceso y de la providencia que solicita. De manera excepcional aquellas personas que no posean o dispongan de un medio electrónico, podrán enviar la solicitud por correo electrónico o del domicilio para recibir respuesta.

Archivos para descargar

 estado-005-22-marzo-20...



### CONSTANCIA DE EJECUTORIA

Florencia, 01 de abril de 2024

El día 01 de abril de 2024, a última hora hábil de oficina queda debidamente ejecutoriada la Resolución No. 114 de fecha 21 de marzo de 2024, por la cual se surte un grado de consulta, dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 1148.

Por lo anterior, pasa al despacho de Responsabilidad Fiscal para lo de su competencia y fines pertinentes.

LAURA PATRICIA SANCHEZ A.  
Secretaria de Despacho

**"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"**

*Recibido*  
*01/Abr/2024.*  
*Carne Jeneid 389*

DC – 065

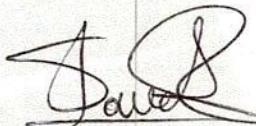
Florencia, 01 de abril 2024

PARA: Herlinda Johana Rivera Ramírez, directora técnica de responsabilidad fiscal  
DE: Despacho Contralor Departamental del Caquetá  
ASUNTO: Traslado Proceso de responsabilidad fiscal No. 1148

Comendidamente remito Proceso de responsabilidad fiscal No. 1148 para la continuación de los trámites correspondientes.

Lo anterior, para lo de su competencia y fines pertinentes.

Cordialmente,



LAURA PATRICIA SANCHEZ A.  
Secretaria Despacho

Anexo: (02) Cuadernos principal con (388) folios  
(1) Cuaderno de medidas cautelares con (27) folios



Nit. 891.190.246-1

AUTO No. 008

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 1148

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:

PRESUNTOS RESPONSABLES	RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH C.C. 17.691.533 HERIBERTO ARCILA PUENTES C.C. 6.681.291
ENTIDAD AFECTADA	MUNICIPIO DE EL PAUJIL
PRESUNTO DETRIMENTO	\$96.032.548 (Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos)
POLIZA No.	930-73-994000000032
ASEGURADORA	Compañía de Seguros Solidaria de Colombia

En la ciudad de Florencia (Caquetá) a los tres (03) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024) la suscrita Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en ejercicio de la competencia establecida en la Ley 610 de 2000, la Ley 1474 de 2011 y la Resolución N. ° 229 del 25 de agosto del 2015, procede a dictar el presente auto teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Originó la presente investigación el memorando CF- 066 del 05 de abril de 2016, por medio del cual la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, remite la denuncia D-003-16, relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en el Municipio de El Paujil.

De acuerdo con el traslado de la denuncia D-003-16, se estableció que el Municipio de El Paujil suscribió el Contrato de Compraventa No. 001 del 26 de diciembre de 2013, con el señor Heriberto Arcila puentes, en cuantía de Doscientos cuarenta Millones de pesos (\$240.000.000) M/Cte., con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del citado ente territorial, el cual fue adquirido presuntamente con sobrecosto en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

El día 18 de septiembre de 2018, a través del Auto No. 025, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal procedió a dar apertura al presente proceso en contra de los señores: **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH**, identificado con la cédula de ciudadanía No.



Nit. 891.190.246-1

17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien se desempeñó para época de ocurrencia de los hechos como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; de acuerdo con el Acta de posesión No. 008 del 31 de diciembre de 2011 (folio 204), y **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291, expedida en El Paujil, Caquetá; quien se desempeñó para la época de los hechos como Contratista (vendedor) del Municipio de El Paujil, Caquetá.

El día veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en ejercicio de las competencias establecidas en la Resolución No. 229 del 25 de agosto de 2015, procedió a dictar **AUTO DE IMPUTACIÓN No. 001 DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO No. 1148.**

Posteriormente el día 11 de marzo de 2024, el defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, el estudiante de Derecho **JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR**, presenta escrito con argumentos de defensa y solicitud de pruebas frente al Auto de imputación No. 001 del 26 de febrero de 2024, de la siguiente manera:

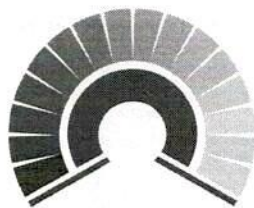
**“Documentales:**

*Los documentos mencionados, cuyas capturas de imagen, desde la Captura N.º1 hasta la N.º. 30, en total treinta (30) capturas, fueron incorporadas en el presente escrito De Argumentos de Defensa cuya valoración se solicita, más no su práctica, pues fueron tomadas del expediente que reposa en el Despacho de la Contraloría Departamental y se encuentran por tanto dichos documentos, contenidos en el EXPEDIENTE del PROCESO de la Referencia PRF-1148, razón por la cual, los mismos, no se adjuntan en el presente apartado.*

**Testimoniales:**

*Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, identificado con cédula de ciudadanía N.º. 10.541.581 de Popayán. Su testimonio es conducente, pertinente y útil, toda vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.*

392



## **CONTRALORÍA**

**DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**

Nit. 891.190.246-1

*De dicha persona a partir del Informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales entregado a la Administración y del cual se encuentra copia contenida en el expediente del Proceso de la Referencia, se advierte que éste relaciona Dirección de Oficina en la Carrera 30 bis N°. 2E-38 de Florencia – Caquetá y número de Celular con Abonado N.º 312 312 73 02.”*

### **CONSIDERACIONES**

Que la vigilancia de la Gestión Fiscal tiene como fin la protección del patrimonio público, la transparencia en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, y la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado. Estas medidas se enmarcan por la concepción del Estado social de derecho, fundado en la prevalencia del interés general, y propenden por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Que el objeto del Control Fiscal es el de asegurar que los recursos del Estado sean manejados y utilizados adecuadamente, para lograr los propósitos esenciales previstos por el constituyente (Constitución Política art. 2º). Para el cumplimiento de este objeto, la vigilancia de la gestión comprende las operaciones fiscales de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, considerando la forma y los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución Política.

Que la Constitución Política de 1991 consagró expresamente el derecho al debido proceso, erigiéndolo como parte de los derechos fundamentales de las personas. Se trata de una garantía que permite a sus titulares conocer previamente las condiciones jurídicas dentro de las cuales serán tramitados sus asuntos, particularmente lo relacionado con la jurisdicción de la autoridad pública ante la cual se actúa, el ámbito de competencias de la misma, los términos dentro de los cuales deberán ser resueltas las peticiones y, en general, todos los aspectos de trámite idóneos como instrumento de protección ante el eventual abuso en que puedan incurrir los agentes del Estado o los particulares en determinados casos. Toda conducta estatal que desconozca los parámetros jurídicos que establecen las reglas de los procesos judiciales o administrativos debe ser censurada y, según el caso, declarada nula por la autoridad competente, pues con ella se habrá causado una grave alteración al vulnerar el orden constitucional. Tal es el sentido del artículo 29 de la Carta Política, que proscribire todo comportamiento ajeno a las reglas del principio de legalidad, según el cual todas las conductas de los agentes públicos deben estar previamente señaladas en la ley o en el reglamento.

Que la responsabilidad fiscal se declara a través del trámite del proceso de responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones materiales y jurídicas que adelantan las



Nit. 891.190.246-1

contralorías con el fin de determinar la responsabilidad que le corresponde a los servidores públicos y a los particulares, por la administración o manejo irregulares de los dineros o bienes públicos. De este modo, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al erario público, por su conducta dolosa o culposa.

Para la estimación del daño debe acudir a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio.

Que en el Proceso de Responsabilidad Fiscal se pueden decretar y practicar pruebas, de conformidad con el artículo 165 de la ley 1562 de 2012, por remisión del artículo 66 de la Ley 610 de 2000, del artículo 40 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 y el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal.

Que la carga probatoria es una facultad discrecional de ofrecer y solicitar pruebas y de intervenir en su práctica. Para que los hechos, cosas y actos que se plantean en el proceso estén debidamente probados, se recurre a la práctica de pruebas. En materia de responsabilidad fiscal le corresponde al Estado, en cabeza del órgano de Control Fiscal correspondiente, probar los hechos investigados.

Que toda autoridad judicial y administrativa debe fundamentar sus decisiones en pruebas legalmente decretadas, oportuna y regularmente allegadas al expediente, las que deberán ser valoradas de acuerdo con la sana crítica.

Que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 174 establece: *"NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y en el artículo 175 señala: MEDIOS DE PRUEBA. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.*

*El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio."*

El debido proceso es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la observancia de las siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o legal (autoridad administrativa competente), favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa,



Nit. 891.190.246-1

(derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con violación del debido proceso, y a interponer recursos contra la decisión condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Que una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, *"de ser oído[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga"* (Sentencia C-617 de 1996).

Que la jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca *"impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado"* (Sentencia C-799 de 2005).

Que la conducencia es «la idoneidad legal que tiene la prueba para demostrar determinado hecho» y la pertinencia «es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste»; pero también puede ocurrir que las pruebas conducentes y pertinentes pueden ser rechazadas por resultar inútiles para el proceso, así «la prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino con relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que éste solo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo<sup>1</sup>».

Que acuerdo a la solicitud de práctica de pruebas solicitadas por el estudiante de Derecho JOHN EDWIN ORTIZ CUÉLLAR, defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, ante Ente de Control, debe señalar este Despacho que el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES, realizado por el evaluador Fernando Gustavo Martínez Bravo, obra a folio 25 al 33, del expediente de responsabilidad fiscal No. 1148, y tal como lo expresa el solicitante se traduce en un **PERITAJE RENDIDO** ante la Administración Municipal de El Paujil, Caquetá y por tanto cualquier interrogatorio sobre el mismo en nada conduce a dilucidar lo propiamente investigado por este Despacho, toda vez que el mismo está refrendado con su firma y dio pie para que el señor Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; procediera a realizar la mencionada compra del bien in mueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 420-109661, cuyo valor comercial alcanzó la cuantía de Doscientos Cuarenta Millones de Pesos (\$240.000.000) M/cte.

<sup>1</sup> Rad. 161 – 4533 (IUS 154274 – 2009) Procuraduría General de la Nación



Nit. 891.190.246-1

En la Copia del informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales, emitida por el Ingeniero Civil Fernando Gustavo Martínez Bravo (folio 25 al 33), se encuentran condensadas todas las razones técnicas, fácticas y jurídicas mediante las cuales estableció dicho avalúo comercial y cualquier interrogatorio acerca de su expedición en nada contribuye al esclarecimiento de los hechos.

Por tanto, así como los jueces hablan a través de sus sentencias, los peritos se expresan través de peritajes realizados. En consecuencia, para este Despacho la prueba solicitada por el defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, se considera inconducente, impertinente e inútil.

Por lo anteriormente expuesto, no se accederá a la solicitud elevada por el defensor de oficio apoderado JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR.

Por lo anteriormente expuesto, no se accederá a la solicitud de prueba testimonial elevadas por el apoderado de defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, el estudiante de Derecho JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal,

### RESUELVE

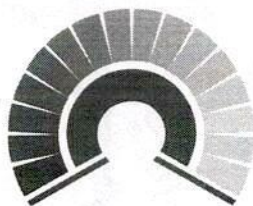
**ARTÍCULO PRIMERO: NIÉGUENSE**, las pruebas testimoniales solicitadas por el estudiante de Derecho John Edwin Ortiz Cuéllar, en calidad de defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, de conformidad con lo señalado en las consideraciones del presente auto.

**ARTICULO SEGURO: NOTIFÍQUESE** por Estado el contenido del presente auto en la forma y términos establecidos en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, y comuníquese a las partes de la siguiente manera:

- 1) Al señor **Rodrigo Andrés Castro Betancourt**, al correo electrónico [rodrigoandrescastro@hotmail.com](mailto:rodrigoandrescastro@hotmail.com), y a través de su defensor de oficio la estudiante de Derecho John Edwin Ortiz Cuéllar, al correo electrónico [john.ortiz@udla.edu.co](mailto:john.ortiz@udla.edu.co) (folio 279).
- 2) Al tercero Civilmente Responsable la compañía de **Seguros Solidaria de Colombia** al correo electrónico [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co).

**ARTÍCULO TERCERO:** Contra el presente auto procede el recurso de reposición ante la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contralora Departamental del Caquetá, toda vez que en el Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, en el Artículo Cuarto se determinó que este Proceso es de única Instancia.

396



# CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

**HERLINDA JOHANA RIVERA RAMÍREZ**  
Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Elaboró:	Edgar Medina Pérez	Profesional Universitario	03-04-24	
Revisó	Herlinda Johana Rivera Ramírez	DTRF.	03-04-24	
Aprobó:	Herlinda Johana Rivera Ramírez	DTRF.	03-04-24	



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

ESTADO NO.021

FLORENCIA, CAQUETÁ DE 04 DEL ABRIL 2024

NO. PROCESO	FECHA AUTO	CLASE DE AUTO	CLASE DE PROCESO	RECURSOS QUE PROCEDEN	RECURSOS QUE NO PROCEDEN
1217-24	03/04/2024	Auto por medio del cual se decreta practica de pruebas y se traslada para presentación de alegatos	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	NO PROCEDEN	NO PROCEDEN
1221-24	03/04/2024	Auto por medio del cual se decreta practica de pruebas y se traslada para presentación de alegatos	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	NO PROCEDEN	NO PROCEDEN
1219-24	03/04/2024	Auto por medio del cual se decreta practica de pruebas y se traslada para presentación de alegatos	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	NO PROCEDEN	NO PROCEDEN
1216-24	03/04/2024	Auto por medio del cual se decreta practica de pruebas y se traslada para presentación de alegatos	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	NO PROCEDEN	NO PROCEDEN
1215-24	03/04/2024	Auto por medio del cual se decreta practica de pruebas y se traslada para presentación de alegatos	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	NO PROCEDEN	NO PROCEDEN
1148	03/04/2024	Auto por medio del cual se resuelve solicitud de pruebas	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Reposición	Reposición

El presente estado se fija en lugar visible de la Cartelera de la Contraloría Departamental del Caquetá y pagina Web, el día (04) de abril de 2024 a las 7:00 a.m.

Los sujetos procesales que requieran copia de esta providencia, en su caso, en las oficinas de la Contraloría Departamental del Caquetá, o a través del correo electrónico institucional [info@contraloriadelcaqueta.gov.co](mailto:info@contraloriadelcaqueta.gov.co), notificando el nombre del requirente, número de proceso y de la providencia que solicita. De manera excepcional aquellas personas que no posean o dispongan de un medio electrónico, podrán enviar la solicitud por correo electrónico o del domicilio para recibir respuesta

LIESEL VILLIETH CORREA FORERO  
Secretaria

El presente estado se desliza a las 6:00 p.m., del día (04) de abril del 2024

LIESEL VILLIETH CORREA FORERO  
Secretaria

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS**

Carrera 13 No 15 - 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia - Caquetá

Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

[info@contraloriadelcaqueta.gov.co](mailto:info@contraloriadelcaqueta.gov.co) @ContraloriaDC

[www.cdc.gov.co](http://www.cdc.gov.co)

Editor 

**E**  
**A**  
**A**  
**30**

**E**  
**A**  
**A**  
**30**

**E**  
**A**  
**A**  
**30**

**E**  
**A**  
**A**  
**30**

**E**  
**A**  
**A**  
**30**



**E**  
**A**  
**A**  
**30**

**E**  
**A**  
**A**  
**30**

**E**  
**A**  
**A**  
**30**

**E**  
**A**  
**A**  
**30**

**E**  
**A**  
**A**  
**30**

**E**  
**A**  
**A**  
**30**



## COMUNICACION DEL AUTO N° 008 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 1148

Liesel Joullieth Correa Forero <lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co>

4 de abril de 2024, 11:26

Para: rodrigoandrescastro@hotmail.com, john.ortiz@udla.edu.co, notificaciones@solidaria.com.co

Buenos días.

Mediante el presente correo esta Contraloría Departamental del Caquetá le comunica el auto mencionado en el asunto el cual fue debidamente notificado en el estado N° 021 del 04/04/2024.

Contra el mismo procede recurso de Reposición ante la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal.

Se anexan 07 folios.

Cordialmente

--



El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

**LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO**

SECRETARIA

Correo:lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co



**AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVEN PRUEBAS DEL PRF 1148\_0001.pdf**  
2401K